

BOLETÍN DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE ESPAÑA

FUNDADA EN BARCELONA
EN AGOSTO DE 1888

Dirección: FERNANDEZ DE LA HOZ, 51
TELÉFONO: 43040

AFILIADA A LA FEDERACIÓN
SINDICAL INTERNACIONAL

FRANQUEO CONCERTADO



El ritmo del trabajo en el puerto.

Unión General de Trabajadores

Reunión ordinaria del Comité nacional

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 de nuestros estatutos, se convoca a reunión ordinaria del Comité nacional para los días 30 y 31 del corriente, en nuestro domicilio social, Fernández de la Hoz, 51.

La reunión dará comienzo a las DIEZ de la mañana del día 30, con sujeción al siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1.º Lectura de actas de reuniones anteriores.
- 2.º Gestión de la Comisión ejecutiva (Memoria).
- 3.º Gestión de los delegados en la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra en el mes de junio último.
- 4.º Gestión de los vocales obreros del Consejo de Trabajo.
- 5.º Propuesta de la Ejecutiva sobre reforma del sistema de cotización.
- 6.º Proposición de la Ejecutiva referente a la fecha de celebración del Congreso ordinario.
- 7.º Reunión del Consejo general de la Federación Sindical Internacional en Londres.
- 8.º Preguntas y proposiciones de los delegados.

Por la Comisión ejecutiva:
El secretario general,

Francisco Largo Caballero.

Madrid, 12 de julio de 1934.



MEMORIA

PALABRAS PREVIAS

La Memoria que presentamos corresponde exclusivamente a la gestión de la actual Comisión ejecutiva, o sea desde el día 4 de febrero hasta el 30 de junio. De actuaciones anteriores ni es nuestra obligación responder ni tenemos elementos de juicio para informar. Por esto nos concretamos a lo que ha sido nuestra gestión. Oportunamente nos dirigimos a los compañeros Trifón Gómez y Antonio Muñoz para que ellos hicieran la parte de la Memoria correspondiente a su gestión. El primero nos comunicó que pasaría por Secretaría para hacer, previa consulta de documentos, la parte que le correspondiera. Hasta el momento de hacer estas líneas no lo ha hecho. En cuanto al segundo, nos contestó que no tenía asunto especial de que dar cuenta.

En su consecuencia, todo cuanto aparece en esta Memoria corresponde a la gestión de la actual Comisión ejecutiva.

ORGANIZACION DE SECRETARIA

Al tomar posesión de sus cargos la nueva Comisión ejecutiva, se tuvo conocimiento de la dimisión del compañero Mariano Rojo, que le fué aceptada. Para sustituirle fué designado el camarada Wenceslao Carrillo, que pasó a tomar posesión de su cargo inmediatamente.

El secretario general se informó de la distribución del trabajo entre el personal de Secretaría y, después de acoplarlo a las necesidades actuales, propuso que se mantuviera el mismo personal, lo que por unanimidad aprobó la Ejecutiva.

* * *

El compañero Caballero dió cuenta de que venía realizando el trabajo de confección del BOLETÍN el compañero Cayetano Redondo; pero, según sus informes, éste había presentado la dimisión a la Ejecutiva anterior. Propone para sustituirle al camarada Pascual Tomás, con la misma asignación que tenía Redondo, o sea 150 pesetas mensuales. Se aprobó por unanimidad.

REFERENDUM SOBRE EL CONGRESO EXTRAORDINARIO

Uno de los asuntos más importantes que la Comisión ejecutiva se encontró planteados al tomar posesión fué el relativo a la convocatoria de un Congreso extraordinario para resolver sobre la actitud que debiera adoptar la Unión General de Trabajadores ante la orientación política que el Gobierno viene dando a la República desde que se constituyó el primer Gabinete Lerroux.

La Ejecutiva anterior, en cumplimiento de acuerdo del Comité nacional, había organizado un referéndum, por medio del cual las Secciones ha-

bían de expresar su criterio, favorable o adverso, a la celebración del Congreso. Pero el referéndum, por la forma en que el boletín de votación fué remitido a las Secciones, no se ajusta a las disposiciones estatutarias. Véase al efecto lo que determinan los estatutos respecto de los Congresos extraordinarios:

«Art. 50. Los Congresos extraordinarios se celebrarán cuando, a petición de una organización o del Comité nacional, *lo acuerde la mayoría de los confederados.*»

La propuesta sobre el Congreso extraordinario fué sometida a referéndum, y los artículos 54 (primer párrafo) y 55 de los estatutos dicen lo siguiente:

«Art. 54. Cuando se tomen acuerdos de importancia por escasa mayoría, el Congreso podrá acordar someter el asunto a un referéndum *entre todos los confederados.*

Art. 55. En todos los casos, el Comité nacional informará ampliamente de las causas que motiven una resolución sobre las cuestiones que se sometan al referéndum, *dando cuenta del número de confederados que se hayan pronunciado en uno u otro sentido.*»

El boletín de votación que la Ejecutiva remitió a las Secciones estaba redactado en los siguientes términos:

«La Sociedad de... (profesión), de ... (pueblo), provincia de ..., compuesta por ... afiliados, vota porque ... se celebre el Congreso extraordinario de la Unión General de Trabajadores.—El presidente.—El secretario.»

Dada la forma en que el boletín está redactado, las Secciones, al contestar, no podían hacerlo con sujeción a los términos establecidos en los estatutos. Primero, porque si pudiera aceptarse como reglamentario un boletín por cada Sociedad, en él habrían de hacerse constar los votos en pro y en contra y los abstendidos. Tal y como ha sido redactado el boletín, las Secciones que contestaron hicieron constar el número de todo sus asociados y a todos ellos los incluyeron en una opinión favorable o adversa a la celebración del Congreso.

En segundo lugar, un referéndum entre todos los confederados, como mandan nuestros estatutos, exige que a cada uno se le facilite un boletín en el que exprese su personal opinión. Así, y sólo así, quedarían cumplidos los artículos 50, 54 y 55, que más arriba reproducimos.

En su consecuencia, la Comisión ejecutiva estimó por unanimidad que procedía dejar sin efecto el referéndum y someter su decisión al Comité nacional.

MODIFICACION DE LOS JURADOS MIXTOS

El secretario general, al tomar posesión del cargo, examinó el problema planteado con motivo de la circular de la Dirección general de Trabajo a las organizaciones patronales y obreras sobre modificación de la ley de Jurados mixtos y propuso, y así se acordó por unanimidad, escribir al ministro de Trabajo en nombre de todas las Federaciones nacionales expresando el criterio contrario a la modificación de dicha ley.

A pesar de esto, se sabe que hay una Comisión encargada de estudiar la reforma, y los vocales obreros del Consejo de Trabajo han pedido que no se promulgue sin pasar antes a discusión del indicado organismo consultivo.

SECRETARIADOS REGIONALES O PROVINCIALES

Otro de los problemas que se encontró la Ejecutiva fué el de la constitución de los Secretariados regionales o provinciales. Uno de ellos, el de Cataluña, constituido y actuando mediante la subvención mensual de quinientas pesetas que abona la Caja de la Unión.

La Unión General de Trabajadores de Valencia había celebrado ya su Congreso de constitución del Secretariado provincial, al que, en representación de la Ejecutiva, había asistido el compañero Trifón Gómez. Dirigida a este camarada se recibió una carta, fecha 24 de enero, en la que se decía, entre otras cosas, lo siguiente:

«Además interesa el que la Comisión ejecutiva de esa Unión General de Trabajadores, dándose perfecta cuenta por la orientación que usted habrá dado, nos facilite para los primeros gastos de instalación de dicho Secretariado la mayor cantidad que sea posible y poder emprender la total implantación.»

La Comisión ejecutiva considera que no es llegado el momento de constituir esta clase de organismos, porque significa mayores sacrificios para las organizaciones que vendrían obligadas a integrarlos, pues, además de las cuotas a sus respectivas Federaciones nacionales de industria, tendrían que agregar la que con carácter obligatorio les impusiera el Secretariado, y son muchas las Secciones que no podrían cumplir sus compromisos económicos. Pero, además, no es posible que la Unión General patrocine ni estimule la constitución de esta clase de organismos si, aparte los inconvenientes que quedan señalados, ha de venir obligada a subvencionarlos, bien con cantidades para su instalación o con subvenciones fijas mensuales, como tenemos el de Cataluña (y esta región tiene un aspecto completamente distinto) y como han solicitado algunos otros.

Resumiendo: si las Secciones de una región o provincia quieren constituir un Secretariado, la Ejecutiva de la Unión no puede impedirlo, porque lo autorizan los estatutos en su artículo 3.º, párrafo sexto; pero no los subvencionará con ninguna

cantidad, y propondrá al primer Congreso ordinario la modificación de este apartado del artículo 3.º de los estatutos.

* * *

La Federación provincial de Sevilla tenía asignada una subvención de 300 pesetas mensuales, que la Comisión ejecutiva anterior abonó hasta el mes de enero último. Al tomar posesión la Ejecutiva actual consultó si se le seguiría abonando la subvención; acordándose suprimirla, en atención a la situación económica de la Unión y a la resolución adoptada de no mantener más subvenciones que la del Secretariado de Cataluña, dadas las especiales circunstancias que concurren en aquella región.

FEDERACIONES PROVINCIALES

La Federación de la Industria de la Edificación quiso constituir en Lugo una Federación provincial de la industria; pero se encontró con la dificultad de que existe otra Federación provincial de todos los oficios que obliga a las organizaciones de la edificación a abonar una cuota. Si se constituye la de industria no pueden aquellas Secciones abonar dos cuotas provinciales. Y dice la Federación de la Edificación:

«Donde la economía sindical permite realizar algún esfuerzo, este problema se plantea levemente, y en ocasiones ni siquiera se nos ha hecho saber; pero puede darse algún otro caso como el de Lugo, y queremos que la Unión General examine el problema, por si fuera posible darle una solución satisfactoria para todos.»

El artículo 3.º de nuestros estatutos dice: «La Unión General de Trabajadores de España estará integrada por organismos nacionales de industria, los que, a su vez, se constituirán como mejor convenga a sus fines sindicales.»

La Comisión ejecutiva, teniendo en cuenta lo que establecen nuestros estatutos, resolvió que, caso de que alguna organización solicite criterio sobre el particular, mostrar preferencia por las Federaciones provinciales de industria cuando a las Secciones no les sea posible abonar dos cuotas provinciales, y llevar este problema al Comité nacional para que resuelva sobre el caso.

FRONTERAS SINDICALES

Dependientes de Comercio y Empleados de Oficinas.

Pendiente aún de solución el conflicto entre el Sindicato Español de Dependientes de Comercio y la Federación de Empleados de Oficinas, asunto que había sido tratado en el Congreso de 1932, planteado de nuevo ante la Comisión ejecutiva, ésta, después de una reunión conjunta de los organismos nacionales y locales interesados, acordó someter de nuevo al Congreso el problema para que lo resuelva de una manera definitiva. En tan-

to no se celebre el Congreso, los Dependientes se abstendrán de admitir en sus Secciones a compañeros que deban, por la especialidad de su trabajo, pertenecer a Empleados de Oficinas.

La Unión de Empleados de Oficinas de Madrid, tomando como base los acuerdos del Congreso y el del Comité nacional de diciembre de 1932, formuló su protesta por el acuerdo de la Ejecutiva, y ésta lo ratificó en su reunión del 22 de marzo próximo pasado.

EL SECRETARIO, A BARCELONA

Por acuerdo de la Comisión ejecutiva, y respondiendo a deseos expresados por el Secretariado regional, se desplazó el secretario general a Barcelona. A su regreso informó a la Ejecutiva de que el Secretariado le había producido buena impresión, que estaba bien organizado y bien atendido y que el ambiente entre la clase trabajadora era muy favorable a la Unión General. Tuvo ocasión de conocer cómo funciona la Alianza Obrera y las relaciones que existen entre el Partido Socialista y la Unión Socialista de Catalunya.

Como consecuencia de la información aportada por Largo Caballero, la Ejecutiva acordó: Autorizar a las organizaciones de la Unión General en Cataluña para mantener la Alianza Obrera, y decir al Secretariado de aquella región que enviara una circular a sus Secciones haciéndoles saber que estaban obligadas a prestar su ayuda a las Agrupaciones Socialistas del Partido Español frente a todo otro organismo político, incluyendo entre éstos, claro está, a la Unión Socialista de Catalunya. En efecto, el Secretariado cumplimentó el acuerdo por medio de una circular cuyo texto aprobó la Ejecutiva.

CONTRA EL FASCISMO

Una de las preocupaciones de la Comisión ejecutiva al tomar posesión de sus cargos fué la de estudiar el medio de hacer frente al fascismo. De acuerdo con la del Partido Socialista, constituyó una Comisión especial, que viene actuando y que ha autorizado la constitución de alianzas con otros sectores obreros en aquellas localidades, provincias o regiones donde ha sido posible crear esta clase de organismos, cuya actuación dirige y controla la Comisión especial.

SOLIDARIDAD CON LOS CAMARADAS DE AUSTRIA

Al producirse los hechos de Austria, la Ejecutiva siguió con el mayor interés todos los detalles de la lucha heroica sostenida por aquellos camaradas contra el dictador Dollfuss, y, previendo la posibilidad de una reunión del Consejo de la Federación Sindical Internacional, autorizó al secretario para que, caso de que recibiera una convocatoria urgente, emprendiera el viaje sin necesidad de reunir la Ejecutiva. En la misma reunión del 15 de febrero se acordó declarar la más absoluta solidaridad con los camaradas austríacos, manifestándose así a la F. S. I. Terminados los su-

cesos, la F. S. I. hizo un llamamiento a la solidaridad económica de todas las Centrales sindicales, y nuestra Ejecutiva organizó una suscripción, de cuyo resultado se informa en otro lugar de esta Memoria.

Reiteramos nuestra solidaridad con los camaradas austríacos y hacemos constar nuestra satisfacción por la forma en que han respondido nuestras organizaciones, a pesar de la situación económica en que se desenvuelven debido a la crisis de trabajo y las huelgas a que han tenido que subvenir económicamente por imperativo del principio de solidaridad.

PLEITO DE EMPLEADOS DE OFICINAS

La Federación de Empleados de Oficinas puso en conocimiento de la Comisión ejecutiva que, organizado por la Sección de Madrid, con el aval de los vocales regionales del Comité nacional, se iba a celebrar un Congreso en el que se iba a enjuiciar la conducta de la Ejecutiva de la Federación. Este Congreso estaba convocado para el día 14 de abril, sabiendo que para el día 6 de mayo tenía convocado el suyo el Comité nacional, no habiéndolo convocado antes por la necesidad de dar tiempo a las Secciones para discutir la Memoria. Por conducto particular sabían que se trataba de destituir a la Ejecutiva, y ésta declaraba no estar dispuesta a entregar los cargos hasta tanto se celebrara el Congreso por ella convocado.

De todos los antecedentes reunidos por la Ejecutiva de la Unión dedujo que el Congreso convocado por la Sección de Madrid, de acuerdo con los vocales regionales, constituía una anomalía que no podía amparar.

Más tarde, suscrita por «Los vocales del Comité nacional», se recibió otra comunicación en la que se decía que habiendo sido destituida la Comisión ejecutiva por el Comité nacional, éste se había constituido en sesión permanente y acordado que el Congreso se celebrara el día 14 de abril, solicitando la designación de un compañero que representara en él a la Unión General. No se designó el delegado ni se reconoció más Ejecutiva que la que venía actuando. Celebrado el Congreso del día 14, se celebró una reunión entre las dos Ejecutivas y la de la Unión, acordándose celebrar el Congreso ordinario convocándolo y presidiéndolo la Ejecutiva de la Unión General. Así se hizo, normalizándose desde entonces la marcha de la Federación Española de Empleados de Oficinas.

COMISION ASESORA NACIONAL PATRONAL Y OBRERA

Por conducto del compañero Enrique Santiago tuvo conocimiento la Comisión ejecutiva de que iba a procederse a la elección de doce vocales obreros para la Comisión Asesora Nacional Patronal y Obrera del Instituto Nacional de Previsión. Cuando la Ejecutiva tuvo conocimiento de esto, el Instituto había enviado ya una circular a las Secciones que tenían derecho a elegir, fijando el pla-

zo de elección durante los meses de abril y mayo. La Ejecutiva estimó que era preciso orientar a nuestras organizaciones, y, como el tiempo apremiaba, resolvió proponer una candidatura a fin de que hubiera uniformidad en la elección. Gestionó, además, del Instituto una ampliación de plazo, pues sometido el país al estado de alarma, era seguro que en muchos pueblos no pudiera celebrarse la elección por impedir las autoridades toda clase de reuniones. Por otra parte, no estaba ultimada la relación de Sociedades inscritas en el Censo electoral social, causa por la cual no podía comenzarse la elección desde el momento mismo en que el Instituto envió la convocatoria.

Fué propósito de la Ejecutiva dejar en libertad a las organizaciones de las provincias interesadas para la elección de su respectivo candidato; pero examinado el tiempo que restaba del plazo concedido, decidió proponer ella los nombres a fin de que los boletines de escrutinio llegaran con tiempo para que fueran computados los votos y hubiera la mayor unanimidad en la elección.

CONSTITUCION DE FEDERACIONES

La Federación Española de Sindicatos de Practicantes de Medicina y Cirugía solicitó su ingreso como tal Federación en la Unión General. La solicitud fué presentada a la anterior Ejecutiva y reiterada a la actual. Esta, teniendo en cuenta los antecedentes del caso, acordó conceder el ingreso; pero condicionándolo a lo que se resolviera al constituir la Federación nacional sanitaria.

Estima la Ejecutiva que debe irse a la constitución de esta Federación. Hay varios organismos que debieran constituir uno solo: Sindicato Médico, Personal de Hospitales, Matronas, Practicantes... Todos estos organismos y cuantos con ellos guarden relación deben formar una sola Federación nacional. Este es el criterio de la Ejecutiva y a sus efectos solicita autorización del Comité nacional para llevarlo a la práctica.

HUELGAS

La general de campesinos.

Por primera vez trató este asunto la Comisión ejecutiva en su reunión del día 22 de febrero. Fué planteado con motivo de una comunicación que la Federación de la Tierra dirigió a los miembros de su Comité nacional relacionada con el proyecto de una huelga general. Copia de dicha comunicación nos fué remitida con otra en la que se manifestaba el deseo de conocer las observaciones o consejos de la Ejecutiva de la Unión. Esta, después de conocer el texto de las comunicaciones y un proyecto de manifiesto confeccionado por la Federación de la Tierra, oyó al compañero Zabalza, quien manifestó que no se le ocultaban las dificultades y el peligro de una huelga general de los campesinos; pero que no había más remedio que actuar sin esperar más tiempo.

El criterio de la Ejecutiva, en ésta como en el resto de las reuniones en que se examinó este in-

teresante problema, difirió del sustentado por los compañeros de la Federación de la Tierra.

Decretada la huelga general de los campesinos, la Ejecutiva de la Unión dirigió a todas las Secciones una circular recomendándoles que estuvieran dispuestas a prestar toda clase de solidaridad a los compañeros del campo; pero sujetándose en todo momento a las instrucciones de nuestra Central sindical. También designó al compañero Anastasio de Gracia para que en unión de la Ejecutiva de la Federación hiciera las gestiones oportunas para la mejor solución de la huelga. En la Secretaría de la Unión han estado diversas Comisiones. Todas ellas escucharon los mismos razonamientos, no obstante lo cual en algunas capitales y pueblos se ha declarado la huelga general.

La Ejecutiva, con la amplitud que se desee, informará al Comité nacional de todo lo relacionado con la huelga de campesinos.

Alicante.

La Federación Provincial de Sociedades Obreras de Alicante informó a la Ejecutiva de su propósito de ir a una huelga general para conseguir la solución de varias aspiraciones que la organización de aquella provincia tenía pendientes. Como la huelga no podía declararse frente a un patrono determinado, sino que las aspiraciones de aquellos compañeros se formulaban frente a patronos distintos y frente al Estado, la Ejecutiva estimó que la huelga general podría constituir un sacrificio estéril, y resolvió aconsejar a aquellos compañeros que no la declarasen, recomendando a Anastasio de Gracia y a Pascual Tomás la realización de gestiones en el ministerio de Trabajo para ver si se conseguía resolver algunas de las reclamaciones pendientes.

Madrid (edificación).

En la reunión celebrada por la Comisión ejecutiva el día 15 de febrero se tuvo conocimiento de una carta de la Federación Local de la Edificación en la que se daba cuenta del acuerdo de huelga general de la industria en Madrid, fundándola en la parcial que sostenía con las Empresas Fomento de Obras y Construcciones y Ormaeche, en la que estaban comprendidos 3.500 obreros. Las gestiones realizadas en el Jurado mixto y en el ministerio de Trabajo, tendientes a buscar una solución a esta huelga, no sólo no dieron resultado, sino que los patronos se hicieron fuertes y se proponían reducir los días de trabajo en la semana, a pesar de tener adquirido el compromiso de establecer un nuevo turno para impedir los despidos. En vista de las circunstancias, y temerosa la Federación local de que se declarase la huelga general sin su control, decidió declararla ella.

La Ejecutiva, a la vista de esta comunicación, acordó contestar que estaba dispuesta a prestar la ayuda moral que le fuera posible; pero requiriendo a la Federación para que en lo sucesivo informase antes de llegar a soluciones extremas.

Más tarde, el 8 de marzo, la Federación local solicitó de la Ejecutiva «la solidaridad correspondiente, exigiendo al Poder público la resolución de este conflicto». Para no demorar la contestación, ya que esta demanda se recibía horas después de terminar la reunión de la Ejecutiva, el secretario contestó que la tramitación de todos los conflictos está determinada en los estatutos de la Unión General, y que la práctica del principio de solidaridad no debe solicitarse cuando los conflictos no sólo se han producido, sino que han pasado ya por toda clase de gestiones, y que creía que «habiendo empezado a actuar cerca del Gobierno la Junta administrativa de la Casa del Pueblo, debe seguir ésta las gestiones iniciadas, ya que realizándolas por partida doble pudiera resultar contraproducentes». Esta contestación fué aprobada por unanimidad por la Ejecutiva.

Madrid (Arte de Imprimir).

La Asociación del Arte de Imprimir acordó declarar una huelga general de la industria en Madrid, como consecuencia de la que sostenía en el diario «A B C». Después de adoptado el acuerdo se lo comunicó a la Ejecutiva por si quería intervenir. Con este motivo se cambiaron impresiones respecto a la conducta que siguen algunas organizaciones en relación con la declaración de huelgas; y después de otros acuerdos de carácter general, se acordó contestar al Arte de Imprimir que la Ejecutiva consideraba un error de táctica declarar la huelga en todas las imprentas y que era ya tarde para que ella pudiera intervenir.

Asimismo se acordó dirigir una circular a todas las Federaciones nacionales indicándoles la conveniencia de que se dirijan a sus respectivas Secciones recomendándoles que limiten en lo posible las huelgas, y, sobre todo, que cumplan lo establecido en los estatutos y procedan siempre de acuerdo con su Federación respectiva.

Almería.

La Unión General de Trabajadores de Almería comunicó su propósito de declarar la huelga general en la provincia por solidaridad con las Secciones de Atlas y Obreros Manuales. A estos efectos había cursado el oficio de huelga.

La Ejecutiva les aconsejó que no declarasen la huelga general en la provincia y les recomendó que limitasen las huelgas a las imprescindibles y siempre de acuerdo con las Federaciones nacionales interesadas.

Ceuta.

Por haber sido despedidos 400 obreros que trabajaban en las obras de construcción del puerto, la Federación de Asociaciones Obreras de Ceuta acordó declarar la huelga general. De su acuerdo dió cuenta a la Ejecutiva en carta de 11 de febrero, y ésta acordó llamarle la atención para que otra vez, antes de adoptar resoluciones de tal gravedad, la informasen. Asimismo se facultaba al

secretario general para que examinara si podían hacerse gestiones que permitieran llegar a una solución satisfactoria.

Madrid (Metalúrgicos).

En la reunión celebrada por la Comisión ejecutiva el día 11 de abril se dió cuenta de una comunicación suscrita por la Federación Sidero-Metalúrgica, en la que informaba del origen y desarrollo de la huelga que, desde el día 9 de marzo, sostenía el Sindicato Metalúrgico de Madrid. Se habían iniciado gestiones a base de una fórmula propuesta por el director general de Trabajo, según la cual se concedía la jornada de cuarenta y cuatro horas semanales a los obreros de Viga armada, Calderería, Cerrajería y Calefacción y ascensores. Esta fórmula fué aceptada en referéndum por los huelguistas; pero la rechazaron los patronos.

La huelga, pues, continuó, y la Federación solicitó que la Unión General recomendara a sus Secciones que practicasen la solidaridad con los huelguistas, remitiéndoles cuantos fondos pudiesen. La Ejecutiva acordó hacer la recomendación por medio de notas oficiosas publicadas en la prensa, y designó al compañero Anastasio de Gracia para que, caso de que fuere preciso, acompañara a la Federación en la realización de gestiones tendientes a la mejor solución de la huelga. Esta ha terminado, después de tres meses, con el triunfo de los huelguistas.

Valencia.

El Secretariado provincial de Valencia informó de la situación en que se encontraba la huelga que sostenían los obreros de Agua, Gas y Electricidad, declarada porque la Empresa Hidroeléctrica Española pretendía considerar como obreros eventuales a unos 150 compañeros, entre los cuales hay algunos que llevan quince años a su servicio. La huelga fué declarada por las organizaciones de la Unión General de Trabajadores y de la C. N. T., previa la presentación de los oficios correspondientes. A pesar de este trámite fué declarada ilegal y clausurados los Centros obreros. Ante esta medida, la Alianza Obrera tomó por su cuenta el movimiento. El Secretariado de Valencia estimaba inevitable el extenderlo a todos los oficios. El ministro de la Gobernación declaró que la huelga tenía finalidades políticas, no sociales, y el Secretariado pidió que por la Ejecutiva de la Unión se desmintiera la aseveración del Sr. Salazar Alonso. Así lo hizo la Ejecutiva por medio de nota oficiosa, acordando también ponerse al habla con la Federación nacional, a fin de hacer gestiones cerca del Gobierno tendientes a la solución de la huelga, y comunicar al Secretariado que la Alianza Obrera no tenía por qué intervenir en estos movimientos.

Por fin la Alianza declaró la huelga general en Valencia; resolviéndose mediante una fórmula que dió satisfacción a los obreros de Agua, Gas y Electricidad.

Puertollano.

La Federación Local de Sociedades Obreras de Puertollano comunicó, con fecha 15 de abril, que se había visto precisada a declarar la huelga general por el despido de dos vagoneros de la Empresa de Peñarroya. Solicitaron después que se requiriese a las Secciones de la Unión para la práctica de la solidaridad económica, lo que se hizo por medio de nota oficiosa publicada en la prensa, y, por último, con la intervención del compañero Pascual Tomás, se arbitró una fórmula que fué aceptada por los obreros e impuesta a los patronos, quedando resuelta la huelga.

Cataluña.

La Alianza Obrera de Cataluña declaró la huelga general de veinticuatro horas como protesta contra la actuación del Gobierno, que había decretado la clausura del domicilio de la Federación de Juventudes Socialistas en Madrid, por la persecución de que viene haciendo víctimas a las organizaciones obreras y por su especial manera de actuar en cuantas huelgas de importancia se producen.

La Comisión ejecutiva, sin entrar en el fondo de las causas que motivaron la huelga general, comunicó al Secretariado que la desautorizaba, por estimar que la Alianza Obrera no se había constituido para esta clase de actuaciones; debiendo concretarse a la finalidad para que fué creada.

Más tarde tuvo conocimiento la Ejecutiva de que el Comité regional de Cataluña se había reunido, acordando «haber visto con disgusto la actuación del secretario general en la huelga de veinticuatro horas».

A la intervención que con este motivo tuvo la Ejecutiva de la Unión contestó el Secretariado que en lo sucesivo no intervendría la Alianza en otra clase de actuaciones que aquella para que fué creada.

Zaragoza.

Con motivo de los malos tratos infligidos a unos compañeros presos, las organizaciones obreras de Zaragoza declararon la huelga general por cuarenta y ocho horas. Al reanudarse los trabajos, la Empresa de Autobuses y Tranvías y los dueños de varios comercios ejercieron represalias, pues se negaron a admitir a todo el personal. El presidente de la Unión General, Anastasio de Gracia, intervino primero en el Parlamento denunciando los orígenes de la huelga, y después se trasladó a Zaragoza para estudiarla sobre el terreno y ver qué gestiones correspondía hacer. Estuvo en la capital aragonesa el ministro de la Gobernación, y no fué posible hacer gestión alguna cerca de él. Visitaron al gobernador; pero éste no mostró el menor interés en hablar de la solución de la huelga. Intervino después el delegado provincial de Trabajo, y la huelga quedó resuelta con el triunfo de los obreros.

CONGRESOS NACIONALES Y PROVINCIALES

La Comisión ejecutiva estuvo representada en los siguientes Congresos por los compañeros que se indican:

Unión Nacional de Dependientes Municipales, celebrado en la Casa del Pueblo de Madrid los días 15 al 25 de febrero, Anastasio de Gracia.

Unión General de Trabajadores de Vizcaya, celebrado en Bilbao los días 11 y 12 de febrero, José Díaz Alor.

Asamblea provincial de Sociedades obreras y Agrupaciones Socialistas de Badajoz, Juan Simeón Vidarte.

Congreso regional del Secretariado de Cataluña, Francisco Largo Caballero.

Al Congreso de la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza asistieron, en representación de la Ejecutiva, los compañeros Manuel Lois y Pascual Tomás.

Anastasio de Gracia fué designado por la Ejecutiva para asistir al Congreso de la Federación Obrera Montañesa, celebrado en Santander.

La Federación Nacional de Juventudes Socialistas celebró su Congreso los días 18, 19 y 20 de abril; asistiendo a él en representación de la Ejecutiva el compañero Pascual Tomás.

Los días 18, 19 y 20 de mayo celebró su Congreso la Federación Provincial Obrera de Sevilla. La Ejecutiva estuvo representada por Ricardo Zalbalza.

La Federación de la Industria Hotelera celebró su Congreso ordinario el día 28 de mayo; asistiendo en representación de la Unión el compañero Anastasio de Gracia.

A la Conferencia nacional de la Unión de Radiotelegrafistas Españoles asistió el compañero Pascual Tomás.

La Federación Provincial de Málaga celebró su Congreso de constitución, al que asistió, en representación de la Ejecutiva, el compañero Fernández Bolaños.

Al Congreso de la Federación Española de Espectáculos Públicos asistió el compañero Anastasio de Gracia.

Para el de la Federación Nacional de Acomodadores se designó al compañero Pascual Tomás.

PROPAGANDA

La Federación Provincial de Zaragoza solicitó de la Ejecutiva la organización de una campaña de propaganda en setenta y dos pueblos de aquella provincia. A nuestro requerimiento, lo dejó reducido a los pueblos más importantes. La campaña está pendiente de realización en virtud de las circunstancias políticas por que atraviesa el país.

A un acto organizado por la Unión General de Trabajadores de Guipúzcoa el día 18 de febrero asistió, en representación de la Comisión ejecutiva, el compañero Carlos Hernández.

El Sindicato General de Abogados organizó un

acto de propaganda que tuvo efecto el día 27 de febrero. En él representó a la Ejecutiva Pascual Tomás.

En un acto organizado por la Agrupación de Agentes, Corredores, Representantes y Viajantes de Madrid representó a la Ejecutiva Wenceslao Carrillo.

La Ejecutiva designó al compañero Anastasio de Gracia para un acto organizado por la Sociedad de Peones en General, de Lugo.

A un acto de propaganda organizado por el Sindicato de Peones, de San Sebastián, asistió, en representación de la Ejecutiva, el compañero Anastasio de Gracia.

Al acto de conmemoración del XLII aniversario de la fundación de la Sociedad de Panaderos Candelistas asistió el compañero Pascual Tomás.

El día 26 de junio celebró un acto de propaganda la Asociación de Peluqueros de Señoras. En él tomó parte, en representación de la Unión General, el compañero Carlos Hernández.

La Comisión ejecutiva designó al compañero Anastasio de Gracia para tomar parte en un acto de propaganda organizado por la Sociedad de Oficios Varios de Puebla de Montalbán (Toledo).

En el acto de conmemoración del III aniversario de la Sociedad de Dependientes de Casinos representó a la Comisión ejecutiva el compañero Mariano Muñoz.

El Sindicato de Dependientes de Comercio de Madrid celebró un acto de propaganda el día 19 de junio. Asistió, designado por la Ejecutiva, Wenceslao Carrillo.

VARIOS

Para sustituir a los compañeros de la anterior Ejecutiva que formaban parte de la Comisión electoral formada por representantes del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores fueron designados los compañeros Felipe Pretel, José Díaz Alor y Carlos Hernández.

Una llamada Confederación General del Trabajo Unitaria dirigió una circular a todas las organizaciones, invitándolas a un Congreso en el que había de tratarse de la constitución de otra Central sindical. La Ejecutiva acordó recomendar a nuestras Secciones, por medio del periódico, que se abstuvieran de asistir.

Para sustituir a Manuel Muño en el Consejo de la Institución Pablo Iglesias la Ejecutiva ha nombrado al compañero Manuel Lois.

Habiendo llegado a conocimiento de la Comi-

sión ejecutiva que existía el propósito de modificar la ley de Huelgas, se acordó hacer presente nuestra protesta ante el presidente del Gobierno.

También se hizo constar la protesta de la Unión General contra el aumento de tarifas ferroviarias.

Al cumplirse el tercer aniversario de la proclamación de la segunda República, la Ejecutiva recomendó a todas las Federaciones que dirigieran una circular a sus respectivas Secciones con el texto de una carta que cada una de ellas había de dirigir al jefe del Estado dándole cuenta de la situación en que se encuentran los trabajadores, especialmente los campesinos.

En momento oportuno la Comisión ejecutiva se dirigió al presidente del Consejo de ministros formulando la protesta por el restablecimiento de la pena de muerte.

También se protestó contra la pretendida elevación obligatoria del precio de los periódicos, reclamando que en el organismo creado por el ministerio de Industria y Comercio para estudiar este problema se concediera representación a los obreros que intervienen en la producción periódica.

A solicitud de la Casa del Pueblo de Avila, la Comisión ejecutiva designó al compañero Vidarte para que comprobase si, efectivamente, se maltrataba a unos compañeros presos en la cárcel de aquella capital. Afortunadamente, no se confirmaron los malos tratos.

La Comisión ejecutiva acordó, en su reunión del día 20 de junio, formular su protesta contra la conducta que por el Gobierno alemán se sigue con el líder comunista Thaelmann. La protesta se formuló mediante una carta dirigida al embajador de Alemania en Madrid.

CAMBIO DE DOMICILIO

Desde el momento de tomar posesión de sus cargos, la nueva Comisión ejecutiva estimó que el emplazamiento del domicilio no era el adecuado para la Unión, pues si bien reúne buenas condiciones para la distribución de los distintos servicios, la distancia que le separa de la Casa del Pueblo de Madrid y las dificultades que ofrece para los compañeros de provincias que vienen a Madrid a realizar gestiones cerca de la Ejecutiva le hacen inadecuado e inconveniente. Esto, aparte consideraciones de orden económico, ha inspirado a la Ejecutiva la necesidad de buscar nuevo domicilio. Para ello hace gestiones. Si fuera posible, volverá nuestra Secretaría a la Casa del Pueblo. Si aquí hubiera dificultades, se instalará en lugar lo más cercano posible al domicilio de las organizaciones obreras madrileñas.

CÓMO SE INTERPRETA LA LEY

LEY DE 27 DE ABRIL DE 1909

Huelgas.

1.º Tanto los patronos como los obreros pueden coligarse, declararse en huelga y acordar el paro para los efectos de sus respectivos intereses, sin perjuicio de los derechos que dimanen de los contratos que hayan celebrado.

2.º Los que para formar, mantener o impedir las coligaciones patronales u obreras, las huelgas de obreros o los paros de patronos emplearen violencias o amenazas, o ejercieren coacciones (1) bastantes para compeler y forzar el ánimo de obreros o patronos en el ejercicio libre y legal de su industria o trabajo, cuando el hecho no constituya delito más grave con arreglo al Código penal, serán castigados con la pena de arresto mayor o multa de cinco a ciento veinticinco pesetas.

3.º Los que turbaren el orden público o formaren grupos con el propósito reconocido de imponer violentamente a alguien la huelga o el paro, o de obligarle a desistirse de ellos, incurrirán en la pena de arresto mayor. A los jefes o promovedores se les aplicará esta pena en su grado máximo, siempre que hubieren tomado parte en los actos delictuosos.

Se tendrá por jefes o promovedores de una huelga o paro, para los efectos de esta ley y la de conciliación y arbitraje (2), a quienes, por ejercer cargo en Asociación o corporación interesada, o participar en ella, los hubieren acordado; a quienes de viva voz o por escrito exhortaren o estimularan a los obreros o patronos, y a quienes, usando o atribuyéndose representación colectiva, los proclamaren o notificaren.

4.º Los que fueren autores de algunos de los delitos comprendidos en los artículos 2.º y 3.º de

(1) Constituyen esta falta las amenazas dirigidas a unos obreros que trabajaban cerca de un río, expresivas que de continuar en sus labores lo pasarían mal o los echarían al río (S. 1 de junio de 1912); y las frases pronunciadas en una reunión de obreros en huelga, increpando a los patronos y excitando a los concurrentes para que impidiesen que los esquirols (llamados traidores) volviesen al trabajo (S. 9 de abril de 1912); y existe la falta aunque no consten las palabras o actos determinantes de las amenazas, si el concurrente con ocho o diez compañeros logran paralizar la obra (S. 13 de octubre de 1911).

Las coacciones para impedir, con motivo de una huelga de obreros, que trabajaran los que no se unieron al paro no están comprendidas en pena, 510, puesto que las pena esta ley especial (S. 11 y 26 de mayo de 1912).

(2) Es la de 19 de mayo de 1908.

esta ley, por haber inducido a otras personas a cometerlos, serán castigados con el grado máximo, y los ejecutores con el grado mínimo de la pena señalada, siempre que conste la inducción.

5.º Las huelgas y paros serán anunciados a la autoridad con ocho días de anticipación en los siguientes casos: 1.º Cuando tiendan a producir la falta de luz o de agua, o a suspender el funcionamiento de los ferrocarriles. 2.º Cuando por la huelga o paro hayan de quedar sin asistencia los enfermos o asilados de una población.

6.º Las huelgas o paros serán anunciados a la autoridad con cinco días de anticipación cuando tiendan a suspender el funcionamiento de los tranvías, o cuando a consecuencia de ellos todos los habitantes de una población hayan de quedar privados de algún artículo de consumo general y necesario. Tanto en este caso como en el artículo anterior, al anunciar a la autoridad la huelga o paro, se pondrá en su conocimiento la causa que los motiva.

7.º Los jefes y promovedores de las huelgas o paros comprendidos en los artículos 5.º y 6.º que no los hubieren anunciado a la autoridad dentro de los respectivos plazos serán castigados con la pena de arresto mayor.

8.º Las reuniones o manifestaciones que se celebraren con el fin de acordar, de sostener o de impedir una huelga o paro se atemperarán a lo dispuesto en la ley de Reuniones públicas.

Los delitos penados por la presente ley se considerarán asimilados a los comprendidos en el Código penal para los efectos de la mencionada ley de Reuniones públicas.

9.º Las Asociaciones legalmente constituidas podrán formar o sostener coligaciones, huelgas o paros con arreglo a lo dispuesto en la presente ley. Pero no podrán obligar a los asociados a adherirse a la coligación, huelga o paro por medios atentatorios al libre ejercicio de sus derechos.

Los asociados que no se conformen con los acuerdos acerca de una coligación, huelga o paro podrán separarse libremente de la Asociación, sin incurrir por esta causa en responsabilidad de ningún género para la misma, salvo los compromisos de carácter civil contraídos con aquélla.

10. Los Tribunales municipales son los competentes para conocer de las transgresiones previstas y penadas en esta ley, tramitándose según los procedimientos y los recursos establecidos para los juicios de faltas.

Los Tribunales municipales aplicarán a los comprendidos en esta ley las disposiciones contenidas en la del 17 de marzo de 1908, sobre la condena condicional. R. O. 5 de julio de 1909.)

11. Quedan derogados el artículo 556 del Código penal y todas las demás disposiciones que sean contrarias a lo establecido en la presente ley.

El decreto de Salazar Alonso declarando ilegales las huelgas que afecten a la recolección de la cosecha.—Se establece la previa censura para la prensa.

Declarado por el Gobierno servicio público la recolección de la próxima cosecha, por afectar no sólo al interés de la producción en su doble sentido patronal y obrero, sino también ante los consumidores, y en general a la necesaria defensa de la economía nacional, resulta obligada la adopción de aquellas medidas que mejor produzcan el aseguramiento de tal servicio acomodadas al estado circunstancial de alarma establecido en virtud del decreto de 25 del mes actual. Todo ello con objeto de prevenir y en su caso frustrar así los extravíos a que puedan ser conducidos los obreros, que tan necesitados se hallan de la paz de un jornal seguro, como de los excesos egoístas que pudieran turbar el sentido del deber en algunos patronos, llamados por su condición a dar ejemplo de respeto a la ley. Tales motivos y consideraciones y el obligado empeño de librar de daños irreparables a la economía nacional, cuya defensa pertenece a un orden superior a patronos y a obreros que a todos corresponde reconocer y acatar, justifican que por acuerdo del Consejo de ministros y a propuesta del de la Gobernación venga en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Declarado servicio público la recolección de la cosecha pendiente, quedan prohibidos, a tenor del párrafo 10 del artículo 28 de la ley de 28 de julio de 1933, todos los paros o huelgas que afecten a las labores de recolección que se produzcan o intenten dentro del territorio nacional, ya resulten anunciados o no con anterioridad al día de hoy, los cuales paros o huelgas tendrán el carácter de ilegales para todos los efectos de dicha ley.

Art. 2.º Los patronos que infringieren en sus contratos con los obreros en la fijación o pago de salarios alguna de las disposiciones de las órdenes del ministerio de Trabajo de 24 de febrero último y 18 de mayo actual o la ley de 28 del propio mes corriente o paralicen maliciosamente, o con propósito de coacción o de lucro, las labores de recolección, se considerarán incurso en las sanciones de la ley de Orden público—incluso las de multas, detenciones, registros y cambios de domicilio—, que les serán impuestas con todo rigor por la autoridad gubernativa, sin perjuicio de que conozcan de las infracciones cuando proceda los Tribunales de urgencia. La cuantía de las multas que se les impongan será proporcionada a la gravedad de la falta y a la fortuna de la persona responsable.

Art. 3.º Los gobernadores civiles prohibirán o suspenderán toda clase de reuniones, manifestaciones y propaganda encaminadas de manera directa o indirecta a impedir las labores de recolección normal de las cosechas pendientes o a suscitar o mantener huelgas que las perturben. De igual modo emplearán todas las medidas que autorizan los capítulos segundo y tercero de la ley de 28 de julio de 1933—incluso las de multas, detenciones, registros y cambios de domicilio—con-

tra los que por actos directos o indirectos, positivos o negativos, o por medio de propagandas pretendiesen contribuir a la declaración o mantenimiento de huelgas o paros o incurran en cualquier infracción de la ley de Orden público o de las demás disposiciones concordantes, todo ello sin perjuicio de la actuación en su caso de los Tribunales de urgencia.

Art. 4.º Todos los periódicos y demás impresos que se publiquen en el territorio nacional estarán sometidos a la previa censura en cuanto afecte a los artículos, anuncios, comentarios, informaciones o propagandas que de manera directa o indirecta preparen, fomenten, exciten o auxilien huelgas o paros en los trabajos agrícolas. Para evitarse las molestias consiguientes a lo prevenido en el párrafo anterior, los directores de diarios y demás publicaciones periódicas podrán prescindir de someter los impresos a la previa censura, siempre que dos horas antes cuando menos a su publicación dirijan a la autoridad gubernativa un oficio debidamente autorizado por ellos donde consignen la declaración solemne de que el periódico no contiene suelto alguno que contribuya en forma directa o indirecta al anuncio o propaganda de huelgas o paros en el campo.

Si, no obstante dicha declaración, resultasen infringidas por el periódico las disposiciones de este artículo, la autoridad gubernativa procederá inmediatamente a imponer una multa hasta la suma de diez mil pesetas o la suspensión del periódico, según la gravedad de la infracción.

Art. 5.º Los gobernadores civiles procurarán que la ejecución de todas estas medidas se ajuste a un sentido humano de justicia y serenidad; pero empleando al propio tiempo toda la rapidez y energía que demande el interés público. Los propios gobernadores civiles atenderán a que las presentes disposiciones lleguen a conocimiento de todos los pueblos de España, para lo cual obligarán a los alcaldes a que las fijen en lugar fácilmente visible para todos los vecinos. Asimismo velarán por que las autoridades que de ellos dependan procedan con el mayor celo y diligencia a la denuncia y persecución de los culpables de infracciones de la ley de Orden público en relación con las presentes disposiciones, imponiendo con celeridad las sanciones máximas, contra aquellas autoridades que mostraren morosidad o infidencia en el cumplimiento de sus deberes.

Art. 6.º El presente decreto comenzará a regir desde su publicación en la «Gaceta» y se aplicará mientras subsista el estado de alarma o de prevención, en la medida correspondiente a cada una de estas situaciones.

Todo trabajo es, por una parte, expansión de trabajo en sentido fisiológico. Esta peculiaridad de trabajo, igual o abstracto, determina el valor de la mercancía. Todo trabajo es, por otra parte, expansión de actividad humana en forma concreta y adecuada, y bajo este aspecto útil concreto produce valores en uso.

CARLOS MARX

La agitación política y social en Francia

Ya nos hemos ocupado de la agitación política y social promovida en Francia a raíz de los acontecimientos producidos a primeros de febrero último.

La Confederación General del Trabajo convocó últimamente una asamblea, llamada Estados Generales del Trabajo, recordando los Estados Generales de Francia que precedieron al estallido formidable de la Revolución francesa y a la caída del régimen absolutista de Luis XVI.

A dicha asamblea concurrieron varios miles de trabajadores de París, reunidos en el gran salón llamado de la Mutualidad, pues a última hora la clase capitalista hizo todo género de esfuerzos para que no se alquilara a la Confederación el Velódromo de Invierno, donde caben muchos miles más de trabajadores. A pesar de todos los obstáculos, la demostración se hizo, interviniendo representantes de los cuatro puntos cardinales de Francia, afectos a la Confederación General del Trabajo, y además, intervinieron otras representaciones de organismos intelectuales, técnicos, pequeños campesinos, trabajadores agrícolas, cooperadores y comerciantes, exponiendo todos su punto de vista, coincidente con el del movimiento sindical, expresado éste por nuestro compañero León Jouhaux, quien hizo adoptar por aclamación una resolución de combate contra el fascismo y un programa de acción a desarrollar en el país.

La moción contra el fascismo dice así:

«Los Estados Generales del Trabajo consideran que las manifestaciones que tuvieron efecto el 6 de febrero revistieron un carácter excepcional de gravedad.

Estiman que el peligro de un golpe de fuerza contra la democracia no está completamente eliminado.

Decididos a luchar contra todos los golpes de fuerza y a impedir la decadencia de las libertades democráticas, reclaman que se adopten medidas preventivas a fin de evitar la guerra civil.

En primer término de estas medidas colocan el desarme y disolución de las formaciones pro militares que se constituyen en anejo a determinadas tendencias políticas o que hacen la vez de partidos políticos. En régimen democrático, el libre juego de la Constitución es incompatible con los métodos que pretenden sustituir la violencia y la fuerza al ejercicio del derecho.

Los Estados Generales del Trabajo recuerdan el texto del artículo 2.º de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con el cual se proclama el derecho natural de la resistencia contra la opresión y que debe fijar la actitud de las organizaciones enfrente de un golpe de fuerza.

Por otra parte, los Estados Generales del Trabajo recuerdan los términos de la ley de 15 de febrero de 1872, la cual prevé, en caso de que las Asambleas regulares estén impedidas de fun-

cionar o sean disueltas ilegalmente, la transmisión de poderes de estas Asambleas a los Consejos generales (Diputaciones provinciales) y la reunión de una Asamblea extraordinaria de delegaciones de dichos Consejos, cuyas decisiones son ejecutorias, bajo penas severas, por todos los funcionarios, agentes de la autoridad y comandantes de la fuerza pública.»

Aprobada esta moción puestos todos los delegados en pie y en medio de grandes vítores, Jouhaux dió lectura a renglón seguido al programa de acción que transcribimos íntegramente.

Dice así:

«La reorganización económica dentro de la libertad.

Cuatro años de crisis económica han puesto en evidencia la contradicción fundamental de nuestro régimen de democracia política, dominado por una oligarquía financiera. Los acontecimientos actuales demuestran a todos la magnitud de la batalla entablada.

Mientras que en los Estados Unidos, en Inglaterra y sus Dominios, en Suecia y en algunos otros países la lucha contra la crisis y el paro ha sido ya coronada por éxitos apreciables, en Francia la influencia de las potencias financieras ejercida sobre los Gobiernos ha impedido toda iniciativa encaminada a la reconstrucción económica. Es por esto que Francia se mantiene detrás de los demás países en lo que se refiere a la liquidación de la crisis y de sus repercusiones sociales. La confianza no se rehace, el mal-estar aumenta incesantemente y los demagogos de la reacción pueden entregarse con todo placer a explotar el descontento que resulta de esta situación.

La defensa de las libertades públicas exige, pues, imperiosamente destruir la potencia de la oligarquía y que la democracia de los trabajadores y productores de todas las categorías tome en sus manos el control de la vida pública. Es preciso asociar en la defensa de sus derechos y de sus intereses comunes a todas las fuerzas populares que no quieran ser esclavizadas.

Esta es una misión urgente.

No se trata, por el momento, de establecer un plan completo de reorganización económica, política y social. El programa común que cabe establecer debe encaminarse hacia realizaciones inmediatas aceptables por todas las categorías de ciudadanos amenazados por la dictadura, o sea un programa de urgencia cuyo fin será, ante todo, remediar la crisis y continuar las transformaciones profundas que exige.

Este plan debe procurar vencer la crisis, suprimiendo el paro forzoso y permitiendo vivir trabajando.

Si la crisis se prolonga todavía por algún tiempo, aparecerá claramente — y ciertas experiencias

trágicas lo confirman — que la lucha de los trabajadores por el bienestar y la libertad estará durante mucho tiempo dificultada.

Extraño espectáculo el que ofrece nuestro país: tenemos un millón de trabajadores franceses desprovistos de todo trabajo, y enfrente miles de millones de francos que se hallan improductivos.

La oligarquía no ha sabido hacer otra cosa que añadir al paro forzoso de los trabajadores el paro forzoso de capitales. Es decir, que con su forma de actuar produce la ruina del capital y del trabajo.

En la crisis presente la clase obrera se encuentra en la vanguardia de los sufrimientos, y por esta razón debe estar también en la vanguardia de la reorganización.

Por esto invita a todo cuanto en el país trabaja, produce y piensa para crear inmediatamente el organismo indispensable para la democracia económica.

La deflación, política de la oligarquía financiera.

El capitalismo pretende aportar un remedio a la crisis practicando una deflación compacta. Esta política debe ser condenada. La crisis proviene de una deficiencia manifiesta del consumo respecto a las posibilidades de producción. Es absurdo suponer que pueda ser eliminada o simplemente atenuada reforzando su causa fundamental.

En todas partes donde únicamente la política de deflación se ha practicado, provoca una estrangulación progresiva de la economía. En Francia la situación es muy grave: reducción de salarios y emolumentos, paro completo o parcial, reduciendo así de un tercio la fortuna global de la clase obrera; técnicos e intelectuales, sin empleo; la juventud se encuentra con la incertidumbre ante ella; la población agrícola, igualmente perjudicada. Por consiguiente, toda nueva disminución del poder de consumo de las masas populares será desastrosa.

Además, los que preconizan exclusivamente la deflación se guardan muy bien de indicar hasta dónde llegan sus cálculos. Con el pretexto de rebajar el precio de coste, quieren reducir al mismo tiempo los impuestos, el interés de los capitales, los gastos generales de todo orden y, en fin, y sobre todo, los salarios y los emolumentos.

Semejante política exige un régimen de fuerza parecido al de Italia o de Alemania, que son la demostración más absoluta. Encaminarse hacia la deflación sería facilitar la acción de los facto-

res de dictadura, y sus maniobras se verían tanto más facilitadas que la crisis se agravaría.

Un remedio a la crisis financiera debe ser buscado en la reforma del sistema de impuestos y en la represión enérgica del fraude fiscal.

En cuanto a la crisis económica, no puede resolverse sino por la elevación de la capacidad de consumo de los productores.

Obras públicas.

Es necesario que inmediatamente sea reanimada la actividad económica. Las iniciativas particulares son impotentes para llevar a cabo esta obra. En tiempo de crisis es el Estado quien debe intervenir. Este puede y debe hacer lo necesario para el establecimiento de grandes obras de interés público.

Sin renunciar a las grandes obras internacionales, destinadas igualmente a combatir el paro; pero considerando las dificultades de todo orden que encuentra la aplicación de este programa, el esfuerzo inmediato debe hacerse por mediación de obras públicas nacionales.

La rapidez de ejecución condiciona la eficacia de este esfuerzo, pues no hay lugar a retrasar un momento la elaboración de un nuevo programa de conjunto. Hay que escoger entre los proyectos de herramental nacional ya elaborados y cuya selección debe confiarse al Consejo Nacional Económico, procurando sea en trabajos cuyo carácter de utilidad pública resulte indiscutible.

Para ser útil, para tener sobre la economía nacional un efecto inmediato, estos trabajos deben empezarse no en pequeñas dosis, método irrisorio, sino en obras de gran magnitud.

Deben constituir una vigorosa ofensiva contra el paro, dando a la opinión de este país la certidumbre de que algo se ha cambiado y que la actividad económica renace.

Es razonable admitir que este plan deberá comprender un primer crédito de quince millones de francos, reembolsables en seis años.

El plan financiero estará asegurado por una Caja autónoma de utilaje nacional, administrada por un Consejo tripartito compuesto de representantes de la industria y del comercio, del trabajo y del Estado.

La semana de cuarenta horas.

La disminución del paro exige, por otra parte, la reducción de la jornada de trabajo.

Los progresos técnicos hacen indispensable introducir la semana de cuarenta horas, justamente reclamada por los Sindicatos confederados. Esta reducción debe hacerse manteniendo los salarios actuales, a fin de no provocar una disminución del poder de consumo, que iría en detrimento del fin perseguido.

Por otra parte, no hay que olvidar aquellas medidas, tales como las vacaciones pagadas y la prolongación de la obligatoriedad escolar, que figuran en el cuadro de las disposiciones factibles igualmente de disminuir el paro.

Entre la sociedad capitalista y la comunista hay un período de transición revolucionaria, de transformación de la una en la otra. A este período corresponde una etapa de transición política, y el Estado durante este período no puede ser otra cosa que la dictadura revolucionaria del proletariado. — MARX (Crítica al programa de Gotha, reproducida también en «Estado y revolución», de Lenin, página 188.)

Las medidas inmediatas que nosotros reclamamos no podrán por sí mismas salvaguardar el porvenir de la democracia y asegurar la prosperidad del país.

A situaciones nuevas deben corresponder métodos nuevos de órganos nuevos.

Los fascistas pretenden realizar el orden económico mediante la dictadura política.

Nosotros queremos establecer el orden económico con la libertad política.

El Consejo Nacional y Económico.

El Consejo Nacional Económico, que existe solamente en estado embrionario, debe constituirse como un engrane esencial y constitucional del país.

El estatuto que nosotros proponemos no se inspira sino en el interés general, sin ningún espíritu de dominio. Tiende a organizar al lado de la democracia política la democracia económica.

En materia política, las opiniones de un albañil valen tanto como las de un banquero, y tiene derecho a defender sus intereses fiscales, morales y sociales lo mismo que un millonario.

Por esto, el Parlamento elegido por el sufragio universal directo debe subsistir como soberano para todo cuanto concierne a las atribuciones esenciales del Estado.

Pero en el dominio económico, la acción del Parlamento debe ser ayudada preparando sus propias decisiones. No es necesario insistir respecto a la deficiencia de los debates parlamentarios en los problemas que afectan a la vida material del país; esta deficiencia es tanto más grave cuanto que los problemas son más numerosos y se reproducen constantemente.

No deben ser reglamentados al azar de las circunstancias, ni tampoco por el juego de las coaliciones de intereses particulares, ni de grupo, según las combinaciones de corrillos o cambios de servicios.

Toda solución a dar a estos problemas debe poner en primer plano las necesidades de la colectividad. Esto supone la conciliación de todos los intereses legítimos de las diversas ramas de la economía. Esto no puede llevarse a cabo sino mediante la participación de los organismos representativos de los intereses, dándoles el medio de poder conciliarse. Tampoco esto puede hacerse sino teniendo en cuenta todos los elementos de estos problemas, posibilidades y recursos de los aspectos técnicos, como también los aspectos económicos propiamente dichos y las repercusiones que las medidas proyectadas tendrán para los diversos participantes en la actividad económica y para el país entero.

En el dominio económico hay que salir de la confusión de intereses, procurando que prevalezca la competencia. Tal será la función esencial del Consejo Nacional Económico.

El Consejo Nacional Económico será reformado de suerte que comprenda:

a) Los representantes de las organizaciones sindicales más representativas (patronales y obreras) de la agricultura, la industria y el comercio y que sean la expresión de las necesidades de la economía;

b) Los representantes de los Sindicatos de directores y empleados de Bancos, aportando sus conocimientos técnicos;

c) Los representantes del Estado.

Tendrán tres funciones principales:

1.^a *Información.* — Centralizará todas las estadísticas y efectuará encuestas sobre el desarrollo de las distintas ramas de la producción, tanto nacional como internacional. En particular, deberá seguir con atención el desarrollo de los *stocks* (declaración obligatoria) y la acumulación de capitales. Estas informaciones, mantenidas constantemente al día, se difundirán ampliamente.

2.^a *Planes de desarrollo.* — Se establecerá un programa de utilaje nacional, transportes, servicios municipales, extensiones urbanas, etc.

La ejecución de este programa estará reglamentada por el estado general de coyuntura. Será menos intenso en período de actividad de la economía privada y se acelerará si los síntomas de depresión aparecen de manera que puedan convertirse en un regulador de la economía.

3.^a *Acción reguladora.* — La emisión de títulos necesarios para el plan financiero de estos trabajos se hará con autorización del C. N. E. (salvo el veto del Parlamento). Podrá atenuarse en una rama o acelerarse en otra, según: a) Los movimientos de la coyuntura general. b) El volumen de los capitales disponibles. c) El grado de actividad del "sector privado" y del "sector vigilado".

El Consejo Nacional Económico elaborará igualmente para el Gobierno y el Parlamento proyectos tendentes a la conciliación de intereses económicos, con el fin de satisfacer los anhelos del interés general.

Ayuda a la agricultura.

La intervención del Estado en favor de la agricultura debe aumentarse. Ello implica en primer lugar una reorganización del mercado de productos agrícolas, y también una organización metódica de su producción encaminada particularmente a mantener los cultivos hoy abandonados y que tengan su utilidad normal en el mercado de la nación.

Hay que asegurar precios remuneradores a los productos de la tierra. Su valor en el campo ha bajado considerablemente y en proporciones que alcanzan 40 a 50 por 100, mientras que su precio de venta al consumidor no ha sufrido más que una reducción mediocre.

La acción de los Sindicatos agrícolas, con el fin de reelevar inmediatamente los precios de compra en el campo, debe ser apoyada vigorosamente. Se adoptarán medidas contra los abusos de los intermediarios de todo orden, que lleguen incluso a subordinar el ejercicio de su actividad a una reelevación de los precios de compra. Esta reelevación no deberá tener por efecto el aumento de los precios al detall, sino solamente reducir los beneficios de los intermediarios. Los derechos conferidos a las autoridades competentes con el fin de determinar los precios serán metódicamente

te aplicados, y para esto se confiarán a un organismo nuevo con poderes apropiados. Tendrá el control de las Bolsas de comercio, mataderos, molinería y mercados.

Las Cooperativas agrícolas de producción y venta serán ayudadas con el fin de establecer relaciones directas entre estos organismos y las Cooperativas de consumo.

Estas medidas serán tomadas mediante la revisión de los contratos de arriendo y de las hipotecas, a fin de ajustar estas cargas a las condiciones actuales de la agricultura.

El mercado de abonos se verá libre del monopolio, que hoy lo tiene acaparado, pasando dicho mercado al Estado.

Ayuda al pequeño comercio.

Vista la importancia del pequeño comercio, relacionada con la ocupación de la mano de obra, es indispensable atenuar las cargas que pesan sobre él, a fin de poner remedio a la precaria situación en que se encuentra y determinar una baja en los precios de venta.

Para los pequeños comerciantes hay que prever igualmente un ajuste de sus cargas financieras, teniendo en cuenta las condiciones presentes de la economía, prorrogando los contratos de arriendo, y evitar el aumento de alquiler.

Protección al ahorro.

Francia cuenta con varios millones de Empresas privadas, cuyo jefe trabaja con capital propio o con capitales prestados bajo su responsabilidad personal; pequeños propietarios, aparceros, artesanos, cuya propiedad debe considerarse como un instrumento de trabajo.

Pero no ocurre lo mismo con respecto a las Sociedades anónimas, cuyos administradores ejercen la gerencia de capitales que no son suyos y de los cuales usan con el solo riesgo de sanciones raramente aplicadas y además irrisorias.

Estas Empresas deben constituir un sector vigilado de la economía, y como tales serán sometidas a un conjunto de reglas; procurando, en primer término, la protección del ahorro.

Para estos efectos se adoptarán las medidas siguientes:

1.^a En la constitución de Sociedades, antes de la emisión de títulos, se asegurará la honorabilidad de los miembros de los Consejos de administración de estas Sociedades y de sus consejeros técnicos y se comprobará previamente el cumplimiento de todas las prescripciones legales y el depósito efectivo del capital.

2.^a Establecimiento de balances por contables jurados.

3.^a La vigilancia judicial de estas Sociedades será fortalecida. Ninguna denuncia podrá ser retirada por el simple consentimiento del denunciante. La responsabilidad penal de los comisarios de cuentas se establecerá. Todos los delitos, y especialmente la publicidad falsa, serán objeto de penalidades severas.

Control del crédito.

La actual experiencia demuestra que no se puede dejar la organización del crédito a los financieros irresponsables, guiados por la única consideración de la facilidad de inversión y tarifa de la comisión a cobrar. Del mismo modo, es inconcebible que el Banco de Francia tenga por regentes banqueros privados, a los cuales reasegura sus efectos; siendo injusto que el Comité de Préstamos esté compuesto de comerciantes, los cuales deciden del crédito que pueda concederse a sus competidores.

Por lo tanto, la dirección del crédito corresponderá al Consejo Nacional y Económico.

Las industrias de base y los Bancos constituirán un sector controlado de la economía.

Para evitar el retorno de errores y abusos cometidos por la especulación, practicando inversiones desordenadas en las industrias, la cobertura de necesidades y los gastos excesivos de utilaje que gravan los precios de coste en las organizaciones de las industrias de base deberán reglamentarse, a fin de que guarden relación con el desarrollo del plan general a establecer por el Consejo Nacional Económico. Este no autorizará ninguna emisión sino después de asegurarse que corresponde a las necesidades de la economía nacional.

Se procurará la separación rigurosa entre los Bancos y depósitos especializados en el crédito a corto plazo y los Bancos de negocios que preparan y financian las emisiones. Los anticipos de títulos estarán rigurosamente reglamentados.

Pero no basta dar a la economía el regulador indispensable; es preciso asegurarle los medios de un nuevo desarrollo.

Desde este punto de vista, Francia dispone de reservas enormes que aumentan sin cesar; conviene crear un sistema que las utilice protegiéndolas contra todo despilfarro.

Para estos efectos, el Consejo Nacional Económico establecerá un sistema de seguros de crédito, garantizando a los títulos una renta mínima estable, y contribuirá a hacer que los cuarenta millones de oro o billetes amasados vuelvan a los depósitos, dando nuevo vigor a la economía.

En Francia existen todos los elementos para una reactividad económica de los negocios. Sólo falta la confianza.

Esta confianza salvadora estará creada por la organización de la democracia económica, íntimamente enlazada a la libertad política.

Corresponde a la democracia francesa salvarse mientras sea dueña de sus destinos. Puede y debe obrar.

La audacia en la firme voluntad de realizar el progreso económico y social le asegurará su salvación.»

¡Obreros! Leed y propagad

EL SOCIALISTA

CÓMO SE DEFIENDE LA REPÚBLICA

Artículo 1.º Por disposición de esta ley, y en consonancia con el párrafo segundo del artículo 44 de la Constitución, se acuerda la expropiación sin indemnización, y en beneficio del Estado, de todas las fincas rústicas y derechos reales impuestos sobre fincas rústicas, cualesquiera que sean su extensión y cultivo, que sean propiedad de cuantas personas naturales y jurídicas han intervenido en el pasado complot contra el régimen, ocurrido en los días 9, 10 y 11 del presente mes, y situadas en todo el territorio de la República. Estos bienes, así como sus productos netos y rentas, serán exclusivamente aplicados a los fines de la reforma agraria en proyecto.

A los efectos de esta ley, se consideran fincas rústicas las propiedades, casas señoriales o de recreo y sus tierras adyacentes que, aunque no estén dedicadas a explotación agrícola, se hallen situadas en núcleos de población rural inferiores a 1.500 almas. Estas fincas podrán ser dedicadas a sanatorios, colonias infantiles, granjas de experimentación agropecuaria u otros fines igualmente benéficos y culturales.

Los acreedores de los expropiados, previa justificación de la legitimidad de sus créditos, reconocidos en documento público o por agente mediador de Comercio, y de que el expropiado carece de otros bienes para hacerlos efectivos, podrán obtener que les sean reconocidos, en tanto el valor de los bienes expropiados baste para satisfacerlos, y siempre que aquéllos sean anteriores al 9 de agosto del presente año.

Art. 2.º Para la determinación de las personas afectadas por las disposiciones de esta ley, el ministerio de Justicia dictará las disposiciones oportunas, con objeto de que una vez substanciados los procesos seguidos por el motivo a que hace referencia el artículo precedente, se remita a la Presidencia del Consejo de ministros relación de los declarados reos de delito por la participación que hayan tenido en los hechos a que alude el referido artículo 1.º El ministerio de la Gobernación formará otra lista de aquella personas, naturales o jurídicas, que sin haber sido sancionadas por los Tribunales hayan prestado acatamiento o ayuda a los rebeldes. Dichas relaciones, examinadas y ratificadas por el Consejo de ministros, con vista de los justificantes que se aporten, se publicarán en la «Gaceta de Madrid», a los fines de lo preceptuado en el artículo siguiente.

Art. 3.º Una vez publicada en la «Gaceta de Madrid» la relación a que se refiere el artículo anterior, los registradores de la Propiedad procederán, en un plazo máximo de treinta días, a confeccionar unos estados, por Ayuntamientos, en los cuales figuren la descripción de las fincas rústicas y derechos reales impuestos sobre fincas rústicas pertenecientes a las personas naturales y jurídicas relacionadas en la «Gaceta» y que posean propiedad de esa naturaleza en la jurisdicción de los Registros respectivos.

CONTRASTES

En dichos estados, que se formarán por triplicado, se hará constar el nombre del propietario, extensión, linderos, clase de cultivo y número del tomo y folio de la inscripción de cada finca, así como las cargas y gravámenes que pesen sobre ella. Una de estas relaciones será remitida a la Inspección general de Servicios Socialagrarios del ministerio de Agricultura, Industria y Comercio; otra al Ayuntamiento respectivo, y la tercera quedará archivada como antecedente en el Registro.

Art. 4.º Los registradores de la Propiedad extenderán de oficio y bajo su responsabilidad, al tiempo de expedir estas relaciones, nota marginal en las inscripciones de las respectivas fincas y derechos reales impuestos sobre fincas rústicas, en la que conste esta expedición, que mientras subsista impedirá toda nueva inscripción de transmisión de dominio y constitución o extinción de cargas o derechos reales.

Trancurridos seis meses desde la fecha de estas anotaciones marginales, los registradores procederán de oficio a inscribir a nombre del Estado, representado por la Inspección general de los Servicios Socialagrarios a todos los efectos de la presente ley, el dominio de las fincas anotadas sobre las que, dentro de dicho plazo, no se haya dictado por el ministerio de Agricultura, Industria y Comercio la oportuna resolución dejando aquéllas sin efecto.

Se considerará a las resultancias de esta ley como propiedad rústica de las afectadas por esta disposición la que figure en los libros registros como tal en el día 10 de agosto de 1932, anulándose toda transmisión de dominio o imposición de carga o gravamen, de cualquier naturaleza que sea, que figure realizada con fecha posterior a la indicada, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.

En la Inspección general de los Servicios Socialagrarios se abrirá, dentro del término de treinta días, un libro registro, en el que constarán todas las personas encartadas en los procedimientos relacionados con el complot a que se refiere esta ley, y a partir de la fecha en que expire el indicado plazo serán válidas las transmisiones de inmuebles rústicos y derechos reales constituidos sobre los mismos, así como la constitución de gravámenes impuestos sobre aquellos bienes o derechos que se efectúen por actos o contratos celebrados por los titulares no comprendidos en el Registro que queda referido.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, las autoridades de todo orden estarán obligadas a remitir, en el plazo máximo de veinte días, desde la promulgación de esta ley, a la Inspección general de los Servicios Socialagrarios relación de las personas encartadas o que se encarten en toda clase de procedimientos relacionados con el aludido complot.

La Inspección general de los Servicios Socialagrarios tendrá facultad de certificar con relación

al libro registro mencionado y expedirá certificaciones a las personas que teniendo interés lo soliciten.

Los Ayuntamientos informarán a la Inspección general de los Servicios Socialagrarios en el término de treinta días, a contar desde aquel en que hubieren recibido del registrador de la Propiedad respectivo la relación correspondiente a las fincas de su término objeto de esta ley, sobre el contenido de aquéllas, rectificándola o ratificándola con arreglo a los datos que obren en sus archivos.

Art. 5.º La Inspección general de los Servicios Socialagrarios se constituye en Patronato administrador de los bienes rústicos afectados por esta ley hasta que funcione el Instituto de Reforma Agraria, gozando de personalidad jurídica para poseer, administrar y disponer, sin más limitaciones que las establecidas en esta ley y, en su día, en la de Reforma agraria. La Inspección hará el inventario de las fincas antes citadas, procediendo a su jubilación oficial en el plazo máximo de seis meses, a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.

Art. 6.º En tanto se procede por los órganos ejecutivos del Estado a la posesión material de las fincas inventariadas, éstas continuarán en su régimen normal de explotación. Los individuos que actualmente lleven por sí las fincas en cultivo directo vienen obligados a continuar dicha explotación, sin merma de su productividad media, en concepto de arrendatarios, conservando la propiedad del capital de explotación en todas sus formas.

La Inspección general de los Servicios Socialagrarios, con arreglo a las normas que señale la ley de Reforma agraria, fijará la renta que deben satisfacer al Estado estos arrendatarios desde la fecha del 10 de agosto de 1932.

Las fincas afectadas a esta ley y llevadas en régimen de arrendamiento, aparcería, etc., continuarán en poder de sus actuales cultivadores, los cuales deberán satisfacer las rentas, a partir de la fecha antes indicada, al Estado, que se considera subrogado en todos sus derechos y obligaciones inherentes al dominio de los bienes expropiados.

Art. 7.º Los daños causados en las fincas rústicas afectas a esta ley, tanto por deficiencia en el cultivo que pueda traducirse en merma de su productividad normal como por destrucción de sus mejoras permanentes, serán constitutivos de delito, previsto en el artículo 566 del Código penal.

Los jueces y Tribunales procederán de oficio, o a virtud de denuncia de las Comisiones mixtas de Policía rural de los Ayuntamientos, contra quien o quienes resulten autores materiales del delito, y además contra quien apareciere hasta ahora como dueño de la finca, instruyendo los sumarios correspondientes, en los que, como primera providencia, una vez comprobada la realidad del hecho delictivo, se decretará la prisión preventiva de los presuntos culpables y el embargo de todos sus bienes.

Art. 8.º Contra la inclusión de fincas en el in-

ventario que previene el artículo 4.º de esta ley no se dará otro recurso que el motivado en errores materiales de identificación del propietario o de la propiedad. Estos recursos habrán de interponerse en el plazo de treinta días, a contar desde la publicación oficial del inventario, ante la Inspección general de los Servicios Socialagrarios, que propondrá la resolución procedente en justicia al ministerio de Agricultura, Industria y Comercio. Contra esta resolución no se admitirá recurso alguno.

Las personas naturales que por efecto de esta ley quedaren desposeídas de los medios de asegurar su sustento tendrán derecho a reclamar una pensión alimenticia, mediante solicitud, y a condición expresa de probar la carencia absoluta de toda otra suerte de bienes o posibilidades de ingresos o medios de vida.

Art. 9.º Por los ministerios de Hacienda y de Agricultura, Industria y Comercio se habilitará el crédito necesario para la ejecución de la presente ley, y se dictará, en el plazo de dos meses, el reglamento para su aplicación.

Art. 10. La presente ley tendrá efectividad desde el momento de su publicación en la «Gaceta de Madrid».

Por tanto:

Mando a todos los ciudadanos que coadyuven al cumplimiento de esta ley, así como a todos los Tribunales y autoridades que la hagan cumplir.

Madrid, veinticuatro de agosto de mil novecientos treinta y dos. — *Niceto Alcalá-Zamora y Torres*. — El presidente del Consejo de ministros, *Manuel Azaña*.

Ministerio de Agricultura

El número 22 del apartado A) del artículo único de la ley de Amnistía de 24 de abril último declara nulas y sin efecto las expropiaciones sin indemnización realizadas en cumplimiento de lo dispuesto en la ley de 24 de agosto de 1932, y orden en consecuencia, que se restituyan los bienes objeto de las mismas a los expropiados.

La claridad del precepto legislativo excluye toda regla de interpretación; mas, no obstante, su ejecución requiere indispensables complementos normativos, que den justa solución a los problemas de distinta índole que la restitución de los bienes y derechos expropiados plantea en la realidad. En efecto, las expropiaciones verificadas por mandato de la expresada ley de 24 de agosto han dado motivo a la creación de situaciones jurídicas diversas — posesión, colonatos, arrendamientos, asentamientos, liberación de gravámenes, etc. —, sin quebrantamiento de los principios de la equidad y del Derecho; y, por otra parte, han engendrado numerosos asientos registrales, que han servido de título formal del derecho de propiedad atribuido al Estado por la ley de Expropiación, y que han de resolverse con la posible sujeción a las normas reguladoras del Derecho inmobiliario vigente, inspiradas, entre otros, en los principios de tracto sucesivo y consentimiento.

A tal fin responden las disposiciones del presente

decreto, inspirado en dos motivos fundamentales: uno, que la posesión de los bienes expropiados por parte del Instituto de Reforma Agraria, en nombre del Estado, se asimila al tipo clásico de la «posesión de buena fe», y ha de producir los efectos que a tal clase de posesión atribuye la legislación civil vigente; y otro, que la restitución de los bienes y derechos expropiados debe llevarse a cabo sin perjuicio posterior para el Estado ni para los propietarios a quienes se les restituyen; cumpliéndose así fielmente lo ordenado por la ley de Amnistía, a partir de la cual no pueden surtir ningún efectos tales expropiaciones y deben ser restituidos los bienes que fueron objeto de las mismas.

En atención a las consideraciones expuestas, de acuerdo con el Consejo de ministros y a propuesta del de Agricultura,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º En cumplimiento de lo dispuesto en el número 22 del apartado A) del artículo único de la ley de 24 de abril último, el Instituto de Reforma Agraria, en representación del Estado, procederá a reintegrar a los interesados o a sus causahabientes en la propiedad de las fincas rústicas y derechos reales constituidos sobre las de tal naturaleza que fueron objeto de expropiación sin indemnización, en virtud de las disposiciones de la ley de 24 de agosto de 1932, como pertenecientes a las personas comprendidas en las listas formadas por el ministerio de la Gobernación y publicadas por el de Agricultura mediante órdenes de 10 de octubre y 22 de diciembre de 1932 (*Gacetas* del 11 y 24 de dichos meses), y por el de Justicia, publicadas por órdenes de la Presidencia del Consejo de ministros de 2 y 19 de febrero último (*Gacetas* del 4 y 20 de tal mes).

El levantamiento de la incautación se hará mediante acta, suscrita por la representación del Instituto y por los respectivos propietarios o quienes legítimamente los representen.

Art. 2.º Los propietarios a quienes se les restituyan los bienes y derechos expropiados no podrán reclamar indemnización de ninguna clase, fundada en perjuicios ocasionados por consecuencia de actos realizados por el Instituto de Reforma Agraria en su actuación de propietario o administrador; quedando a salvo las acciones que por tales actos puedan deducir contra terceras personas.

Art. 3.º Los propietarios resarcirán al Instituto el importe del capital o precio de redención de los gravámenes constituidos sobre las mismas con anterioridad a la incautación que hubiere sido satisfecha por el Instituto.

No estarán obligados a satisfacer el importe de las mejoras necesarias ni los gastos de conservación, de incautación, ni de restitución; considerándose aplicadas a la satisfacción de los mismos, así como a los de administración y gestión, las rentas vencidas durante el tiempo de la incautación, háyanse o no satisfecho. En este último caso, el Instituto tendrá derecho a exigirlos de los colonos o arrendatarios, aun cuando éstos sean los mismos expropiados.

Las rentas pendientes correspondientes al año agrícola en curso se prorratearán entre el Instituto y el interesado, correspondiendo a aquél la parte

proporcional al tiempo transcurrido desde que comenzaron a devengarse hasta el día 24 de abril último.

Art. 4.º Los derechos reales sobre fincas rústicas que hubieren sido objeto de expropiación se reintegrarán a sus titulares o causahabientes en la forma y cuantía que actualmente revistan. Si se hubieren extinguido por redención del deudor u obligado, el Instituto abonará al titular el importe de la cantidad en que aquélla haya consistido. Si la extinción hubiere tenido efecto por ministerio de la ley, sin percibo de cantidad alguna por el Instituto, no tendrá éste que satisfacer indemnización alguna al titular expropiado.

El Instituto devolverá al titular o a sus causahabientes las cantidades que haya percibido en concepto de plazos o entregas a cuenta del capital de los derechos reales incautados, incluso los correspondientes a hipotecas constituidas en garantía de precio aplazado; pero en ningún caso las rentas o intereses correspondientes al período de tiempo comprendido desde el 24 de agosto de 1932 al 24 de abril de 1934. Tampoco podrá el Instituto reclamar cantidad alguna a los propietarios por las cantidades satisfechas por el mismo en concepto de intereses, rentas, pensiones correspondientes a dicho período de tiempo.

Art. 5.º Los arrendamientos concertados por el Instituto de las fincas a que este decreto se refiere serán válidos y quedarán subsistentes por el plazo y en las condiciones que determina la legislación vigente; entendiéndose subrogado el propietario en todos los derechos y obligaciones que, respecto a los arrendatarios, competieren al Instituto.

Art. 6.º Todos los expedientes y recursos que se hallen pendientes de resolución en el Instituto, sobre inclusión o exclusión de fincas y derechos comprendidos en el inventario especial de encartados serán sobreseídos en el estado en que se encuentren; haciendo constar el sobreseimiento por diligencia, en la que además se consignará el derecho de los interesados a la devolución de cuantos documentos hubieren presentado.

Se cerrará asimismo y quedará anulado el Registro especial de personas afectadas por la ley de 24 de agosto de 1932, a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 4.º de la misma. En lo sucesivo no se expedirá certificación alguna con referencia a dicho Registro.

Art. 7.º Las notas extendidas al margen de las inscripciones de dominio de las fincas rústicas y derechos reales expropiados, así como las inscripciones de dominio de dichos bienes extendidas a favor del Instituto de Reforma Agraria, en representación del Estado, serán canceladas por los registradores de la Propiedad en virtud de orden al efecto expedida por la Dirección general de Reforma Agraria. En el asiento de cancelación se hará constar expresamente que queda vigente y en la plenitud de sus efectos legales la inscripción de dominio o posesión que lo estuviera al tiempo de practicar el asiento a favor del Estado, como consecuencia de la ley de 24 de agosto de 1932.

La Dirección general de Reforma Agraria podrá enviar a los Registros las órdenes cancelatorias por

correo o por medio de cualquiera de sus funcionarios; extendiéndose en el primer caso de oficio el asiento de presentación a nombre de la expresada Dirección, autorizado solamente con la firma del registrador, no obstante lo dispuesto en el artículo 274 del reglamento hipotecario.

Cuando el Instituto de Reforma Agraria resultare acreedor por cualquier concepto de los propietarios expropiados, no se expedirá la orden de cancelación de las inscripciones practicadas a favor del Estado sobre bienes de los mismos hasta tanto que los que resulten deudores reintegren al Instituto el importe de su crédito o lo afiancen a su satisfacción. A tal efecto, el Instituto requerirá a dichos deudores para que en el término de treinta días hagan efectivo su débito o den fianza suficiente. Transcurrido este plazo sin que se verifique el pago ni se afiance, el Instituto podrá ejercitar el apremio administrativo, conforme al último párrafo de la base 3.^a de la ley de Reforma agraria, y una vez reintegrado su crédito ordenará la cancelación de las inscripciones de que se trate.

Art. 8.º La Dirección general de Reforma Agraria procederá a incluir en el Inventario general de

fincas susceptibles de expropiación las comprendidas en el Inventario especial de la ley de 24 de agosto de 1932 que, debiendo ser restituídas en virtud de lo dispuesto en la ley de Amnistía, se hallen afectadas por alguno de los apartados de la base 5.^a de la ley de 15 de septiembre de 1932; debiendo notificarse la inclusión a los propietarios, a fin de que éstos, si lo estiman conveniente, puedan interponer, dentro de los veinte días siguientes, el recurso establecido en el decreto de 8 de abril de 1933. Este recurso se entenderá en un solo efecto cuando las fincas a que se refiera hubieran sido objeto de aplicación a los fines de la Reforma agraria, y, por consiguiente, sólo se hará la entrega material de la finca al propietario cuando el recurso prospere. Si fuere desestimado, se considerará que la finca o fincas han sido objeto de ocupación temporal, a partir del 25 de abril último, a los efectos de satisfacer al propietario la renta correspondiente, con arreglo a la base 9.^a de la ley de Reforma agraria.

Dado en Madrid, a 4 de mayo de 1934. — *Niceto Alcalá-Zamora y Torres*. — El ministro de Agricultura, *Cirilo del Río y Rodríguez*.

Escrito elevado al ministro de Trabajo por la Federación Española de Trabajadores de la Tierra

EXCMO. SR.:

La Federación Española de Trabajadores de la Tierra, domiciliada en Madrid, Fernández de la Hoz, 51, a V. E. respetuosamente expone:

Las noticias que diariamente recibimos de todos los pueblos de España acusan un estado de indefensión absoluta de los campesinos en cuanto se refiere a las disposiciones protectoras del trabajo. Se incumplen las bases y la legislación social; se niega sistemáticamente el jornal a los agricultores organizados en nuestras Secciones, y en muchos puntos la clase patronal se jacta de que este verano sólo trabajarán los que ellos quieran, o dicho en otros términos, que matarán de hambre en plena cosecha a los braceros de la Unión General de Trabajadores.

No es difícil prever el resultado de esa táctica: la desesperación empujará a miles de hombres a conflictos y actos violentos, y todas nuestras Secciones y la Federación misma tendrán que recurrir—si no quieren sucumbir y negar la base de su existencia—a todos los medios que estén a su alcance para librar a nuestros compañeros de la persecución a que se encuentran sometidos ahora.

No creemos que nadie tenga interés en llevar al campo español a esa dramática lucha, que habría de ocasionar pérdidas y trastornos cuantiosos. Pero para evitarla no hay más que un camino, y es adoptar por parte del Gobierno, y con carácter general, algunas medidas enérgicas que vamos a exponer, y que, a nuestro juicio, son las únicas que pueden poner remedio a la situación que denunciámos:

INCUMPLIMIENTO DE BASES

Es preciso crear en cada pueblo una Comisión mixta de dos obreros y dos patronos, presidida por una persona neutral, designada por ellos o por el Jurado mixto correspondiente en caso de discrepancia.

Objeto de esta Comisión habrá de ser fiscalizar el cumplimiento de las bases y la legislación social, levantando actas de las infracciones, y realizar labor de conciliación en todos los conflictos y diferencias que se susciten entre patronos y obreros de la localidad.

Esta labor no tendrá efectividad si no puede ir seguida de sanciones, que podrían ser fuertes multas impuesta por el delegado de Trabajo, y arrestos gubernativos en caso de reincidencia.

En la cuestión relacionada con las bases rurales hace falta, además, que se apresure la aprobación de aquellas que correspondan a provincias que carecen aún de ellas.

REPARTO DE TRABAJO

Un elemental principio de justicia social exige que cuando escasea el trabajo se reparta el que existe entre los que tengan necesidad de él. Esto se hace frecuentemente en la industria y en los trabajos que se efectúan por los Municipios, estableciendo turnos, y lo hacen los mismos patronos rurales, enemigos de nuestra organización, con aquellos elementos incondicionales que tienen anotados en sus listas o Bolsas particulares; pero excluyen de esos turnos, deliberadamente, a nues-

tros afiliados, haciendo así de la crisis y de la miseria de los jornaleros un arma terrible de coacción, que, aun siendo inmoral e innoble, sirve admirablemente a esos patronos inescrupulosos para sus fines políticos.

Y esto es lo más grave que ocurre en el campo y lo que exige, a nuestro entender, medidas más urgentes y decisivas.

Estas pueden consistir en establecer la obligatoriedad del servicio de colocación y el reparto por turno riguroso del trabajo público y del particular, sin tener en cuenta para nada la naturaleza sindical de los trabajadores, sino su capacidad para el trabajo, apreciada, en caso de duda, por la misma Comisión arbitral de que hablamos antes.

Otra medida es el cumplimiento de las normas que la ley de Colocación señala sobre regulación de traslado y distribución de la mano de obra en los sitios donde escasean los braceros en épocas de siega, prohibiendo el empleo de obreros forasteros cuando existan parados en la localidad y reglamentando rigurosamente el uso de la má-

quina de segar, llegando incluso a su prohibición allí donde el censo de segadores sea muy elevado.

Todas estas cuestiones encajan bien dentro de la actual legislación. Las Comisiones mixtas que solicitamos están autorizadas por una disposición del señor director de Trabajo de fecha 26 de junio de 1933 («Gaceta» del 6 de julio).

La obligatoriedad del servicio de colocaciones y del turno está determinada en el artículo 9.º del reglamento de Servicios de colocación. Respecto a la limitación del uso de las máquinas, existe el precedente de acuerdos aprobados como bases de trabajo en Extremadura y Andalucía.

Esta Federación, segura de la justicia de lo que demanda y del carácter legal de las medidas que solicita, espera de V. E. las órdenes pertinentes que conjuren la presente situación, para que cese de una vez la indefensión social en que viven los campesinos y el peligro y la persecución de que son objeto.

Viva V. E. muchos años.

Madrid, 28 de abril de 1934.

Las consecuencias de la crisis del paro en los hijos de los desocupados

Una nota presentada por la Oficina Internacional del Trabajo al Comité de Protección a la Infancia de la Sociedad de Naciones señala de manera impresionante un aspecto, particularmente triste, de la crisis mundial del paro. Se trata de las consecuencias que el paro prolongado de tan gran número de trabajadores acarrea para sus hijos.

Evidentemente, las estadísticas de mortalidad y de enfermedad no permiten descubrir hasta ahora una agravación del estado de salud de las poblaciones en general y de los niños en particular. Sin embargo, numerosos indicios dejan suponer que el descenso general del nivel de vida sufrido desde hace largo tiempo por millones de familias de parados constituye una seria amenaza para la salud pública. Esta amenaza no alcanza el mismo grado en todos los países, pues depende de la intensidad del paro y de la importancia de las medidas de protección social que puedan atenuar los efectos de la crisis. De hecho, los peligros a que está expuesta la salud de los hijos de los parados resultan, sobre todo, de la falta de ropas y de cuidados corporales, de las malas condiciones de alojamiento y de una alimentación insuficiente. Por diferentes encuestas se ha reunido una documentación acerca de estos tres puntos.

En Bélgica, por ejemplo, un estudio hecho sobre el presupuesto de un cierto número de familias de parados ha demostrado que casi todas no pudieron renovar sus vestidos desde hacía numerosos meses.

En los Estados Unidos, según una encuesta de la National Federation of Settlement, hecha sobre

150 familias, 41 de éstas no tenían suficientes vestidos y muchas carecían totalmente de ropa de abrigo en invierno.

En el curso de una Conferencia convocada por la Secretaría de Estado del departamento de Trabajo se señaló que millares de niños se veían imposibilitados de ir a la escuela por falta de calzado.

Los datos que se suministran relativos a 40 escuelas de una ciudad alemana señalan 76 casos de niños que no podían acudir a las clases por el mismo motivo.

En Polonia, de 142 familias comprendidas en la encuesta hecha por el Instituto de Problemas Sociales, los miembros de tres familias estaban desprovistos de toda ropa interior y 131 familias no poseían sino los vestidos puestos. Resulta de otra encuesta sobre la situación de 383 familias de parados en las minas de Silesia y la industria textil de Lodz que de 382 escolares pertenecientes a dichas familias, 311, ó sea el 80 por 100, no podían frecuentar regularmente la escuela por falta de vestimenta.

Las malas condiciones de alojamiento se han agravado desde la crisis en una medida que es difícil determinar, pero que en numerosas ciudades plantea de nuevo el problema de las viviendas inhabitables. En Polonia resulta de tres encuestas relativas a numerosas familias de parados que en el 85 por 100 de los casos las viviendas se componían de una sola habitación para un promedio de cuatro a cinco personas. Para 61 familias, que formaban un total de 243 personas, había antes de la crisis 171 camas, y a consecuencia del paro sola-

mente hay 90. Un descenso de 44 por 100 del consumo de combustible contribuía a agravar las condiciones sanitarias de esos alojamientos. Una encuesta emprendida en 1932 en un distrito de Berlín ha demostrado que de 1.316 escolares, 529, ó sea el 40 por 100, no tenían cama. La Unión de Profesores de Sajonia atribuía el aumento de la nervosidad de los hijos de los parados que frecuentan las escuelas al hecho de que en muchos centros el 25, el 30 e incluso el 40 por 100 de los niños viven en alojamientos estrechos y no pueden dormir separadamente.

Sería superfluo insistir sobre la influencia que la agravación de las condiciones de alojamiento puede tener sobre la salud de los niños en general y sobre la propagación de ciertas enfermedades como la tuberculosis.

Un gran número de maestros de escuela y de médicos escolares han comprobado, sobre todo en Alemania, que los hijos de los parados tienen gran dificultad para concentrar su atención y para hacer un esfuerzo intelectual, y esto sería en gran parte atribuible a la imposibilidad en que se encuentran de alimentarse suficientemente.

En los Estados Unidos, en el verano de 1933, el número de niños que recibían una alimentación considerada insuficiente se evaluaba en seis millones. En Nueva York, de los 300.000 a 400.000 escolares examinados cada año, el porcentaje de débiles pasó de 13,5 en 1917 a 16,1 en 1930 y a 17,7 en los nueve primeros meses de 1932. Este aumento se comprobó, sobre todo, en los barrios pobres, como el de Mahatan, donde se registró el 16 por 100 de niños débiles en 1924, el 22,2 en 1931 y el 25,6 en los nueve primeros meses de 1932. Según los datos establecidos por los servicios de inspección escolar en el Estado de Pensilvania, de 768.000 niños examinados en 1929-1930, había un 18 por 100, ó sea 140.000, con alimentación deficiente. Los datos correspondientes a 1932-1933 permiten evaluar en 27 por 100 los niños con alimentación deficiente, lo que equivale a 216.000 individuos en una población escolar que se calcula actualmente en 800.000.

En Polonia, de 15.295 escolares cuyos padres sufren el paro, 3.730 niños no tenían desayuno, cerca de 1.150 no recibían comida en su casa y 2.690 no tenían almuerzo al mediodía. Es cierto que el 70 por 100, aproximadamente, de estos niños recibía en la escuela pan y leche, y algunas veces una ración de carne, cuatro veces por semana. Muchos de ellos, el 30 por 100 en ciertas escuelas, no recibían sino esta comida, que habría de considerarse como un simple suplemento de alimentación; pero para ellos representaba el único recurso para no morir de hambre.

En Austria se ha comprobado que el 83 por 100 en Wilhembourg y el 57 por 100 en Viena de los hijos de los parados tienen un peso inferior al normal. En los distritos industriales de la Baja Austria, donde el paro afecta a la mayor parte de la población, una encuesta médica ha comprobado que el estado general del 75 por 100 de los niños examinados era bastante malo.

En Gran Bretaña los fenómenos perniciosos de las condiciones de ropa, alojamiento, alimen-

tación y enfermedad, consecutivas a la crisis de paro, fueron también comprobados, pero en proporciones mucho menores, lo que se explica por la existencia del seguro de paro, que ha paliado, en cierto modo, los efectos de la crisis.

Resulta de los datos recogidos por la Oficina Internacional del Trabajo que la crisis económica actual ha determinado en casi todas partes un descenso tan grande de las condiciones de vida, que millones de niños están amenazados de no poder desarrollarse en condiciones higiénicas normales. El peligro es particularmente considerable en los países donde son insuficientes las medidas de protección social para combatir la miseria provocada por la crisis. Pero esta última no tiene únicamente repercusiones sobre la higiene pública o privada: ejerce también una influencia nefasta en la moral de los niños, cuyos juegos y deberes escolares traducen a veces, como se ha observado en Alemania, el estado de penuria y de angustia que reina en la familia.

Sin embargo, nada tan exacto como la afirmación estampada en nuestro programa, y que dice así: «Los privilegios de la burguesía están garantizados por el Poder político, del cual se vale aquélla para dominar al proletariado.»

Veámoslo.

¿Dónde se proyectan, discuten y aprueban las leyes que rigen la sociedad presente? En el Parlamento, en el «templo de las leyes», según le llaman enfáticamente los oradores de la burguesía y los escritores que están a su servicio.

Y ¿quiénes eligen el Parlamento? ¿Quiénes le forman? La elección, ya sea por medio de un sistema restrictivo, ya por otro más amplio o por el sufragio universal, la verifican siempre los privilegiados. Como la libertad política, única que hoy cabe tener, no lleva aparejada la libertad económica, el obrero, libre políticamente para votar al que le parezca, no lo es por la esclavitud que le imponen el taller o la fábrica. La prueba de que, aun por el sufragio universal, las elecciones son hechas por los burgueses nos la suministran los países en que ha imperado o impera este sistema de elección, tales como el nuestro, Francia, Suiza, Alemania y los Estados Unidos. Nosotros defendemos el sufragio universal por ser un excelente medio de agitación y propaganda para nuestras ideas; pero le negamos la virtud de poder por sí mismo emancipar a la clase proletaria.

(PABLO IGLESIAS. «Propaganda socialista», páginas 90 y 91.)

Reuniones de la Comisión ejecutiva de la Unión General de Trabajadores

REUNION DEL 11 DE ABRIL DE 1934

Con asistencia de Anastasio de Gracia, presidente; Pascual Tomás, José Díaz Alor, Manuel Lois, Felipe Pretel, Antonio Génova, Ricardo Zabalza, Carlos Hernández, Amaro Rosal y Francisco Largo Caballero, se reunió la Comisión ejecutiva de la Unión General de Trabajadores.

Por atender otras obligaciones ineludibles excusa su asistencia Mariano Muñoz.

Se concede el ingreso a seis Secciones, con 554 asociados, y causan baja dos, con 116.

La Ejecutiva queda enterada de la renovación del Comité de la Organización Telefónica Obrera y de que ha sido designado para que la represente en el Comité nacional Sergio Alvarez Ibáñez.

La Federación de Trabajadores de Municipios de España ha elegido para el Comité nacional de la Unión General de Trabajadores a Baltasar Eusebio Gordo.

Los compañeros Pascual Tomás y Manuel Lois dan cuenta de su gestión en el Congreso extraordinario de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, que es aprobada.

La Federación Obrera Montañesa pide a la Ejecutiva designe un representante para que asista al Congreso que va a celebrar el día 21 del corriente. Se nombra a Anastasio de Gracia.

La Federación Sidero-Metalúrgica envía una amplia comunicación informando del origen y desarrollo de la huelga que desde el día 9 de marzo viene sosteniendo el Sindicato Metalúrgico El Baluarte, de Madrid.

La huelga, merced a gestiones realizadas por la Federación, el Sindicato y la Junta administrativa de la Casa del Pueblo, parecía en vías de solución. En efecto, en referéndum celebrado entre los huelguistas se había aceptado una fórmula propuesta por el director general de Trabajo, consistente en conceder la jornada de cuarenta y cuatro horas a las Secciones de Calderería, Viga Armada y Cerrajería, confirmándola para las de Calefacción y Ascensores. Pero esta fórmula, que, repetimos, fué aprobada por los huelguistas, fué rechazada por los patronos, que se mantienen en la más ruda intransigencia.

Como la huelga se prolonga, y los huelguistas no han percibido ni un solo subsidio, la Federación solicita de la Unión General de Trabajadores que ésta recomiende a sus Secciones la práctica de la solidaridad para con los huelguistas.

La Ejecutiva, de acuerdo con la Federación Sidero-Metalúrgica, acordó recomendar a todas las Secciones, con el mayor interés, que presten la solidaridad económica a los metalúrgicos madrileños en huelga; remitiendo con la mayor urgencia las cantidades que les sean posibles a nombre de Faustino García, Casa del Pueblo, Madrid.

Asimismo acordó la Ejecutiva que caso de con-

siderarse necesario acompañe en las gestiones que se realicen tendentes al buen fin de la huelga el presidente de la Unión General de Trabajadores, Anastasio de Gracia.

Las Secciones de la Unión General de Trabajadores quedan requeridas por la presente nota para que presten solidaridad a los compañeros metalúrgicos en la forma ya indicada.

Se tratan otros asuntos de régimen interior, y se levantó la sesión.

REUNION DEL DIA 19 DE ABRIL

Se ha reunido la Comisión ejecutiva de la Unión General de Trabajadores, con asistencia de Anastasio de Gracia, que preside; Pascual Tomás, Manuel Lois, Ricardo Zabalza, Mariano Muñoz, Amaro Rosal y Francisco Largo Caballero.

Por no encontrarse en Madrid excusan su asistencia José Díaz Alor, Felipe Pretel y Antonio Génova, y por otras obligaciones ineludibles Carlos Hernández.

Se concede el ingreso a 18 Secciones, con 1.052 asociados, y causan baja siete, con 408.

Se admite como organismo nacional al Sindicato Español del Vidrio y sus Derivados, constituido por Secciones pertenecientes a la Unión General de Trabajadores.

El Sindicato Español de Trabajadores de Comercio comunica que ha enviado a sus Secciones una circular para que cumplan la resolución de la Ejecutiva en cuanto se relaciona a la afiliación de empleados de oficinas. Como en su carta indica que allí donde no exista Asociación de Empleados les admitirán en la de Dependientes, se acuerda advertirles que quedan en la obligación de dar traslado de estos asociados cuando aquéllas se constituyan.

La Asociación de Porteros solicita se designe un delegado de la Ejecutiva que asista a una asamblea que va a celebrar. Se acuerda contestar que no es posible atender lo que desea.

La Comisión ejecutiva tiene conocimiento de amplias comunicaciones de la Federación Española de Empleados de Oficinas y de varios compañeros del Comité nacional de la misma Federación, así como del nombramiento de una Comisión ejecutiva hecho por el Congreso celebrado en la Casa del Pueblo de Madrid los días 14, 15 y 16 de abril, y, sabedora de que para el día 6 de mayo está convocado otro Congreso, acuerda abstenerse de emitir su opinión respecto del problema que se le plantea hasta tanto que se celebre el Congreso convocado para los primeros días del mes próximo.

La Federación de Juventudes Socialistas pide a la Ejecutiva designe uno de sus componentes para

asistir al Congreso que está celebrando. Es nombrado el compañero Pascual Tomás.

Se designa a este mismo compañero para que lleve la representación de la Comisión ejecutiva en el acto de conmemoración del XLII aniversario de la fundación de la Sociedad de Panaderos Candelistas de Madrid.

El Secretariado provincial de la Unión General de Trabajadores de Valencia informa ampliamente del origen, desarrollo y posibles derivaciones de la huelga que vienen sosteniendo los obreros de agua, gas y electricidad, advirtiendo que es muy posible que se declare la huelga general.

La Comisión ejecutiva acuerda hacer constar, por medio de la presente nota, que, contra las manifestaciones que a diario viene haciendo el ministro de la Gobernación, ni la huelga de Valencia, ni la de Zaragoza, ni la de metalúrgicos de Madrid, ni ninguna otra de las que están pendientes, tienen el más leve matiz político. Todas ellas, como otras que ya se han solucionado, tienen por origen reivindicaciones de carácter social perfectamente claras y definidas. Si no se solucionan con la rapidez deseada y se complican no es por voluntad de los huelguistas ni de sus dirigentes. Cúlpese de ello a la pasividad que para intervenir y darles solución muestra el Gobierno, y a la falta de la más elemental discreción por parte del ministro de la Gobernación, que con sus declaraciones irrita a los trabajadores y da aliento a los patronos para producir las huelgas, primero, y para mantenerse en la más absoluta intransigencia, después.

La Comisión ejecutiva de la Unión General de Trabajadores protesta de la actitud de parcialidad en que el Gobierno se halla colocado respecto de las huelgas pendientes y de las indiscretas declaraciones que a diario viene haciendo el ministro de la Gobernación.

Acuerda, asimismo, la Ejecutiva ponerse al habla con la Federación nacional de la industria, ofreciéndose para realizar conjuntamente las gestiones que estime preciso realizar cerca del Gobierno.

La Federación Local de Asociaciones Obreras de Puertollano informa también del origen y desarrollo de la huelga que se ha iniciado en aquel pueblo a causa del despido de obreros de la Empresa de Peñarroya. Se faculta a la Secretaría para que, en este, como en otros casos parecidos, designe a un compañero de la Comisión ejecutiva que acompañe en sus gestiones a los compañeros que vengán a realizarlas en representación de los organismos en huelga.

La Ejecutiva queda informada de una amplia comunicación del Secretariado de la Federación de Trabajadores de la Tierra de Ciudad Real, relacionada con una orden del ministerio de Trabajo, por la cual se excluye de los efectos de una disposición del mismo ministerio, aparecida en la *Gaceta* de 25 de febrero último, a todos los obreros de aquella provincia, orden que ha producido grande y justificado disgusto entre los obreros del campo, a quienes perjudica.

Se acuerda estar al habla con la Federación na-

cional, por si fuera necesario realizar gestiones tendientes a la anulación de la indicada orden comunicada.

El compañero Largo Caballero da amplia cuenta de su gestión en el Congreso del Secretariado regional de la Unión General de Trabajadores en Cataluña, siendo aprobada sin discusión.

Asimismo se aprueba la gestión de Anastasio de Gracia en un acto de propaganda celebrado por la Sociedad de Peones de San Sebastián.

A una carta de la Asociación de Empleados de Tribunales Tutelares de Menores, en la que justifica la retirada de sus delegados del Congreso recientemente celebrado por los empleados de oficinas, se acuerda contestar en el mismo sentido que a la Federación nacional y a la Ejecutiva designada en dicho Congreso.

La Federación Nacional de Obreros de Aviación organiza su primer Congreso ordinario para el día 28 del corriente, y solicita de la Ejecutiva designe un compañero que la represente. Se nombra a Anastasio de Gracia.

REUNION DEL DIA 26 DE ABRIL

Bajo la presidencia de José Díaz Alor, y con asistencia de Pascual Tomás, Anastasio de Gracia, Felipe Pretel, Mariano Muñoz, Manuel Lois, Ricardo Zabalza, Amaro Rosal, Antonio Génova y Francisco Largo Caballero, se ha reunido la Comisión ejecutiva de la Unión General de Trabajadores.

Excusa su asistencia a dicha reunión el compañero Carlos Hernández.

Se concede ingreso a dos Secciones, con 60 afiliados.

La Federación de Obreros y Empleados de Juntas de Obras de Puertos de España comunica a la Comisión ejecutiva la necesidad en que se encuentra de declarar la huelga, en virtud de no cumplirse por el ministerio de Obras públicas el decreto publicado el día 3 de diciembre del 1933.

La Comisión ejecutiva acuerda realizar en el ministerio correspondiente las gestiones necesarias para evitar en lo posible la declaración del conflicto.

La Federación provincial del Transporte nos remite copia de la carta que ha enviado al Comité de huelga del Sindicato Metalúrgico El Baluarte, de Madrid; quedando enterada la Comisión ejecutiva de su contenido.

La Federación de Asociaciones Obreras de Ceuta notifica que la Sección de Almadreros-Pescadores de aquella localidad tenía presentado un contrato de trabajo a los patronos, quienes se niegan a tratar con los obreros, trayendo el personal que necesitan de los puertos de Almería, Cartagena y Huelva. Añade en su carta que por el delegado de Trabajo y por el gobernador se reconoce la razón que les asiste, y a pesar de ello no encuentran satisfacción a sus justas peticiones.

La Comisión ejecutiva estima, a la vista de los antecedentes, realizar cerca del ministerio las gestiones oportunas para que se resuelva prontamente el problema que estos compañeros tienen planteado.

El Secretariado regional de Cataluña envía diversas comunicaciones, en las cuales da cuenta a la Comisión ejecutiva de que hasta el momento presente no se ha dado de baja del Secretariado ninguna de las Secciones que le integran y cuyos delegados se retiraron del Congreso celebrado últimamente en Barcelona.

Solicita criterio de la Comisión ejecutiva para poder resolver en orden y relación a una comunicación que les ha enviado la Federación regional Textil; acordándose por la Comisión ejecutiva convocar al Comité ejecutivo de la Federación Nacional del Arte Textil y Fabril.

La Federación provincial de Almería notifica a la Comisión ejecutiva que hace unos días ha sido levantada la clausura de sus organizaciones obreras, y que inmediatamente ha celebrado una reunión, eligiendo nueva Comisión ejecutiva.

Se acuerda felicitarles por haberse reintegrado a la vida diaria de la organización y alentarles en el cumplimiento de sus deberes.

La Sociedad Unión General de Trabajadores Renovación, de San Ildefonso, solicita el concurso del compañero Rodolfo Obregón para intervenir en un acto de propaganda que celebrará el próximo día 29; acordando la Comisión ejecutiva designar al citado camarada para el susodicho fin.

El Secretariado regional de Cataluña envía relación de los actos de propaganda que piensa realizar en el próximo mes de mayo en Barcelona. Señala los nombres de los oradores que han de intervenir y las poblaciones donde los actos se han de celebrar. La Comisión ejecutiva acuerda comunicarles que preparen el plan de propaganda que estimen pertinente, enviándonos relación de las localidades que conviene visitar, y dejando a criterio de la Ejecutiva el señalar el nombre de los compañeros que han de realizar en su día dicha labor de propaganda.

La Federación Sidero-Metalúrgica hace entrega a la Unión General de Trabajadores de la cantidad de 1.485 pesetas que importa la primera lista de la suscripción iniciada entre sus Secciones en favor de los camaradas austríacos.

El presidente y secretario de la Federación de Empleados de Oficinas solicitan de la Comisión ejecutiva el envío de cupones para la cotización, y la Ejecutiva acuerda ratificar el acuerdo tomado en su reunión pasada, y esperar, por consiguiente, a la celebración del Congreso que dicha Federación tiene convocado para el próximo mes de mayo.

La Federación de Asociaciones Obreras de Puertollano agradece a la Comisión ejecutiva el interés demostrado en la resolución del conflicto que aquellos compañeros están sosteniendo contra la Empresa. Advierte, además, que las Secciones de Mineros, Metalúrgicos, Electricistas y Productos Químicos se han dirigido a sus respectivas Federaciones nacionales de industria recabando solidaridad económica.

La Comisión ejecutiva se da por enterada de estas comunicaciones, y designa a los compañeros Anastasio de Gracia y Pascual Tomás para

que realicen en el ministerio las gestiones oportunas.

El compañero Anastasio de Gracia da cuenta del Congreso celebrado en Santander, al cual acudió en representación de la Unión General de Trabajadores. Indica que asistieron más de cien delegados y que presidió las deliberaciones del mismo un alto espíritu de comprensión y ecuanimidad, demostrativo de la enorme valía que la Federación Obrera Montañesa tiene actualmente.

El compañero Pascual Tomás da cuenta de haber asistido también, en nombre de la Unión General de Trabajadores, al Congreso celebrado por los jóvenes socialistas, en el cual pudo observar la disciplina de estos compañeros, unida a una gran preocupación por conseguir que los acuerdos adoptados en el Congreso tuvieran aquella alteza de miras que las circunstancias políticas demandan.

El mismo compañero informa de haber asistido al acto sindical organizado en conmemoración del aniversario de la Sección de Panaderos.

Son aprobadas por unanimidad las gestiones de los compañeros Anastasio de Gracia y Pascual Tomás.

REUNION DEL DIA 3 DE MAYO

Se ha reunido la Comisión ejecutiva de la Unión General de Trabajadores, bajo la presidencia de Anastasio de Gracia y con asistencia de los siguientes compañeros: José Díaz Alor, Pascual Tomás, Felipe Pretel, Antonio Génova, Manuel Lois, Mariano Muñoz, Carlos Hernández, Amaro Rosal y Francisco Largo Caballero.

Se concede el ingreso a 16 Secciones, con 767 asociados, y causan baja siete, con 295.

Se acuerda dirigir una comunicación a las Federaciones nacionales indicándoles la conveniencia de que se dirijan a sus Secciones de Cataluña llamándoles la atención sobre el contenido de una carta que nos remite el Secretariado de aquella región.

Asimismo se acuerda contestar una carta de la Sociedad de Obreros Panaderos de Mataró, pidiéndole envíe justificantes de ciertos hechos que plantea.

A una comunicación de la Federación de Empleados de Oficinas se acuerda contestar que la Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores no puede reconocer otra Comisión ejecutiva de la Federación que la que viene actuando desde hace tiempo, elegida por un Congreso convocado con arreglo a las normas reglamentarias; recomendar a dicha Ejecutiva que realice todas las gestiones precisas para reunir el Congreso convocado para el día 6 del actual, e insistir en que no debe adoptar medida alguna contra ninguna de sus Secciones en tanto el Congreso no resuelva sobre los problemas pendientes.

La Federación Nacional de Obreros de Aviación comunica que por haber sido declarado el estado de alarma se le ha denegado la autorización de su Congreso, el cual celebrarán tan pronto desaparezcan las causas que ahora lo impiden.

A la vista de una comunicación de la Federa-

ción Nacional de Productos Químicos, la Ejecutiva acuerda dirigirse por medio de la presente nota a todas las Secciones que la integran recomendándoles acudir en ayuda de nuestros compañeros de Puertollano, que vienen sosteniendo una huelga general iniciada contra la Empresa minera y metalúrgica de Peñarroya, que, al amparo de circunstancias que considera le son favorables, pretende dejar sin efecto compromisos pactados con la organización. Ante semejante conducta es preciso que todas las Secciones de la Unión manifiesten su solidaridad con los huelguistas enviando cuantas cantidades le sean posibles a nombre de Antonio Cañizares, Centro Obrero, Puertollano.

A una nota de la Federación de Sociedades Obreras de Ceuta consultando sobre instrucciones que circulan, relacionadas con la declaración de una huelga general en toda España, se acuerda contestar que no hay tales instrucciones, al menos que la Unión conozca, y que no deben secundar ningún movimiento huelguístico de tal naturaleza si no respondiera a órdenes de nuestros organismos.

La Sociedad de Obreros en Loza de Carabanchel Bajo comunica que la huelga que sostiene en la fábrica establecida en dicho pueblo sigue en el mismo estado. Solicitan se les acompañe en la realización de unas gestiones, y la Ejecutiva acuerda acceder a lo solicitado.

Teniendo en cuenta que para el día 4 de junio próximo darán comienzo en Ginebra las sesiones de la Conferencia Internacional del Trabajo, se acuerda facultar al secretario general a fin de que tan pronto se reciba la oportuna comunicación del ministerio de Trabajo convoque al Comité nacional para designar los asesores que hayan de acompañar al delegado que ha de asistir a dicha Conferencia.

La Comisión ejecutiva tiene conocimiento de la intervención de la fuerza pública con motivo de los actos celebrados el Primero de Mayo en algunos pueblos, entre ellos Fuente del Maestre, y acuerda hacer manifestación de su más enérgica protesta por la forma en que las autoridades vienen procediendo, con la complacencia, si no con el mandato expreso, del Gobierno de la República.

El compañero Manuel Lois informa de los acuerdos adoptados en la última reunión del Consejo de la Fundación Pablo Iglesias, siendo aprobada su gestión.

Carlos Hernández informa, a su vez, de la intervención que circunstancialmente ha tenido en las gestiones que finalizaron con la solución de la huelga general de Valencia, y la Ejecutiva se muestra satisfecha de la intervención de nuestro camarada, la cual, por otra parte, realizaban el presidente y el secretario de la Unión General de Trabajadores en Madrid.

Por último, los reunidos informan de la impresión obtenida por cada uno de ellos en los pueblos que visitaron con motivo de los actos celebrados el Primero de Mayo, impresión que no puede ser más optimista para los fines que persiguen la Unión General de Trabajadores y el Partido Socialista.

REUNION DEL DIA 10 DE MAYO

Se ha reunido la Comisión ejecutiva de la Unión General de Trabajadores. Presidió Anastasio de Gracia y asistieron los compañeros siguientes: José Díaz Alor, Pascual Tomás, Felipe Pretel, Manuel Lois, Amaro Rosal, Antonio Génova, Mariano Muñoz, Ricardo Zabalza, Carlos Hernández y Francisco Largo Caballero.

Se concede ingreso a 27 Secciones, con 347 afiliados, y causan baja cuatro, con 113.

El Secretariado provincial de Valencia comunica que ha quedado resuelta la huelga general que venían sosteniendo en aquella capital, siendo puestos en libertad todos los detenidos y abiertos los centros obreros clausurados. Se acuerda ver con satisfacción el término de la huelga.

El Secretariado regional de Cataluña envía diversas comunicaciones relacionadas con el Congreso recientemente celebrado, quedando enterada la Ejecutiva y ratificando los acuerdos que sobre el particular tiene adoptados. Sobre el mismo caso escribe la Sociedad de Panaderos La Espiga, de Barcelona. Se mantiene la misma resolución.

De acuerdo con lo que solicita la Agrupación Socialista de Pozuelo de Alarcón, la Ejecutiva resuelve escribir a La Mutualidad Obrera de aquel pueblo sobre asunto que interesa a ambos organismos.

De Bullas (Murcia) se ha recibido un amplio informe relacionado con ciertas diferencias que existen entre determinados elementos que pertenecen a dos organizaciones de bien distinto matiz. Se acuerda pedir informe a los compañeros de Murcia.

De Avila comunican que han sido detenidos varios compañeros a consecuencia de la explosión de un petardo al paso de un tren que iba a El Escorial el día 22 de abril. Se dice que ha sido maltratado algún compañero y para comprobarlo se pide que vaya un diputado. Se acuerda confiar esta gestión al compañero Vidarte.

La Federación Local de Sociedades Obreras de Sevilla comunica que va a celebrar su Congreso los días 10 al 13 del mes corriente. Por su parte, la Federación provincial de dicha localidad organiza el suyo para los días 18 al 20, y pide que se designe un compañero de la Ejecutiva que asista a las sesiones. Se nombra al compañero Ricardo Zabalza, secretario de la Federación de Trabajadores de la Tierra.

Para formar parte del Comité nacional han sido elegidos el camarada Atilano Granda, por la Federación de la Industria Hotelera, y César G. Lombardía, por la de Trabajadores de la Enseñanza.

Se da cuenta de un oficio del ministerio de Trabajo pidiendo se nombre un delegado y dos asesores técnicos para representar a la clase trabajadora en la Conferencia Internacional del Trabajo que comenzará sus sesiones el día 4 de junio próximo en Ginebra. Como por acuerdos anteriores el delegado debe serlo el secretario general, el compañero Caballero pide que se propon-

ga al Comité nacional, ya convocado a estos efectos, que le releve de ir a Ginebra, dadas las obligaciones a que tiene que hacer frente en Madrid, y que le sustituya el secretario adjunto. La Ejecutiva, por unanimidad, acepta las excusas del secretario y acuerda hacer la oportuna propuesta al Comité nacional.

Se da lectura a varias comunicaciones de la Federación de Empleados de Oficinas y distintas Secciones, acordándose convocar a la Comisión ejecutiva y a los que han sido elegidos en el Congreso celebrado el día 14 de abril a una reunión, que deberá celebrarse el sábado próximo, a las diez de la mañana, en el domicilio de la Unión General, a fin de ver si se encuentra una fórmula que resuelva las diferencias que existen.

La Unión General de Trabajadores de Guipúzcoa desea organizar un acto de concentración, a cuyo efecto pide la intervención de los compañeros Largo Caballero, Prieto y otros dos diputados socialistas. Se acuerda contestar que, dado el estado de alarma y la situación política en general, no es posible intentar el acto que se propone.

La Federación de la Industria Hotelera celebrará su Congreso ordinario el día 28 y siguientes del mes actual. Para que represente a la Ejecutiva es nombrado el compañero Anastasio de Gracia.

La Federación Provincial de Sociedades Obreras de Alicante informa de la situación en que se encuentra la huelga de Elche y de los acuerdos tomados por el Comité de la Federación. La Ejecutiva, teniendo en cuenta que el compañero Carlos Hernández va a Orihuela, le encarga que se ponga al habla con los compañeros de la capital y recoja cuantos informes considere de interés por si fuera preciso hacer alguna gestión cerca del Gobierno.

El Secretariado regional de Cataluña informa ampliamente de los sucesos ocurridos con motivo de la llegada a Barcelona de los hijos de los huelguistas de Zaragoza, del intento de huelga general que allí hubo y de la conducta seguida por el Secretariado, que es aprobada sin discusión.

El compañero Anastasio de Gracia informa de su viaje a Zaragoza con motivo de la huelga general que acaba de resolverse. Informó de los orígenes de la huelga y de su desarrollo, de la intervención del gobernador, de las autoridades subalternas y del ministro de la Gobernación, intervenciones que, más que a resolver la huelga, han contribuido a agravarla. Por último, ha intervenido el delegado provincial de Trabajo y la huelga, según las informaciones de prensa, ha quedado resuelta.

El compañero Anastasio de Gracia encomia la actitud observada por los trabajadores de Zaragoza y su admirable espíritu de sacrificio, que les ha permitido resistir tanto tiempo en huelga, luchando con la incapacidad de las autoridades, con la intransigencia de los patronos y con el hambre.

La Ejecutiva acuerda felicitar a los compañe-

ros de Zaragoza por su actitud y por el triunfo obtenido, así como protestar contra la conducta del gobernador y del Gobierno, verdaderos responsables de que la huelga haya adquirido las proporciones que tuvo y de su largo tiempo de duración.

Pascual Tomás da cuenta de su intervención en las gestiones realizadas con motivo de la huelga general de Puertollano, la cual ha quedado solucionada por laudo publicado por el ministro de Trabajo. Se aprueba esta gestión.

El compañero Manuel Lois informa de que muchas organizaciones han recibido la convocatoria para la elección de vocales del Instituto Nacional de Previsión. Se acuerda pedir los datos necesarios para llegar a la confección de una candidatura que sirva de orientación a las Secciones de la Unión General de Trabajadores.

Y después de cambiar impresiones sobre distintos asuntos de régimen interior, se levantó la sesión.

REUNION DEL COMITE NACIONAL DEL DIA 11 DE MAYO

Se ha reunido con carácter extraordinario el Comité nacional de la Unión General de Trabajadores para designar el delegado y los dos asesores técnicos que han de asistir en representación de la clase obrera a la XVIII Conferencia Internacional del Trabajo.

Han estado presentes en la reunión:

Por la Comisión ejecutiva los compañeros siguientes: Anastasio de Gracia, José Díaz Alor, Francisco Largo Caballero, Pascual Tomás, Felipe Pretel, Ricardo Zabalza, Manuel Lois, Mariano Muñoz y Antonio Génova.

Por el Comité nacional: Salvador Vidal, Angel Gómez Jiménez, Ramón Lamóneda, Luis López Santamarina, Mariano Villaplana, Luis P. García Lago, Joaquín Varela, José Cabeza, Gerardo Ibáñez, Rafael Mira, Baltasar Eusebio Gordo, Luis Martínez, Francisco López Rodríguez, Enrique Santiago, Gregorio Guerra, Francisco Fernández Bermúdez, Pablo Cortés Folgueira, Manuel Vidal, Julián Torres Fraguas, Tomás Bernal, Félix Beltrán, Atilano Granda, Lauro Villalba, Fernando Ruiz Cao, Sergio Alvarez y Guillermo Martín.

Los compañeros Manuel González Peña, José Aguadé y Pedro Vélez, residentes fuera de Madrid, formulan su proposición por escrito.

Abierta la sesión por Anastasio de Gracia, éste expone el objeto de la misma y la propuesta que formula la Comisión ejecutiva, la cual, a requerimiento del secretario general, ha acordado proponer al Pleno que releve por esta sola vez al compañero Largo Caballero de la obligación de asistir a la Conferencia, pues de hacerlo tendría que abandonar obligaciones derivadas de sus cargos, y los trabajos inherentes a ellas quedarían paralizados por espacio de un mes, que es lo que se supone dure la Conferencia, incluidos los viajes.

Por unanimidad se aceptan las razones expuestas por la Ejecutiva, y queda elegido delegado, por corresponderle reglamentariamente, el compañero Pascual Tomás.

Se nombra una Ponencia compuesta por los compañeros Ramón Lamonedá, Mariano Villaplana, Francisco Fernández y Joaquín Varela para que propongan los nombres de los dos asesores técnicos, suspendiéndose la sesión para darles lugar a estudiar la proposición.

Reanudada la sesión, el compañero Joaquín Varela lee la siguiente candidatura: Asesores efectivos: Anastasio de Gracia y Ramón Lamonedá; suplentes: Enrique Santiago y Manuel Lois. Los dos primeros informaron al Comité de la imposibilidad de desplazarse de Madrid por tanto tiempo como requiere la Conferencia, pues el primero por el trabajo urgente a realizar en la Federación de la Edificación, y el segundo por sus cargos de secretario de las Cortes y de la minoría parlamentaria socialista, vienen obligados a permanecer aquí. Después de ligera discusión, el Comité nacional acepta las explicaciones dadas por De Gracia y Ramón Lamonedá, y acuerda que los sustituyan los que vienen propuestos como suplentes, o sea Enrique Santiago y Manuel Lois.

Y no habiendo más asuntos, se levantó la sesión.

REUNION DEL DIA 12 DE MAYO

Para examinar el pleito existente entre las organizaciones de los Empleados de Oficinas y ver de llegar a una solución, la Comisión ejecutiva de la Unión General de Trabajadores ha reunido a las partes interesadas, acudiendo a la reunión los compañeros siguientes:

Por la Ejecutiva de la Federación: Módenes, Beltrán, Tiburcio Díaz Carrasco y Fernández de Avila.

Por los elegidos en el Congreso del 14 de abril: Riesgo, Goicuría, Consuegra, Hernández, Merino y Quintín.

Por la Ejecutiva de la Unión General: Anastasio de Gracia, José Díaz Alor, Felipe Pretel, Manuel Lois, Antonio Génova y Francisco Largo Caballero.

Expuesto por el presidente de la Unión General el motivo que había llevado a la Ejecutiva a convocar esta reunión, y requeridas ambas partes para que dijeran si estaban dispuestas a acatar los acuerdos que la Ejecutiva de la Unión General adoptase para resolver el pleito pendiente, unos y otros, previas algunas observaciones sobre las causas que habían creado la situación actual, manifestaron su absoluta conformidad y acatamiento a lo que se resolviera.

Anastasio de Gracia les indicó el propósito de la Ejecutiva de convocar a un Congreso de la Federación, y fué aceptado por unanimidad, y una vez que ambas partes reiteraron su propósito de acatar las resoluciones de la Ejecutiva de la Unión General, se dió por terminada la reunión con los representantes de Empleados de Oficinas.

Seguidamente la Ejecutiva adoptó los siguientes acuerdos:

1.º Convocar a un Congreso a todas las Secciones de Empleados de Oficinas pertenecientes a la Federación nacional y recomendándoles que acudan todas, a ser posible.

2.º Que en tanto este Congreso no se celebre, no reconocer más Ejecutiva de la Federación que la que fué elegida en el Congreso reglamentario celebrado en junio de 1932.

3.º Que queda anulada la baja en la Federación nacional de la Sección de Madrid; y

4.º Consiguientemente, quedan anulados los expedientes o acuerdos de expulsión de algunos compañeros de la misma Sección Madrid y que tengan por origen el pleito que se está ventilando.

Por último, la Ejecutiva acuerda hacer gestiones para que el Congreso se celebre a la mayor brevedad posible.

Federación Obrera Montañesa

X Congreso

En el salón de actos de la Casa del Pueblo de Santander se ha celebrado en los primeros días de la segunda quincena del mes de abril el X Congreso ordinario de la Federación Obrera Montañesa.

La Comisión ejecutiva de la Unión General de Trabajadores estuvo representada por su presidente, compañero Anastasio de Gracia.

De la importancia de este comicio se darán cuenta plena nuestros camaradas con la lectura de las ponencias aprobadas, cuyo contenido reproducimos en sus partes más interesantes.

Dictamen de la Comisión revisora de cuentas.

Constituídos en Ponencia los delegados que suscriben, en la Secretaría de los Empleados de Banca, para efectuar la revisión de las cuentas de la Federación Obrera Montañesa desde el día 1 de febrero del año último hasta la fecha, declaran encontrarlas de completa conformidad, ajustados los comprobantes de gastos a los asientos de Caja, e igualmente los ingresos a las partidas que figuran en las fichas correspondientes.

En Santander, a 23 de abril de 1934. — *Clemente Goya, José María Sendino y Angel Guerra.*

CAJA

Pesetas.

Ingresos.

Saldo anterior	1.943,48
Recaudación de cuotas.....	32.187,40
Fiesta del Primero de Mayo.....	307,45
Retirado del Monte de Piedad.....	37.000
Cuotas para la nueva Casa.....	40.365,90
Total.....	111.804,23

Pagos.

Préstamos	2.978,80
Gastos de Secretaría.....	14.065,90
Gastos de propaganda.....	1.059,18
Gastos diversos.....	5.826,98
Gastos de Congresos.....	2.919,60
Donativos	700
Gastos en conflictos.....	2.357,10
Entregas en el Monte de Piedad.....	32.000
Saldo	49.898,70
Total.....	111.804,23

Situación económica.

Efectivo disponible para la nueva Casa	40.365,90
Efectivo en la Caja de la Federación.	9.352,80
Total efectivo.....	49.898,70

En el Monte de Piedad.....	315,58
Por préstamos.....	3.960,35
Por utilaje y muebles.....	3.279,40
Acciones de la antigua Casa.....	1.546,80
Total.....	59.000,83

Ponencia contra la guerra y el fascismo.

Que ante el eminente peligro mundial de una futura conflagración, la clase capitalista, ante sus apetitos insaciabiles, egoístas, al ver mermados sus valores comerciales, abraza la inhumana idea de destruir la paz social;

Y ante este estado, que nosotros consideramos repulsivo, es indudable que emprendamos, a nuestro juicio, la mejor norma para exterminar a esta clase insaciable, que es la repercusora de este trastorno mundial, y es, a nuestro criterio, el que recogiendo el espíritu de todas las proposiciones,

Los obreros protestemos de la fabricación de artefactos guerreros y destinemos esa fabricación a utensilios de labranza, tractores, automóviles, motores, etc., etc., y a aparatos necesarios a la ayuda de la Humanidad.

También consideramos podría dedicarse una etapa consecutiva de conferencias y demás actos públicos en contra de esa repugnante carnicería mundial:

Consideramos que lo más hermoso y lo que ha llenado por entero el ánimo de esta Ponencia es la fructífera labor que pueden desarrollar los compañeros de la enseñanza, desbaratando y quemando todos los libros y juguetes guerreros, e inculcando a los niños de hoy, y mañana hombres, el odio a la guerra y a toda la fuerza armada. De esta manera, reconocemos que la labor de pacificación mundial sería la aurora que recogería en un mañana próximo la semilla de la verdadera paz social.

Y ésta la conseguiríamos con aquella juventud que, inculcando en su ánimo el odio a la mortandad, gritaría como un solo hombre: ¡Abajo la guerra!

Pero este trabajo tan hermoso, a juicio de esta Ponencia, deben de realizarlo en todos los colegios nuestros camaradas trabajadores de la enseñanza.

Consideramos urgente y necesario que la Federación Obrera busque los medios de celebrar en toda la provincia actos públicos contra la guerra, y alentar en todos los espíritus el amor a la paz. Sometemos a la aprobación del Congreso destinar el día 18 de mayo para tan laudable fin.

Consideramos y proponemos a los camaradas trabajadores de la enseñanza que aparten de los niños toda clase de juegos bélicos, y por los medios a su alcance les inculquen en todos sus aspectos hacia el sentido de verdadera humanidad.

Ponencia de Varios.

Al Congreso: Examinadas por los miembros que componen esta Ponencia las que figuran en el apéndice de la Memoria, encuentran que, pudiendo ser suscritas éstas íntegramente, no resuelven, sin embargo, el problema planteado, pues aunque, en su consecuencia, aisladas constituyen un acierto, no es menos cierto que esta Ponencia se ve impedida a refundirlas todas en un dictamen de conjunto por la paridad de varias de las proposiciones y el alto espíritu social que las anima.

En su consecuencia, proponemos al Congreso el siguiente dictamen:

1.º El Congreso declara que de modificarse o derogarse las leyes sociales implantadas desde el ministerio de Trabajo cuando lo regentaba nuestro camarada Largo Caballero, se proponga a la Unión General realice un movimiento de protesta en toda España, fijando ella el alcance y proporciones, así como el momento en que ha de realizarse.

2.º Con el fin de estrechar las relaciones, aún más si cabe, entre las organizaciones de la Federación Obrera Montañesa y los representantes del Partido Socialista en la Montaña, se celebren anualmente dos Plenos, en los que tendrán representación todos los presidentes de Federaciones y Secciones sindicales, en los que se tratará de cuantos asuntos estén en relación con las aspiraciones y deseos de la clase trabajadora montañesa.

3.º Que cuando la Federación Obrera Montañesa crea oportuno — pues en las actuales circunstancias no lo creemos viable por el carácter dictatorial y fascista que caracteriza a los actuales gobernantes — se dirija a los Poderes públicos pidiendo la reducción con carácter general de la jornada de trabajo, y sea ella la que fije la reducción de la jornada y señale los medios para conseguirla; estudiando al propio tiempo el plan que crea conveniente para lograr a la mayor brevedad generalizar el subsidio al paro forzoso.

4.º El Congreso declara su más rotunda y enérgica condenación al progreso del fascio y protesta enérgicamente contra la conducta de los que nos gobiernan y hacen posible con su traición el fomento del fascio; haciendo pública declaración de oponerse a su desarrollo por cuantos medios, legales o no, estén a nuestro alcance.

5.º El Congreso declara solemnemente que ve con simpatía la actitud revolucionaria del Comité ejecutivo del Partido Socialista, por considerar que es el sentir general de la clase trabajadora de España y muy particular de la organización en general de la Montaña, y propugna que la Unión General siga las directrices marcadas por el Partido Socialista, por ser éstas las que verdaderamente encarnan en los actuales momentos de intensa conmoción revolucionaria.

Santander, 21 de abril de 1934. — Pablo Serna y Paulino Abel.

Ponencia de peticiones a los Poderes públicos.

Los que abajo suscriben, designados por el X Congreso de la Federación Obrera Montañesa para deliberar en las proposiciones presentadas a este Congreso por las distintas Secciones, presentan a la consideración del mismo el siguiente dictamen:

1.º *Jornada máxima.* — Propugnamos por la de cuarenta horas semanales, exceptuándose los trabajos insalubres, donde consideramos no deberá exceder la jornada de treinta y seis horas, distribuidas equitativamente. Igualmente consideramos que no se debe permitir ejercer ninguna profesión hasta los dieciséis años, teniendo las mismas horas de trabajo; pero concediéndoles, hasta la edad de dieciocho años, el disfrute dos horas por día, que se dedicarán a perfeccionarse en las escuelas profesionales que a tal fin debemos pedir a los Poderes públicos y luchar por su creación.

2.º *Para la mujer obrera.* — A trabajo igual, el mismo salario que el obrero. Seguro de Maternidad, abonado en su totalidad por el patrono, Empresa o, en su defecto, por el Estado. Un mes antes del alumbramiento y otro después para descanso. Al mismo tiempo propugnamos por la creación de casas cunas o guarderías infantiles, con el objeto de poder amamantar a los niños en las horas que las leyes sanitarias determinen. En todos aquellos lugares de trabajo donde no existan los centros mencionados será permitido a la obrera el disfrute del tiempo necesario para el cumplimiento de estos menesteres.

3.º *Retiro obrero.* — Propugnamos por que el retiro sea pagado a los cincuenta y cinco años, y que la pensión a percibir sea de 5 pesetas, aumen-

tándose las aportaciones del Estado, aceptando la propuesta 92, por entender que para este fin ayudaría al incremento de las aportaciones.

4.º *Intereses públicos.* — Esta Ponencia hace, suyas las proposiciones 20, 21, 44, 46 y 49, haciendo la salvedad de esta última, que, para mayor garantía y beneficio de los servicios, éstos deben ser municipalizados; aceptar íntegra la 96 y modificar la 99 en el sentido de que la cantidad arranque de 6.000 pesetas anuales.

5.º *Jurados mixtos.* — Aceptamos las proposiciones 103, 105 y 106; en lo que se refiere a la 104, optamos por el artículo 18 de la ley promulgada por Largo Caballero relativa a Jurados mixtos.

6.º *Cuestiones politicosociales.* — Consideramos un deber ineludible de este Congreso pedir la libertad de los presos políticos y sociales revolucionarios, protestando contra la amnistía concedida a los opresores de la clase trabajadora. Pedimos libertad de manifestación y reunión, así como el levantamiento de la clausura de Sindicatos y prensa obrera y la derogación de las leyes de Orden público y de Vagos, por entender que sólo se aplican en perjuicio del proletariado; solidarizándonos con la disolución de las fuerzas coercitivas del Estado y las órdenes religiosas, incautación de los bienes de éstas y de los grandes terratenientes en beneficio de la clase trabajadora.

Por la Ponencia dictaminadora: Tomás Arco Múgica, Jesús Sánchez y Santiago Cabezas.

Ponencia de Enseñanza y Cultura.

Convencidos de que resultaría perfectamente inútil e ineficaz que este Congreso acordara elevar a los Poderes públicos constituidos aquellas propuestas que tienden al más exacto y rápido cumplimiento de lo que determinan una Constitución y unas leyes prácticamente inexistentes, los que suscriben, recogiendo el espíritu de dichas propuestas, se limitan a solicitar de la asamblea que ésta declare su firme decisión de laborar porque cuando, en fecha que nuestro optimismo considera próxima, la clase trabajadora ocupe el Poder, se conviertan en fecunda realidad:

a) La escuela unificada, que permita el libre paso al talento.

b) La enseñanza profesional convenientemente difundida en escuelas instaladas en todas aquellas localidades cuyo ambiente de trabajo exija una preparación técnica determinada.

c) La supresión absoluta de toda enseñanza confesional convenientemente difundida.

d) La dignificación económica y moral de los trabajadores de la enseñanza.

Ahora bien: si por haber estimado que en el actual Estado burgués no pueden ni siquiera cumplirse los preceptos constitucionales y las leyes que él mismo se ha dado prescinde esta Ponencia de todo aquello que suponga petición al Gobierno, como, por el contrario, tiene la seguridad de que incluso dentro del régimen político y económico actual pueden y deben obtenerse mejoras en la cultura popular si se aprovecha la labor conjunta de nuestras organizaciones y el apoyo entusiasta de los Ayuntamientos en que figuran representantes obreros, con el carácter de conclusiones

de aplicación inmediata propone a la consideración del Congreso:

a) Que se estimule, aun cuando ello no sea necesario, al camarada Bruno Alonso para que, con sus compañeros de minoría, continúe su labor en pro de los maestros laicos históricos, hasta lograr que la República les haga la justicia que les debe.

b) Que las organizaciones obreras presionen a sus representantes en los Ayuntamientos para que a la mayor brevedad posible cooperen a la creación y sostenimiento de escuelas profesionales.

c) Que gestionen asimismo de sus Ayuntamientos respectivos la concesión de campos agrícolas escolares, como medio de iniciar a los niños en el cooperativismo, y la creación de bibliotecas circulantes, para que el libro llegue a manos de todos.

d) Que el Congreso acuerde ver con simpatía la labor cultural de la Misión pedagógica de Santander, aconsejando a los afiliados a esta Federación Obrera Montañesa presten a aquélla su colaboración en las visitas que realicen.

e) Que acuerde también exigir a los afiliados que formen parte en los Consejos locales o provinciales de primera enseñanza procuren impedir por los medios a su alcance que en la escuela nacional se viertan doctrinas opuestas al laicismo y a los ideales de solidaridad humana que deben inspirarla.

Considerando que en el presente dictamen quedan recogidas en su esencia las distintas propuestas de enseñanza y cultura que figuran en la Memoria, estima esta Ponencia haber cumplido el encargo que el Congreso, en uso de su soberanía, le confió.

Santander, 22 de abril de 1934. — F. Trujillo, Jesús Revaque y Pedro Díez Pérez.

Ponencia de Frente único.

Considerando que la actual sociedad es injusta, porque su base económica descansa sobre la explotación del hombre por el hombre, con provecho exclusivo de la clase capitalista, en perjuicio de la proletaria, la mayoría de la Ponencia que suscribe, atendiendo los deseos de las colectividades proponentes, estima de urgente necesidad conseguir la abolición de los privilegios de la burguesía, y para ello encarece la conveniencia de formar la alianza obrera, cuya estructuración debe ser hecha por los organismos obreros nacionales francamente emplazados en el terreno de la lucha de clases.

Entre tanto esta alianza obrera se logra, la Fe-

En el campo de la economía política la libre investigación científica tropieza no sólo con los mismos enemigos que en los demás campos, pues la peculiar naturaleza de la materia a que se contrae concita contra ella, en el campo de batalla, las pasiones humanas más violentas, odiosas y mezquinas. «Todas las furias del interés privado. Por ejemplo, la alta Iglesia de Inglaterra perdonará antes la negación de 38 de sus 39 artículos de fe, que el ataque a 1/39 de sus rentas en dinero.»

CARLOS MARX

deración provincial, conservando su peculiar autonomía para la propaganda y demás actuaciones a ella inherentes, procurará evitar los rozamientos entre sí, al objeto de no menoscabar el principio de fraternidad proletaria; no debiéndose, por lo tanto, confundir la crítica lógica y serena que se debe practicar entre los obreros con los insultos inadecuados.

Casa del Pueblo, 22 de abril de 1934. — La mayoría de la Ponencia, A. Vayas y D. Ciosa.

Ponencia de Legislación social.

Reunida esta Ponencia, por mandato del Congreso, para dictaminar sobre las proposiciones relacionadas con este particular, sometemos a la consideración del Congreso lo siguiente:

1.º Estima la Ponencia que este Congreso, como todos los que en estos momentos difíciles celebre la clase trabajadora, debe hacer constar nuestra más enérgica protesta por el incumplimiento y vulneración de toda la legislación vigente, que está siendo derogada de una forma velada por quienes tienen gran interés en desorganizar a la clase trabajadora para explotarla inicualemente, como ha sucedido hasta aquí.

Por eso, esta Ponencia cree firmemente, sin perjuicio de que se discutan las proposiciones de la Memoria, que las peticiones que en este sentido se hagan a los Poderes públicos no serán eficaces, por ser éstos los que en todo momento, y de una manera descarada, están al servicio de la burguesía, como lo demuestra su desdichada actuación en contra de la clase trabajadora.

Por eso, nosotros, después de estudiar este aspecto muy detenidamente, y dándonos perfecta cuenta de lo que es nuestra misión en estos momentos, proponemos al Congreso lo siguiente:

1.º Que el Congreso acuerde que por todos los medios a nuestro alcance se haga cumplir y respetar toda la legislación social.

2.º Protestar contra la conducta del ministro de la Gobernación por encuadrar los conflictos sociales dentro de la ley de Orden público para mejor atropellar los derechos de la clase trabajadora.

3.º Habiendo sido desvirtuada la ley de Jurados mixtos y destituidos sus presidentes y vicepresidentes sin una causa que lo justifique, estimamos que el Congreso debe protestar contra esta arbitrariedad.

Santander, 21 de abril de 1934. — Por la Ponencia: José Landeras, José María Ruiz y Cipriano Monar.

* * *

Terminadas las tareas del Congreso, el compañero De Gracia pronunció un admirable discurso de clausura del mismo, que fué unánimemente elogiado.

Nuestro querido compañero hizo una exposición detallada de la actuación sindical y política de la Unión General de Trabajadores, demostrativa del alto espíritu de comprensión y sacrificio que ha presidido siempre la actuación de esta Central sindical en sus luchas contra la clase capitalista.

De Santander se trasladó el amigo De Gracia a Torrelavega, donde pronunció otra conferencia ante centenares de compañeros.

El V Congreso de las Juventudes Socialistas

En el salón grande de la Casa del Pueblo de Madrid se ha celebrado los días 18 y siguientes del próximo pasado mes de abril el V Congreso de las Juventudes Socialistas.

Han tomado parte en las deliberaciones del mismo 164 delegados, representando a 40.758 federados.

La Comisión ejecutiva de la Unión General de Trabajadores estuvo representada por nuestro compañero Pascual Tomás.

A continuación reproducimos las ponencias aprobadas en el Congreso juvenil, para que nuestros camaradas conozcan a través de las mismas el alto espíritu de capacidad y de responsabilidad a la vez que ha presidido las deliberaciones del Congreso:

Posición política de las Juventudes Socialistas y su misión dentro de un Estado socialista.

Los que suscriben, miembros de la Ponencia de Posición política y misión de las Juventudes en un Estado socialista, someten a la consideración del Congreso la siguiente resolución:

Posición política de las Juventudes.

En la época presente se enfrentan las Juventudes Socialistas con un problema de trascendental importancia para la táctica a seguir por todos los partidos revolucionarios: el agotamiento del régimen democrático burgués como forma de Gobierno. Las fórmulas liberales van perdiendo rápidamente su contenido realizador. El liberalismo económico conduce al desequilibrio de la producción, con su consecuencia del paro forzoso en gran escala. El liberalismo político lleva en definitiva al fascismo. Es por esta causa por lo que, aun dentro de un régimen burgués, se pretende esta superación como medio de defensa de los intereses imperialistas del capitalismo moderno.

Consecuencia de este debilitamiento de las posibilidades democráticas es la polarización de las fuerzas sociales alrededor de consignas que permiten el imperio claro y decidido de una clase sobre otra. Agudizada enormemente la lucha, si la burguesía triunfa instaura su dictadura fascista. Si es la clase trabajadora la que vence, habrá de recurrir inexorablemente a gobernar en régimen de DICTADURA DEL PROLETARIADO, si quiere mantenerse en su posición dominante.

Considerando, por otra parte, al Partido Socialista como el más genuino representante de la clase trabajadora de nuestro país, el V Congreso de Juventudes Socialistas expresa:

1.º Su adhesión más entusiasta a los principios y a la táctica del Partido Socialista Obrero Español, tanto más cuanto que su actual posición

revolucionaria es vivamente compartida por la totalidad de los jóvenes socialistas.

2.º Su firme creencia en los principios de la revolución proletaria y en que los momentos actuales no permiten otra salida que la insurrección armada de la clase trabajadora para adueñarse del Poder político íntegramente, instaurando la dictadura del proletariado.

3.º Su deseo de que en el plazo más breve posible se llegue a una inteligencia con las organizaciones obreras afines sobre la base de la acción conjunta para este movimiento insurreccional.

El V Congreso de la Federación de Juventudes Socialistas de España expresa su criterio de que, salvo razones de peso que él desconoce, la minoría parlamentaria socialista ha cumplido su misión en las actuales Cortes y de que es más útil para los intereses de la Revolución social la retirada urgente del Parlamento, a fin de dedicarse con plenitud a los trabajos revolucionarios.

Misión de las Juventudes Socialistas en un Estado socialista.

Entienden los integrantes de la Ponencia que ésta ha de referirse a un Estado socialista en construcción; es decir, bajo un régimen de dictadura del proletariado.

Como misión primordial y casi única de las Juventudes Socialistas está la defensa de la revolución. Por todos los medios y en todos los terrenos han de constituir el baluarte más firme para la protección del régimen de gobierno de los trabajadores. Pero además de esta labor de defensa tienen los jóvenes socialistas otro punto concreto de trabajo: deben ser el fermento revolucionario que haga avanzar al Partido Socialista lo más rápidamente posible en la construcción del Socialismo. En todos los órdenes de la vida tienen estas dos obligaciones estrictas, que pueden resumirse así: defensa de la revolución por medio del avance acelerado de la edificación socialista. Salvo casos muy justificados, las Juventudes Socialistas no defenderán en este período la más mínima concesión hacia el pequeño capitalismo industrial, comercial o agrícola.

Concretando en unos cuantos puntos fundamentales de la vida económica-política de nuestro régimen de gobierno, entiende el V Congreso de las Juventudes Socialistas de España que esta labor revolucionaria se puede desenvolver de la forma siguiente:

En el aspecto político, las Juventudes Socialistas defenderán en todo momento la táctica del Partido Socialista con más entusiasmo, si cabe, porque en estos momentos estará afrontando la enorme

(Continúa en la pág. 142.)

Sr. D. Francisco Largo Caballero.
C/o Partido Socialista de España.
Madrid (España).

El Comité ejecutivo de esta Cámara Nacional entusiasta y fraternalmente saluda a usted y envía al Partido Socialista de España sus expresiones de simpatía, y nos es grato aprovechar la oportunidad para acompañar a usted copia de la comunicación número 3.153, que el 22 de marzo último giramos al señor embajador de la República española en México, y cuyo contenido por sí solo se explica.

Igualmente tenemos el gusto de adjuntar a usted un tanto de la respuesta que el propio embajador dió a la comunicación mencionada.

El movimiento obrero organizado de esta República, representado por esta Cámara Nacional del Trabajo y 58 corporaciones similares con 2.000.000 de agremiados, que le son afiliadas, cumpliendo con el alto e ineludible deber de velar por la felicidad de todos los trabajadores de la tierra, consideraron necesario enviar la protesta, que adjuntamos, al representante de su país en esta República, esperando que la misma sea atendida como justamente merece para que cesen los atropellos y vejaciones de que vienen siendo víctimas los camaradas de aquella nación.

Reiteramos a usted las seguridades de nuestra mejor estimación por la causa del trabajo organizado.

Unificación y Solidaridad Proletaria, México, D. F., a 13 de abril de 1934.—
Por el Comité ejecutivo: El secretario general, ALFREDO PÉREZ MEDINA. (Firmado.)

CÓMO SE PERSIGUE A LOS TRABAJADORES

Los "gobernantes" republicanos podrán negar y otra vez la verdad de las denuncias que diariamente publicamos en las páginas de nuestros periódicos.

Pero lo que no podrán impedir es que el dolor de nuestros hermanos irradie sobre la sensibilidad de las gentes y éstas se manifiesten en esta viril contra la injusticia que supone la persecución de que nos hace víctimas.

Señor embajador de la República española en México.

Ciudad.

Con toda atención presentamos a usted nuestros saludos y estamos en posibilidad de informarle que, con la oportunidad debida, esta Cámara Nacional del Trabajo de la República mexicana, que por su seriedad, su resistencia y su avanzado programa de acción social, en parte importantísima del movimiento obrero y campesino organizado de este país, se ha enterado, tanto por la prensa como por las consecutivas informaciones que nos llegan de la República española, de los malos tratos, ataques violentos, persecuciones y asesinatos de que son víctimas los trabajadores de ese país hermano, como actos de represalia por las protestas que justamente nuestros mismos camaradas han llevado a cabo públicamente para demandar de su Gobierno la reparación de sus derechos desintegrados y por los odiosos privilegios concedidos a personajes o facciones políticas que equivocadamente han formado y se consideran partícipes de una casta superior a la nuestra.

* El proletariado mexicano que, en número de dos millones de elementos, milita dentro de esta Corporación nacional, fiel a sus principios de orden social revolucionario y a su tendencia de unificar a

todos los trabajadores del mundo, no puede ni debe con indiferencia esta salvaje cacería de trabajadores, exponente inequívoco de la civilización en un país en el que como el de usted, se ha significado su rancia y avanzada cultura, y, por tanto, con todo el vigor de su causa aceptando la responsabilidad de sus actos, viene ante usted a hacer patente su enérgica protesta y a demandar del Gobierno, por el merecido y seguro conducto de usted, que cesen esas hostilidades y actos de salvajismo en contra de nuestros camaradas españoles y sólo pudieran presenciarse en la era de la tiranía monárquica de los Borjes, y que en los actuales momentos altamente censurable, ya que vuestra distinguida nación acaba de enarbolar el sacrificio de los mismos trabajadores, la bandera de la República.

Igualmente demandamos que se abran nuevamente las puertas de los centros de los trabajadores que fueron ignominiosamente clausurados por los asaltos a bayoneta calada protegidos por las mortíferas ametralladoras, y demandamos que en el futuro, y por la dignificación de vuestro país, en el que se ha ostensible el principio democrático de una República revolucionaria, no se repitan estos bochornosos acontecimientos, que legan

un ejemplo indigno y criminal a las futuras generaciones.

Dando a usted las más sinceras expresiones de reconocimiento por la atención que le merezca nuestra humana demanda, nos es satisfactorio aprovechar la oportunidad para reiterarle las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración por la causa del trabajador organizado.

Unificación y Solidaridad Proletaria, México, D. F., a 22 de marzo de 1934.
Por el Comité ejecutivo: El secretario general, ALFREDO PÉREZ MEDINA. (Firmado.)

EMBAJADA DE ESPAÑA
MÉXICO (304)

México, 3 de abril de 1934

Sr. D. Alfredo Pérez Medina.

Secretario general de la Cámara Nacional del Trabajo de la República mexicana.

Ciudad.

MUY SEÑOR MÍO:

He recibido el escrito que con fecha 22 del pasado marzo me dirige usted en nombre de la Cámara Nacional del Trabajo de la República mexicana.

Protestan ustedes en dicho escrito de los supuestos malos tratos y persecuciones de que hace víctimas el Gobierno español a los obreros de España y me pide

usted eleve esa protesta al Gobierno de mi país.

Sin prestar demasiada atención a la ruda forma en que ustedes se expresan, por entender que envuelve un generoso sentimiento de solidaridad humana, el cual no solamente respeto, sino que comparto, he de manifestarles que no creo han acaecido en España hechos de la magnitud y carácter que ustedes me comunican. Campea en nuestra Constitución republicana el lema de «República democrática de trabajadores de todas clases», y no me consta haya sido éste traicionado por quienes tienen en sus manos los mandos del Estado español.

En mi todavía breve estancia en esta fraternal República han sabido las organizaciones obreras mexicanas ganar mi simpatía y captar mi atención hacia sus problemas, y precisamente acabo de regresar de Tampico, donde he convivido unas horas, pocas para las que pedía mi deseo, y he sabido durante ellas admirar la extraordinaria y fecunda obra de los obreros de aquel puerto.

Estas consideraciones le convencerán de mi buena voluntad para trasladar el escrito de ustedes al Gobierno español, y tengo la firme esperanza de que una más serena reflexión e informaciones más amplias evitarán entre nosotros, en todo momento, cualquiera mala interpretación del fenómeno político de mi patria.

Aprovecho esta oportunidad para ofrecerme de usted y de la Cámara Nacional del Trabajo de la República mexicana como su afectísimo amigo,

El embajador de España (firmado),
DOMINGO BARNÉS. (Rúbrica.)

(Viene de la pág. 139)

responsabilidad de la transformación del régimen económico.

Sin embargo, los jóvenes socialistas no abandonarán, salvo casos excepcionales, su derecho y obligación a la crítica razonada, siendo al mismo tiempo los más exquisitos vigilantes de la moralidad y eficiencia revolucionaria de todos los organismos de gobierno.

En relación con el *problema militar*, las Juventudes Socialistas habrán de abarcar un criterio totalitario. En primer lugar, deberán militarizar sus cuadros, dotándolos de una rígida disciplina, tanto más severa por cuanto nace del propio convencimiento y no de una imposición externa. Fuera del ejército serán las Juventudes Socialistas la base militar de la actuación del Partido en el orden civil. Dentro del ejército constituirán el núcleo civil y cultural del Partido para sus tareas de instrucción integral y de propaganda dentro de los cuarteles.

Respecto de su *misión cultural*, los jóvenes socialistas trabajarán por una completa socialización de la cultura, haciéndola accesible a las masas laboriosas en todos sus grados y órdenes. La orientarán en un sentido integral, evitando la división actual de los trabajadores en intelectuales y manuales.

Otra tarea fundamental que corresponde a los jóvenes socialistas en gran parte es la de reducción del «*dumpen-proletario*» juvenil, reintegrando plenamente al ciclo de producción.

Por último, dentro de los *Sindicatos y fábricas* lucharán las Juventudes Socialistas por mantenerlos bajo el control directo del Estado socialista, contra el que no se tolerará ninguna manifestación, por lo mismo que esta forma de gobierno es la única que puede redimir plenamente a la clase trabajadora. Los jóvenes socialistas serán las fuerzas de choque que en los talleres y fábricas den pruebas de abnegación y sacrificio, intensificando el ritmo de la producción con su esfuerzo y con su ejemplo.

Resumiendo: las Juventudes Socialistas han de constituir la garantía más firme del avance continuo del proletariado, erigido en clase dominante, hacia la implantación total y plena del Socialismo.

Madrid, 19 de abril de 1934. — *José Latn, Pedro Pintó, Ecequiel Ureña, David Tudea y Matías Olivares.*

Ponencia de Varios.

Ante la situación ultrarreaccionaria y antiobrerista de los Poderes públicos, que impiden todo avance social y revolucionario y que han retrotraído la situación de la clase trabajadora española a los peores tiempos de la monarquía, esta Ponencia considera que las Juventudes Socialistas sólo podrán tener satisfacción a sus aspiraciones mediante la conquista plena del Poder político y económico. Por ello, consideramos que es totalmente inútil elevar a los Poderes públicos actuales petición alguna. Siguiendo este criterio, la Ponencia sólo recoge, tras detenido estudio, las proposiciones que a continuación se expresan:

Escuela Socialista de Verano.

Aparte de la Escuela Socialista de Verano, de carácter nacional, que debe subsistir, procurando llevar a la práctica todos los acuerdos que en Congresos anteriores han sido tomados sobre esta materia, podrán crearse otras Escuelas de carácter regional o provincial, siendo necesario para esto pedir la debida autorización a la Comisión ejecutiva, a la que mandarán con la antelación necesaria sobre todo el plan de estudios y organización, así como la relación de los profesores que en ella han de intervenir.

Religión.

Entendiendo que la religión es el más firme sostén del capitalismo, estimamos que los jóvenes socialistas deben procurar prescindir de toda práctica religiosa.

Guerra y fascismo.

Que entre las conclusiones del Congreso se declare que las Juventudes Socialistas, en caso de guerra imperialista, sumarán sus esfuerzos a las demás organizaciones antiguerreras para transformarla en guerra civil.

Peticiones al Partido.

Que la Federación se dirija al Partido proponiéndole declare la necesidad de establecer la dictadura del proletariado como transición obligada del régimen capitalista al socialista.

Que se gestione del Partido Socialista el que se conceda a las Juventudes Socialistas el derecho de poder asistir, con voz, pero sin voto, a las reuniones de los Congresos provinciales por medio de una representación regional de las Juventudes.

Milicias socialistas.

Reconociendo que las circunstancias por que atraviesa España nos obligan a los socialistas a una preparación de lucha, para que ésta sea eficaz es menester llevar inmediatamente a la práctica el acuerdo adoptado en el IV Congreso juvenil socialista respecto a la creación de las milicias socialistas.

Organización interior.

Que se lleven a cabo los acuerdos del último Congreso que no hayan sido cumplidos.

Varios.

Que el Congreso acuerde dirigirse al Partido Socialista para que éste estudie la posibilidad de llegar a una acción común con el proletariado marxista, al objeto de lograr lo más rápidamente posible la conquista del Poder político.

Que se oponga la minoría socialista a que la nación española pueda contraer deudas interior-

res, salvo en el caso de ser absolutamente necesario para la economía nacional (política interior, hidráulica, agrícola, de carreteras, etc.), y nunca las contraerá para sostener una política exterior, como tampoco contraerá deudas exteriores que tengan por objeto mantener una política de tendencia belicosa.

Que se obligue a todos los jóvenes pertenecientes a los Grupos Sindicales a responder ante una junta general convocada al efecto de los trabajos y acuerdos tomados en sus reuniones, mandando copia del acto a la Federación nacional, para que ésta juzgue la labor que se efectúe en la orientación socialista.

Es aspiración de las Juventudes que la nación española limite sus derechos de ciudadanía mundial a la simple categoría de derechos de visitante; no pudiendo usar de sus visitas a territorios no civilizados e inexplorados para crear, con pretextos científicos o geográficos, núcleos de colonización forzada.

Que la Federación se dirija al Partido y a la Unión General de Trabajadores pidiéndoles la formación de un Comité nacional que realice los trabajos necesarios para la formación en toda España de unos organismos dedicados exclusiva-

mente a la atención de los presos políticos y sociales, como asimismo de los emigrados y desterrados.

Madrid, 19 de abril de 1934. — José Antonio Suárez, Tomás Rodríguez y Raimundo Morales.

Se da lectura al resultado de la elección para los cargos de la Comisión ejecutiva, resultando elegidos los compañeros siguientes:

Presidente, Carlos Hernández, 16.283 votos.

Viscepresidente, Enrique Puente, 14.781 ídem.

Secretario, Santiago Carrillo, 16.200 ídem.

Vicesecretario, José Laín, 11.271 ídem.

Contador, Federico Melchor, 11.114 ídem.

Vocal primero, José Cazorla, 15.388 ídem.

Ídem segundo, Serrano Poncela, 13.826 ídem.

Ídem tercero, Leoncio Pérez, 11.235 ídem.

Ídem cuarto, Juan Pablo García, 11.039 ídem.

Director de Renovación, Santiago Carrillo, 13.982 votos.

Delegados a la Internacional: Efectivo, Carlos Hernández, 16.767 votos; suplente, Santiago Carrillo, 16.767 ídem.

Una resolución del Consejo interparlamentario sobre la cuestión de las horas de trabajo

Al terminar la reunión celebrada en Ginebra por el Consejo interparlamentario, una delegación de este organismo visitó al director de la Oficina Internacional del Trabajo, Sr. Butler. En nombre de sus colegas, el Sr. Saveano, presidente de la Cámara de Diputados de Rumania, ha presentado al director de la Oficina la resolución siguiente, adoptada por unanimidad por el Consejo, y que se refiere a la cuestión de las horas de trabajo inscrita en el orden del día de la próxima Conferencia internacional del Trabajo, que se inaugurará en Ginebra el día 4 de junio:

«El Consejo interparlamentario, después de haber examinado el informe de la Comisión para el estudio de las cuestiones sociales y de la Comisión para el estudio de las cuestiones económicas, comprueba:

Que se reconoce como indispensable, particularmente en interés de las Haciendas públicas, solucionar por un convenio internacional las posibilidades de dar nuevo empleo al mayor número posible de parados, a fin de:

a) Evitar a los trabajadores intelectuales y manuales ser víctimas de una producción facilitada por la ciencia y el aumento del rendimiento individual;

b) Combatir la crisis moral y la reducción de la aptitud para el trabajo, que son las consecuencias de un paro prolongado;

c) Dar a una fracción más importante de la

Humanidad los medios para elevarse intelectual y moralmente;

Que una de las condiciones esenciales de tal convenio debería ser no solamente salvaguardar la capacidad de compra y de consumo de los asalariados, sino también reservarles la parte que les corresponde en los progresos técnicos recientemente realizados;

Que la aplicación de un horario reducido no es solamente una medida temporal en período de crisis, sino más bien un medio de combatir el volumen creciente del paro, causado, incluso en tiempos normales, por la racionalización, los progresos técnicos y el desplazamiento del hombre por la máquina;

Que el paro resulta también, en parte, por la afluencia de los obreros rurales a la ciudad, y que la concesión de una jornada reducida de trabajo sin disminuir el salario, nueva ventaja de la que los trabajadores del campo no podrán beneficiarse, aumentará ciertamente este éxodo y provocará una falta más acentuada de mano de obra agrícola y una recrudescencia del paro;

Que no podrá determinarse exactamente en qué medida la reducción del horario obrero puede y debe ser fácilmente realizada sin aplicar todos los otros medios para luchar contra la crisis: programas de trabajos públicos, prolongación de la edad escolar, anticipo del retiro para los trabajadores, etcétera, y sin las mejoras de la vida rural que pueden retener al campesino en la tierra, sobre

todo la difusión del instrumental perfeccionado, que alivia el trabajo del campo;

Insiste:

Sobre la necesidad y la urgencia de un acuerdo internacional para toda la reglamentación de las horas de trabajo de los obreros, sin disminución de sus capacidades de compra, acuerdo que tenga en cuenta las legítimas aspiraciones de las tendencias reales del conjunto de los trabajadores, tanto rurales como urbanos;

Decide:

Transmitir a la Organización Internacional del Trabajo esta resolución y llamar la atención de los grupos nacionales sobre la importancia de las decisiones que serán tomadas en la Conferencia internacional del Trabajo de junio de 1934, así como sobre el papel importante que tendrán los dele-

gados gubernamentales de los Estados representados en la Unión interparlamentaria.»

El Sr. Mario Roustan, senador francés y ex ministro, ha insistido sobre la importancia de esta resolución, adoptada unánimemente por parlamentarios que representan a todos los partidos: conservadores, liberales, radicales y socialistas, pertenecientes a diferentes nacionalidades.

El director de la Oficina Internacional del Trabajo agradeció a la delegación estas manifestaciones, mostrando todo el interés que le inspira la resolución votada por hombres de todas las opiniones y de países diversos, cuya unanimidad es una nueva prueba de la urgencia del problema de la reglamentación de la duración del trabajo, íntimamente ligado al del paro mundial.

DISPOSICIONES OFICIALES

Ministerio de Justicia

El presidente de la República española,

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:

Que las Cortes han decretado y sancionado la siguiente

LEY

Artículo único. A) Se concede amnistía por los hechos a que se refieren los apartados siguientes:

1.º Delitos y faltas cometidos por medio de la imprenta, grabado u otra forma mecánica de publicidad, o por medio de la palabra hablada en reuniones, manifestaciones, espectáculos o vías públicas, con las solas excepciones de los delitos de calumnia o injuria a particulares por móviles no políticos y los de publicaciones inmorales y pornográficas.

2.º Ofensas al jefe del Estado, al Parlamento o al Consejo de ministros, delitos contra la forma de gobierno y cometidos por los particulares con ocasión del ejercicio de los derechos individuales garantizados por la Constitución, de los artículos 149, 160 a 162, 164 a 168, 170 a 172, 175 a 183 y 185 a 189 del Código penal.

3.º Delitos de sedición y rebelión a que se refieren los capítulos I y II del título III del libro II del mismo Código.

4.º Delitos de rebelión y sedición militares definidos en los artículos 237 a 252 del Código de Justicia militar y los comprendidos en el artículo 267 del mismo Código y en los artículos 128 a 142, ambos inclusive, y 272 y 273 del Código penal de la marina de guerra.

5.º Delitos de atentado de los artículos 258, 259 y 260, desacato del artículo 261 y delitos de los artículos 264 y 265 del Código penal. Se exceptúan de lo anteriormente dispuesto los delitos de atentado del número primero del 259 de dicho Có-

digo, si se hubieren ejecutado utilizando armas de fuego.

6.º Delitos del artículo 482 del Código penal, cometidos por motivos políticos y sociales.

7.º Delitos comprendidos en el número tercero del artículo 285 del Código de Justicia militar y en el número quinto del artículo 165 del Código penal de la marina de guerra, siempre que los hechos se hayan ejecutado por móviles políticos.

8.º Infracciones de las leyes de carácter social sobre huelgas y paros.

9.º Delitos con motivo u ocasión de conflictos sociales, huelgas o paros patronales, incluso si hubieran sido considerados como de rebelión o sedición, con excepción de los cometidos contra la vida y la integridad corporal, que constituyeren homicidio o lesiones graves, o delito de incendio, o contra la propiedad, si los culpables se propusieron u obtuvieron lucro, o que constituyan atentados contra la autoridad o sus agentes a que se refiere la excepción contenida en el número quinto.

10. Delitos de tenencia ilícita de armas previstos en las leyes de 9 de enero de 1932 y 4 de julio de 1933.

11. Delitos no definidos en las leyes penales vigentes que fueron juzgados por Tribunales especiales designados por las Cortes Constituyentes a propuesta de su Comisión de Responsabilidades, sin que en ningún caso pueda alcanzar a hechos sancionados directamente por la Cámara.

12. Delitos comprendidos en el artículo 490 del Código penal, cuando se hubieren cometido por móviles políticos o con el propósito de procurar la corrección de vicios en la gestión de los intereses públicos del Estado, Provincia o Municipio, guardando relación los documentos de que se trate con dicha gestión.

13. Delitos de evasión de capitales a que se refieren los decretos de 29 de mayo y 18 de julio de 1931, siempre que se acredite que se ha reintegrado al territorio español la cantidad exporta-

da. Esta obligación de reintegrar sólo alcanza a los autores de delito consumado.

14. Delitos e infracciones con motivo de celebración de elecciones y conexos con ellos, excepto los cometidos contra la vida y la integridad corporal que constituyeren homicidio o lesiones graves.

15. Los delitos originados con motivo de elección de Jurados mixtos y organismos de conciliación y arbitraje.

16. Los prófugos y desertores, los inductores, auxiliares o encubridores de la desertión y los cómplices de la fuga de un prófugo.

Los prófugos y desertores a quienes se aplique esta gracia deberán presentarse en el plazo de seis meses, si estuvieren en la península, o en el de un año, si se hallaren fuera de ella, para ser destinados o incorporados; debiendo todos completar en filas el mismo tiempo que los individuos de su reemplazo o situación, a excepción de aquellos que pudiendo haberse acogido a los beneficios del indulto dado por decreto-ley de 25 de abril de 1931, ratificado por la ley de 16 de septiembre del mismo año, no lo hubieren hecho, los cuales únicamente vendrán obligados a prestar servicio cuando los individuos de su reemplazo estuvieren sirviendo en filas y por el tiempo que a éstos les reste, debiendo, en otro caso, pasar a la situación militar en que se encuentre el reemplazo de su alistamiento, sin necesidad de incorporarse en filas. Los beneficios de esta ley se harán extensivos a los que hayan dejado de cumplir la obligación de pasar las revistas establecidas en la ley y a los desertores de la marina mercante española.

17. Delitos de desórdenes públicos de los artículos 266 a 268 del Código penal.

18. Delitos de los artículos 255, 256 y 258 del Código de Justicia militar y 278 del Código penal de la marina de guerra, siempre que no haya habido disparo de arma de fuego contra los centinelas, salvaguardia o fuerza armada, en los delitos a que se refiere el primero de los artículos antes enumerados.

19. Delitos y faltas de abandono de destino, sancionados en el Código penal o en leyes y reglamentos especiales, cuando hubieran sido cometidos con ocasión de eludir persecuciones, medidas o procedimientos motivados por opiniones o actuaciones políticas.

20. Delitos de violación de secreto, del artículo 372 del Código penal, cometidos por Jurados en ejercicio o con ocasión de sus funciones como tales.

21. Los delitos perseguidos como consecuencia de expediente administrativo, incoado por móviles políticos para esclarecer la gestión en corporaciones provinciales, municipales o entidades autónomas, siempre que aquellos delitos fuesen originados por tramitación o resolución defectuosa, pero sin que la actuación de los encartados haya sido causa de lucro para los mismos ni se haya producido perjuicio para la corporación o entidad respectiva, incluso los incoados por Juzgados especiales contra funcionarios de Confederaciones Hidrográficas.

22. Quedan nulas y sin efecto las expropiaciones sin indemnización de fincas rústicas y derechos reales constituidos sobre ellas que se hayan llevado a efecto por aplicación de lo dispuesto en la ley de 24 de agosto de 1932, restituyéndose los bienes objeto de las mismas a los expropiados.

23. Quedan anuladas y sin efecto las determinaciones adoptadas por aplicación de disposiciones legales o administrativas que, por la índole del cargo o por el período en que fueron desempeñados, hayan privado o restringido a quienes los ocuparon de la cesantía o de los derechos pasivos que concede el estatuto vigente.

24. Quedan también incluidos en la amnistía los individuos pertenecientes a la guardia civil y los militares o asimilados que con ocasión de los delitos de rebelión o sedición, y sin haber sido objeto de condena, fueron separados del servicio, con o sin formación de causa.

25. También serán amnistiados los procesados y condenados menores de dieciocho años por delitos cometidos por móviles políticos que no vayan contra la vida y la integridad de las personas.

26. Quebrantamiento de condena de delitos amnistiados.

B) La presente amnistía alcanza a todos los hechos enumerados en el apartado anterior cometidos hasta el 14 de abril de 1934, inclusive, con excepción de los señalados en el número tercero, de los cuales sólo son objeto de amnistía los cometidos con anterioridad al día 3 de diciembre de 1933.

C) Los militares condenados por delitos de rebelión o sedición, a quienes sea aplicable la amnistía, no serán por ello reintegrados en sus empleos ni carreras, de los que seguirán definitivamente separados.

Tampoco les será remitida la pena accesoria de inhabilitación o suspensión en lo referente a cargos y empleos militares.

No obstante, tendrán derecho a percibir el haber pasivo de reserva y las pensiones que por cualquier concepto pudieran corresponderles en la fecha en que cometieron el delito.

Sólo por una ley podrán remitirse las penas que este artículo deja subsistentes.

Serán reintegrados en la escala activa los miembros del estado mayor general del ejército a quienes, a partir del 10 de agosto de 1932, les haya sido aplicado el artículo 1.º de la ley de 9 de marzo de 1932.

D) En las causas ya sentenciadas, los Tribunales, oído el fiscal o el querellante particular, en los delitos perseguibles a instancia de parte, declararán aplicable a los condenados la amnistía y acordarán en su virtud la libertad de los amnistiados. Dicha declaración no afectará a las responsabilidades civiles.

En las causas en tramitación, los Tribunales, oído el fiscal o el querellante en su caso, acordarán el sobreseimiento libre y la libertad de los encartados, dejando a salvo las responsabilidades de orden civil, que podrán reclamar los interesados en la vía procedente.

En las causas con sentencias o procesados en situación de rebeldía, una vez que queden a dis-

posición del juez o Tribunal competentes, se pasarán los autos al fiscal o querellante, para que dictaminen sobre la procedencia de la aplicación de la amnistía; dictándose, en su caso, por la autoridad judicial las resoluciones a que se refiere el párrafo anterior.

E) Las normas de los dos últimos párrafos del epígrafe D) no serán aplicables a los militares procesados y aún no juzgados por los delitos de sedición o rebelión, para los cuales seguirá la tramitación de la causa hasta sentencia definitiva, en la que, al aplicar la amnistía, que no podrá utilizarse como artículo de previo pronunciamiento, se tendrán en cuenta las restricciones señaladas en el epígrafe C).

F) Cuando las penas hayan sido impuestas por Tribunales circunstanciales no permanentes, la función del Tribunal sentenciador la ejercerá la Sala segunda del Tribunal Supremo.

G) Se autoriza a la Sala segunda del Tribunal Supremo de Justicia para que, a solicitud de parte, y dentro del plazo improrrogable de tres meses, desde la publicación de esta ley, pueda, con carácter extraordinario y formación de expediente, con audiencia del Tribunal sentenciador y del ministerio fiscal, acceder a la revisión de aquellas sentencias que, adoleciendo de evidente injusticia en el fondo, o de una falta grave de garantías procesales en la forma, a juicio de la propia Sala, no aparezcan comprendidas explícitamente en los casos previstos en las leyes para los recursos de casación o de revisión.

Si en las causas a que tales sentencias hubieran puesto término existiere acusador particular, será indispensable su previa conformidad con la revisión.

No será obstáculo para el ejercicio de esta facultad por el Tribunal Supremo la circunstancia de que el caso examinado haya sido objeto de negación o de concesión de indulto parcial.

H) Por los ministerios respectivos se dictarán con toda urgencia las normas reglamentarias que fueren precisas para la exacta y rápida aplicación de esta ley.

Por tanto,

Mando a todos los ciudadanos que coadyuven al cumplimiento de esta ley, así como a todos los Tribunales y autoridades que la hagan cumplir.

Madrid, a veinticuatro de abril de mil novecientos treinta y cuatro. — **Niceto Alcalá-Zamora y Torres.** — El ministro de Justicia, **Salvador de Madariaga Rojo.**

Ministerio de la Guerra

DECRETO

La ley de Amnistía de 24 de abril de 1934, por la generosa amplitud de su contenido, comprende no sólo responsabilidades de orden criminal, sino que alcanza a medidas gubernativas tomadas por el Poder ejecutivo con muy distinta finalidad y en uso de las facultades que le están atribuidas por disposiciones que no han perdido su fuerza ni vigor. De otra parte, el complejo contenido de

sus preceptos obliga, sin menoscabo del espíritu en que la ley se inspira, sino, por el contrario, en consideración a ese mismo espíritu, a dictar normas que armonicen la generosidad del olvido con las facultades inherentes al Poder público, que ha de velar en todo momento por la mejor organización y moral militar de las instituciones armadas.

En atención a las consideraciones expuestas, y con el fin, además, de determinar las normas a que se ha de ajustar la aplicación de la gracia y los recursos que pueden utilizar en su caso los interesados, de acuerdo con el Consejo de ministros y a propuesta del de la Guerra,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Los beneficios de amnistía que se otorgan por la ley de 24 de abril de 1934 a los hechos constitutivos de delitos y faltas se aplicarán de oficio por los auditores de las Divisiones orgánicas, fuerzas militares de Marruecos y Comandancias militares de Baleares y Canarias, competentes para conocer de los respectivos procedimientos, previa audiencia del ministerio fiscal, de lo que podrá prescindirse cuando la amnistía haya de alcanzar sólo a faltas.

En las causas de que hubiere conocido o le correspondiere conocer en única instancia a la Sala sexta del Tribunal Supremo, serán aplicados por ésta los repetidos beneficios.

Art. 2.º De las resoluciones que dictaren los referidos auditores en aplicación de la amnistía podrán los interesados recurrir en alzada, ante la indicada Sala, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la notificación de la resolución recurrida.

Contra las resoluciones de la Sala sexta sobre aplicación de amnistía, tanto cuando decidan sobre los expresados recursos como cuando por haber conocido en única instancia de los autos, haya de resolver privativamente sobre la concesión o denegación de la gracia, no se dará recurso alguno.

Art. 3.º La aplicación de la amnistía a los prófugos corresponderá a las respectivas Juntas de clasificación y revisión, previa solicitud de los interesados.

Contra las resoluciones que dicten dichas Juntas podrán recurrir aquéllos ante los generales de las Divisiones orgánicas, jefe superior de las fuerzas militares de Marruecos y comandantes militares de Baleares y Canarias, en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la notificación, cuyas autoridades, oyendo a su asesor, resolverán sin ulterior recurso.

Art. 4.º Tanto los prófugos como los desertores a quienes se aplique la amnistía están obligados a presentarse para cumplir sus deberes militares dentro de los plazos que señala el apartado 16 del epígrafe a), artículo único, de la ley, contando a partir del siguiente día al de la notificación que les fuere hecha, en la inteligencia de que si no efectuaren aquella presentación quedará sin efecto la gracia concedida.

De esta presentación quedan exceptuados, a tenor de la propia ley, quienes pudiendo haberse acogido a los beneficios del indulto dado por de-

creto-ley de 25 de abril de 1931, ratificado por la de 16 de septiembre del mismo año, no lo hubieren hecho, los cuales pasarán a la situación militar del reemplazo de su alistamiento, sin necesidad de incorporarse a filas.

Art. 5.º Las autoridades judiciales y militares se entenderán directamente con las consulares de España en el extranjero para todas aquellas incidencias a que dé lugar la aplicación de la amnistía a prófugos y desertores.

Art. 6.º Para aplicación de los beneficios que concede el apartado 24 del epígrafe a), artículo único, de la ley, a los militares o asimilados que con ocasión de los delitos de rebelión o sedición y sin haber sido objeto de condena fueron separados del servicio, con o sin formación de causa, deberán los interesados que pertenezcan a armas o cuerpos que dependan de este ministerio formular la oportuna instancia, dirigida a este departamento, en súplica de aplicación de los expresados beneficios, y una vez recibida en el mismo y unidos los antecedentes e informes oportunos, se resolverá lo que proceda, con arreglo a la ley, por orden ministerial acordada en Consejo de ministros y que se publicará en la «Gaceta», salvo los que se encuentren procesados o en rebeldía por los delitos de rebelión o sedición, quienes habrán de atenerse a lo dispuesto por el epígrafe e), artículo único, de la citada ley.

Art. 7.º Sin perjuicio de las facultades que competen al ministro de la Guerra con arreglo a la ley de 9 de marzo de 1932, actualmente en vigor, para cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del epígrafe c), artículo único, de la ley de Amnistía, se formularán por el negociado correspondiente de este ministerio las oportunas propuestas de reintegración a la escala activa de los miembros del estado mayor general del ejército a quienes comprenda dicha disposición, dictándose en consecuencia las debidas órdenes ministeriales acordadas en Consejo de ministros y que se publicarán en la «Gaceta».

Art. 8.º Los militares que reingresen por aplicación de los beneficios de la ley de Amnistía, con excepción de los comprendidos en los cuatro primeros párrafos del epígrafe c), artículo único de la propia ley, recuperarán la antigüedad y puesto que les corresponda en sus respectivas escalas, y tratándose de jefes y oficiales ascenderán a los empleos inmediatos si estaban declarados aptos al momento en que les hubiere correspondido ese ascenso.

Igualmente quienes por falta de declaración de aptitud no pudieran obtener el ascenso a la fecha de reingreso lo obtendrán tan pronto como reúnan condiciones para aquella declaración de aptitud, recobrando, una vez ascendidos, el puesto de la escala que les corresponda; todo ello sin perjuicio de las facultades que en orden a situaciones del personal militar otorgan al ministerio de la Guerra los decretos de 5 de enero de 1933 y 16 de enero de 1934.

Art. 9.º El reintegro de los militares a las escalas activas del ejército, como consecuencia de la aplicación de la amnistía, no confiere derecho alguno al ascenso a los distintos empleos del

estado mayor general, puesto que sobre las condiciones exigidas por la ley para los ascensos se confieren éstos por la libre elección del Gobierno.

Art. 10. La amnistía producirá efectos económicos a partir de la fecha de la publicación de la ley, cualquiera que sea la en que se conceda, sin que los militares condenados o que se condenen por los delitos que la misma comprende tengan derecho a haberes ni diferencias de sueldo por razón de la situación en que permanecieran con anterioridad a la expresada fecha.

Art. 11. Los procesados para quienes por estar la causa en tramitación y no ser de las que el epígrafe e) determina se siga ésta hasta la terminación por sentencia definitiva, en aplicación de lo que previene el epígrafe d) en su penúltimo párrafo, tendrán igualmente derecho al sueldo entero de su empleo a partir de la fecha de la publicación de la ley, sin que en concepto de diferencias de sueldo, y por razón de las situaciones en que permanecieran con anterioridad a dicha fecha, tengan otros derechos que los establecidos por las leyes y disposiciones reglamentarias de aplicación general en la materia. Cuando las causas terminen por absolución o sobreseimiento, carecerán de derecho a haberes atrasados o diferencias de sueldos los procesados en situación de rebeldía.

Art. 12. Los miembros del estado mayor general a quienes en aplicación del último párrafo del epígrafe c) del artículo único de la ley se les reintegre a sus escalas activas sólo tendrán derecho al sueldo entero de su empleo a partir de la fecha de la publicación de la ley, sin que puedan concederse diferencias de sueldo por razón de la situación de reserva en que con anterioridad permanecieron. De igual manera, los militares o asimilados que reingresen por aplicación del apartado 24, epígrafe a), del artículo único de la ley tendrán derecho a sus sueldos tan sólo a partir de la indicada fecha, sin que pueda concedérseles el que dejaron de percibir por su anterior situación de separados del servicio.

Art. 13. La aplicación de la amnistía tendrá carácter urgente, procediéndose, al efecto, con la mayor rapidez por los Tribunales y autoridades a quienes corresponda en cada caso; debiendo disponerse telegráficamente la libertad inmediata de quienes estuvieren privados de ella por razón de delito a que fuera de aplicación la amnistía tan pronto como ésta sea concedida.

A estos efectos, los directores de las prisiones y penitenciarías y los comandantes militares de fuertes y castillos remitirán a los Tribunales y autoridades judiciales respectivos, con la mayor urgencia, relación nominal de los reclusos en los respectivos establecimientos a quienes les fuera de aplicación la amnistía.

Art. 14. Las dudas de carácter general que suscite la aplicación de la ley de Amnistía en la jurisdicción de Guerra serán resueltas por este ministerio, oyéndose previamente a la Sala sexta del Tribunal Supremo cuando se estime necesario o conveniente recabar su informe.

Dado en Madrid, a veinticuatro de abril de mil novecientos treinta y cuatro. — **Niceto Alcalá-Za-**

mora y Torres. — El ministro de la Guerra, **Diego Hidalgo y Durán.**

Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión

DECRETOS

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el decreto de 19 de abril de 1934, creando el Consejo nacional de Sanidad y Asistencia pública, a propuesta del ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión, y de acuerdo con el Consejo de ministros,

Vengo en decretar:

Artículo 1.º En ejecución de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 4.º del decreto de 19 de abril de 1931, serán miembros del Consejo nacional de Sanidad y Asistencia pública, por libre designación del Gobierno, en atención a sus altos merecimientos científicos y a su acusado relieve en las diversas especialidades que han de ser materia de estudio del Pleno de dicho organismo o de sus Secciones, los señores siguientes:

D. Gregorio Marañón y Posadillo, D. Manuel Martín Salazar, D. Gustavo Pittaluga y Fattorini, D. Enrique Bardají López, D. José Verdes Montenegro, D. Manuel Tapia Martínez, D. Luis Sayé, D. Luis Izquierdo, D. Pío del Río-Hortega, don José Montaner Nevot, D. Enrique Suñer Ordóñez, D. Dámaso Rodrigo Pérez, D. Enrique Carrasco Cadenas, D. Pedro Carda Gómez, D. Manuel Márquez Rodríguez, D. José García del Mazo, D. José Lorenzo Cortés, D. José Sánchez Covisa, D. Enrique Sáinz de Aja, D. Ricardo Bertoloty Ramírez, D. Gonzalo Rodríguez Lafora, D. César Juarros Ortega, D. Antonio Vallejo Nájera, D. Antonio Oller Martínez, D. Lorenzo García Tornel, D. Juan Negrín López, D. César Bécares Sánchez, D. Manuel Corochán García, don Pompeyo Gimeno Alfonso, D. Rafael Folch Andreu, D. José Paz Maroto, D. Manuel Sánchez Arcas, D. Manuel Torres Grima, D.ª Clara Campoamor Rodríguez, D. José Gascón y Marín, doña Elisa Soriano Fischer y D.ª Esmeralda Castells.

Art. 2.º Constituido el Consejo nacional de Sanidad y Asistencia pública, y constituidas asimismo las Secciones especializadas que se determinan en el decreto de creación, terminarán en su funcionamiento todas las Juntas y Comisiones técnicas especiales que han venido asumiendo la labor encomendada hoy al Consejo y sus Secciones; quedando derogadas todas las disposiciones por las que fueron creadas.

Art. 3.º Por el ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión se dictarán las órdenes que se juzguen precisas para el perfecto cumplimiento de lo dispuesto en este decreto.

Dado en Madrid a treinta de abril de mil novecientos treinta y cuatro. — **Niceto Alcalá-Zamora y Torres.** — El ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión, **José Estadella Arnó.**

Existiendo contradicción entre el texto del artículo 41 de la ley de Accidentes del trabajo, que

autoriza al patrono para concertar el seguro obligatorio con cualquiera de las entidades que en el mismo se especifican, y el del 91 del reglamento de 31 de enero de 1933, que obliga a los particulares o Empresas concesionarias o contratistas de obras o servicios y a los organismos autónomos que tengan a su cargo servicios públicos a realizar el seguro contra el riesgo de indemnización por incapacidades permanentes o muerte de sus operarios por accidente del trabajo en la Caja nacional, por lo que aparece bien clara la colisión entre los dos citados artículos, y teniendo en cuenta que debe mantenerse lo dispuesto en aquel precepto legal que concede al patrono la libertad de contratación del seguro de accidentes del trabajo con la entidad autorizada que estime más favorable a sus intereses, de acuerdo con el Consejo de ministros y a propuesta del de Trabajo, Sanidad y Previsión,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo único. Queda derogado el artículo 91 del reglamento para aplicación de la ley de Accidentes del trabajo en cuanto se refiere a particulares o Empresas concesionarias o contratistas de obras o servicios y organismos autónomos que tengan a su cargo servicios públicos.

Dado en Madrid a treinta de abril de mil novecientos treinta y cuatro. — **Niceto Alcalá-Zamora y Torres.** — El ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión, **José Estadella Arnó.**

Los seguros de accidentes del trabajo

El Estado, contra sí mismo

Los gobernantes lerrouxistas han cometido en esta materia otro desatino, o bien la histórica «euforia» les ha llevado a participar en otra franquichela más.

El artículo 91 del reglamento de Accidentes del trabajo en la industria (de 31 de enero de 1933) ha sido derogado en todo cuanto obligaba a los particulares o Empresas concesionarias o contratistas de obras o servicios y organismos autónomos a realizar el seguro directo contra el riesgo de indemnización por incapacidades permanentes o muerte de sus operarios, debidas a accidentes del trabajo, en la Caja Nacional de Seguros de Accidentes del Trabajo. (Acuerdo del primer Consejo de ministros del Gobierno Samper. *Gaceta* del 2 de mayo de 1934.)

Ello significa el más rotundo triunfo del interés privado de las Compañías mercantiles de seguros contra la derrota del interés y del servicio público personificado por la Caja Nacional.

De ahora en adelante, mientras un Gobierno no restablezca en toda su integridad el mutilado artículo 91 del reglamento de Accidentes, los seguros obligatorios de contratistas y concesionarios de servicios públicos, que son importantes y cuantiosos, serán sustraídos a la Caja Nacional en be-

neficio exclusivo de los negocios privados de seguros. La Caja — organismo público — quedará, no obstante, obligada por su propio carácter a contratar los riesgos de esta clase que no quieran las ahora triunfantes Compañías de seguros, o los muy malos, que por su grave riesgo y elevado coste no quiera nadie aceptar.

La Caja Nacional de Seguros de Accidentes del Trabajo, que ha puesto en marcha desde el mismo día 1 de abril de 1933, en que lo dispuso así la nueva legislación, el servicio público, complejo y costoso de la reparación de los accidentes del trabajo, ha visto atacada su base económica por esa derogación parcial del artículo 91, firmada por

el ministro de Trabajo, Sr. Estadella (el mismo que destituyó por «incompatibles» el día 11 de enero de 1934 a todos los presidentes y vicepresidentes socialistas de Jurados mixtos de España y que convirtió en crónica la huelga de los metalúrgicos madrileños), quien disminuye los ingresos del Estado en materia tan delicada como el seguro de accidentes, mutila la vida económica de la Caja Nacional, que es el órgano estatal para tal servicio, y pone su refrendo de ministro del Estado español a disposiciones legales contrarias al derecho y al interés del mismo, quien le paga encima por todo lo contrario por el servicio que debió prestarle.

GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA

Estadística sobre la anormalidad que sufre España desde la terminación del Gobierno Azaña y los socialistas

Gobierno Lerroux.

El 14 de septiembre de 1933 ocupó el Poder el Sr. Lerroux, cerrando el Parlamento hasta el 2 de octubre del mismo año. El día 4 surgió la crisis, por serle adverso el voto de confianza que pedía a las Cortes en el debate político.

Por lo tanto, de veinte días que ocupó el Poder, se vivió sin régimen parlamentario **18 días**.

Gobierno Martínez Barrio.

El 8 de octubre de 1933 forma Gobierno el Sr. Martínez Barrio, y el 9 aparece el decreto de disolución de las Cortes.

El 5 de diciembre declara el estado de prevención, y el día 10 del mismo mes, el estado de alarma en toda España, con censura en la prensa.

Este mismo día surge el movimiento anarcosindicalista en diversas localidades españolas, que culmina con los actos represivos llevados a cabo por el Gobierno en Villanueva de la Serena (Badajoz).

Por lo tanto, de setenta días que ocupó el Poder, estuvo España en circunstancias de excepción **14 días**.

Gobierno Lerroux.

El día 17 de diciembre de 1933 forma Gobierno el Sr. Lerroux: hay censura en la prensa y estado de alarma en el país, que no fué levantado por su antecesor señor Martínez Barrio.

El 20 de diciembre se levanta la censura en la prensa.

El 6 de enero de 1934 se levanta el estado de alarma; subsistiendo el de prevención.

El 3 de febrero se publica un decreto prorrogando el Estado de prevención en toda España.

Por lo tanto, de setenta y ocho días que ocupó el Poder, estuvo España en circunstancias de excepción **78 días**.

Gobierno Lerroux.

El 4 de marzo de 1934 vuelve a formar Gobierno el Sr. Lerroux. Sigue el estado de prevención en toda España.

El 8 de marzo se declara el estado de alarma en todo el país, y el Gobierno suspende en Madrid y en provincias una gran cantidad de periódicos de izquierda, entre ellos «La Lucha» y «Renovación», órgano éste de las Juventudes Socialistas.

El 30 de marzo deja de existir el estado de alarma, por no haber sido prorrogado.

El 17 de abril se declara el estado de alarma en Valencia y su provincia.

El 26 de abril, el estado de alarma en toda España.

Por lo tanto, de cincuenta y cuatro días que ocupó el Poder, estuvo España en circunstancias de excepción **37 días**.

Gobierno Samper.

El 28 de abril ocupa el Poder el señor Samper. Existe el estado de alarma.

El 31 de mayo se implanta la previa cen-

sura en la prensa, tras de declarar servicio público la recolección de la cosecha, con motivo del anuncio de la huelga de campesinos.

El 25 de junio, al no ser prorrogado, deja de existir el estado de alarma; desapareciendo, por lo tanto, la censura en la prensa y subsistiendo el estado de prevención.

Por lo tanto, de setenta y ocho días que lleva ocupando el Poder hasta la fecha de hoy, vive España con régimen de excepción **78 días.**

Resumen.

Meses de Gobiernos «republicanos» 10
Que hacen días 300 *

En estado de prevención o alarma, seis meses y veintisiete días, que hacen en total **207 días.**

Divididos así:

Gobiernos Lerroux: De 152 días de Poder, 115 días de prevención o alarma.

Gobierno Martínez Barrio: De 70 días de Poder, 14 días de prevención o alarma.

Gobierno Samper: De 78 días de Poder, 78 días de prevención o alarma.

En total: 300 días de Poder, 207 días de prevención o alarma.

Nota.—Téngase en cuenta que hubo un período de dos meses para hacer la propaganda electoral, en el cual era difícil establecer el estado de alarma o el de prevención. Durante ese período ocupaba el Gobierno el Sr. Martínez Barrio.

14 de julio de 1934.

Normas a los fiscales para la instrucción de sumarios en casos de huelga

El fiscal de la República ha dirigido la siguiente circular a los fiscales de las Audiencias:

«Habiéndose declarado servicio público nacional la recolección de la cosecha pendiente, y prohibidos, conforme al número 10 del artículo 28 de la ley de Orden público, todos los paros o huelgas que afecten a las labores de la recolección, es deber del Ministerio fiscal ejercitar con especial celo

su función cuando se realicen actos dirigidos a conseguir la cesación de los mencionados trabajos agrícolas, pues tales actos, ya sean imputables a los patronos, ya a los obreros, pueden ser constitutivos, según el modo de su realización, ya del delito de sedición que define el artículo 245 del Código penal, ya del delito de atentado a que se fiere el artículo 258 del mismo Código, sin perjuicio de otros que puedan ejecutarse en conexión con aquellos hechos. Deben, por tanto, promover, cuando de oficio no se haya hecho, la formación de los sumarios correspondientes, cuidando, por una inspección realizada del modo más eficaz que sea posible, de que el procedimiento tenga la rapidez que la ley de Orden público requiere, e instar de las Salas de gobierno o de las Territoriales, cuando el número o importancia ó relación entre sí de los diversos hechos delictivos lo requiera, el nombramiento de jueces especiales.

Espero que todos los funcionarios del Ministerio fiscal pondrán en el cumplimiento de estos deberes toda la inteligencia y laboriosidad que les caracteriza.

Tan pronto llegue a poder de V. E. la presente circular se servirá acusarme recibo telegráfico.

Madrid, 30 de mayo. — *Lorenzo Gallardo.*»

Contra este fenómeno, inevitable a todos los sistemas de gobierno que han existido hasta ahora, es decir, la transformación del Estado y sus órganos, que de servidores pasan a ser dominadores de la sociedad, la «Commune» aplicó dos remedios infalibles:

1.º Colocó en todos los puestos administrativos, judiciales y educacionales personas elegidas por sufragio universal, introduciendo al mismo tiempo el derecho de revocar, por decisión de los electores, el nombramiento de cualquiera de los elegidos en cualquier momento que fuera necesario.

2.º Pagaba a todos los funcionarios, altos o bajos, solamente sueldos iguales a los que recibía cualquier otro trabajador.

El sueldo más alto pagado bajo la «Commune» fué de 6.000 francos anuales. Así se creó una barrera eficaz contra los buscadores de empleos, de carreras, aun sin contar con que existían, además, los mandatos imperativos de los delegados en las instituciones representativas, introducidos en la «Commune» para completar su obra. — **ENGELS** (Prefacio de 1891 a «La guerra civil en Francia», de Marx, transcrito en «El Estado y la revolución», de Lenin, páginas 170 y 171.)

Congreso del Secretariado Regional de Cataluña

Durante los días 13 y siguientes del próximo pasado mes de abril se ha celebrado en Barcelona el II Congreso del Secretariado Regional de Cataluña.

Al acto han asistido como delegados fraternales representaciones directas de las Federaciones siguientes: Siderometalúrgica, Artes Blancas, Gráfica, Hotelera, Madera, Arte Textil, Petróleos, Productos Químicos, Municipales, Transporte, Papeleros, Espectáculos Públicos y Banca.

En representación de la Unión General acudió al Congreso el compañero F. Largo Caballero.

De la importancia de este comicio pueden darse cuenta nuestros compañeros con la sola lectura de las ponencias aprobadas, que a continuación reproducimos en sus partes más interesantes:

PETICION A LOS PODERES PUBLICOS

Dictamen de la Ponencia:

Esta Ponencia, teniendo en cuenta que los que actualmente detentan el Poder político son la exacta representación de la fauna capitalista y el fiel reflejo del último reducto de la organización actual de la sociedad capitalista, considera inútil pedirles absolutamente nada.

Pero piden que el Congreso acuerde no cejar un momento, unidos con el Partido Socialista Obrero y con todos los sectores políticos y obreros de clase, hasta desalojarles del Poder, juntamente con todos los privilegios seculares que representan y defienden. — *Miralles, Muñoz, Ruiz, Cugat, Ortega e Ibáñez.*

VOTO DE CENSURA

Dictamen de la Ponencia:

Estudiada detenidamente la proposición de voto de censura presentada por las organizaciones Sindicato de Cargadores y Descargadores de Estaciones y Unión General de Conductores de Carretilas Eléctricas del Puerto, ambas de Barcelona, esta Ponencia estima que el Congreso debe rechazar la sanción propuesta, dada la confusión que, por diversas causas, existía en dicha fecha entre los distintos sectores de clase, cuyos miembros pertenecían y pertenecen a la Unión General de Trabajadores de España. — *Eduardo Miralles, Daniel Ruiz, Juan Cugat, Vicente Ibáñez, Ramiro Ortega y Jacinto Muñoz.*

PARO FORZOSO

Dictamen de la Ponencia:

Reunida la Ponencia, decide, por unanimidad, pedir al Congreso que acuerde:

1.º Declarar que el paro no tiene solución po-

sible dentro de la actual estructura de la sociedad.

2.º Que no pide nada a los representantes de la burguesía y que, en cambio, está dispuesto a todos los sacrificios para derrocar los fundamentos causantes de la crisis de trabajo: el Estado capitalista. — *Ruiz, Muñoz, Miralles, Cugat, Ibáñez y Ortega.*

SEGUROS SOCIALES

* Dictamen de la Ponencia:

Los que suscriben, ponentes en los asuntos del orden del día relacionados con Seguros sociales, informan:

Que leídas y estudiadas las propuestas de diversas entidades de este Secretariado, y convenientemente asesorados por compañeros nuestros que toman parte en los trabajos pertinentes al caso, podemos afirmar que las aspiraciones que contienen las propuestas del Sindicato de Controladores, de Barcelona, respecto al subsidio contra el paro forzoso; del Sindicato Metalúrgico de Barcelona, Sindicato de Producción Agrícola de Sitges, así como lo expuesto en el informe de Agentes del Comercio y de la Industria, relacionado con el retiro obrero, y los demás extremos de estas dos últimas entidades, tendentes a intensificar más los beneficios de los seguros, como igualmente la propuesta en cuanto a seguros de enfermedad del Sindicato Metalúrgico de Barcelona, forman parte ya de la legislación de seguros, lo que afecta al paro forzoso y a los patronos agrícolas en los accidentes de trabajo, y en cuanto a la unificación de seguros, seguro de enfermedad y elevar a 6.000 pesetas el tope de los ingresos para ser beneficiarios, es lo que está en estudio por disposición ministerial de 10 de mayo de 1932, que firmó el camarada Francisco Largo Caballero, entonces ministro de Trabajo, y algunas de las indicaciones de esas propuestas están ya informadas favorablemente por las respectivas Comisiones de la Ponencia nacional, en la que figuran compañeros afectos a nuestras organizaciones.

En cuanto a que, desde 1 de enero de 1935, el Instituto Nacional de Previsión empiece a pagar una peseta diaria a los asalariados inscritos en el Retiro obrero y que cumplan la edad de sesenta y cinco años, hemos de advertir que, para nacer esto efectivo, debe antes acordarlo el Gobierno y proveer de fondos a dicho Instituto para cubrir el déficit que pueda existir en la liquidación de cuenta de asegurados, cuyo saldo sea inferior al necesario para constituir la pensión vitalicia de una peseta diaria, pues el mencionado Instituto no puede hacer un uso indebido de los fondos in-

dividuales de los otros asegurados del primer grupo.

En su consecuencia, se proponen las siguientes conclusiones:

1.^a Haber conocido con satisfacción que, en virtud de iniciativas del Secretariado de la Unión General de Trabajadores de España, fiel a los principios de ésta y a los acuerdos de las Conferencias Internacionales del Trabajo, el Instituto Nacional de Previsión, por medio de sus Ponencias y Comisiones, tiene adelantados ya los estudios y aprobadas algunas bases de los seguros de invalidez y muerte y del de enfermedad, para unificar estos seguros con el de vejez y maternidad y su coordinación con el de accidentes del trabajo, en forma que, en parte, mejoran los convenios y recomendaciones aprobadas por la XVII Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra en junio de 1933; y hacer constar nuestros deseos de que, por el mismo Instituto, con la aprobación del Gobierno, sean mejorados, en cuanto económicamente sea posible, al convertir los anteproyectos en leyes de seguros sociales.

2.^a Que es un deber de toda organización obrera de clase no descuidar aquellas mejoras que tiendan a dar al obrero superior posición económica y elevar su cultura, haciéndole más consciente y apto para luchar, sin sacrificios estériles, por la transformación social del régimen capitalista en otro de propiedad colectiva o social en bien de todos los seres humanos; y, en esta clase de reivindicaciones, deben coadyuvar a los trabajos de la Inspección de Seguros Sociales, denunciándole por escrito los patronos u obreros que no están inscritos en dichos seguros, para que aquélla proceda conforme a sus funciones, sancionando a cuantos incumplan la ley, como se está haciendo en otros territorios de Cajas colaboradoras del Instituto, intensificando esta labor inspectora en beneficio de los asegurados en el régimen de previsión social.

Barcelona, local de la asamblea, 15 de abril de 1934. — *García, Argudin, Martínez Cuenca, Salas, Costa, Accensi, Davó, Cabrero y Burés.*

TIERRA

Dictamen de la Ponencia:

Proposiciones que a la deliberación de la asamblea somete la Ponencia arriba mencionada:

Ley de Términos municipales. — Recabar de la minoría parlamentaria del Partido Socialista Obrero Español la obstrucción más eficaz para que no se lleve a cabo la derogación de dicha ley.

Juntas provinciales de Reforma agraria. — Recabar del ministro de Agricultura la pronta constitución de estos organismos, ya que hace cerca de un año que están publicados en la *Gaceta de Madrid* los nombramientos de los vocales obreros y patronos, y que se cumpla estrictamente esta ley.

Ley de "Contratos de conreu" (Contratos de cultivo) y sus organismos. — Que si en la constitución de las Comisiones arbitrales de distrito se

siguiera la misma forma que se siguió en la constitución de dichas Comisiones en la *lleí de Conflictes* (ley de Conflictos), las cuales se constituyeron de un modo arbitrario, no reconociendo ninguna personalidad a las organizaciones de trabajadores de la tierra adheridas a la Unión General de Trabajadores de España legalmente constituidas, sino solamente a la Unión de Rabassaires, y en todo caso a organizaciones autónomas o simplemente agrícolas, sin tener en cuenta la constitución de éstas, de entre las cuales algunas lo están por obreros y patronos, ni reconociendo tampoco el Censo electoral social, se gestione por el Secretariado lo pertinente para que no sigan cometiendo anomalías de tal índole en materia de representación corporativa.

Aspiraciones. — Las organizaciones agrícolas obreras de la Unión General de Trabajadores de España en Cataluña expresan su pensamiento y su voluntad de alcanzar por entero, en el presente régimen social, las aspiraciones contenidas en su programa obrero agrícola de 1925.

Inspección de trabajo. — Que se haga una minuciosa inspección, por parte de los vocales de los Jurados mixtos nombrados a tal efecto, por el incumplimiento de jornada, contrato de trabajo y medidas sanitarias que se observan en los trabajadores del campo.

Obras hidráulicas. — Que se reclame de la Generalidad de Cataluña la construcción de obras hidráulicas, para aminorar en parte la grave crisis de trabajo que atraviesan los trabajadores de la tierra.

Federación Regional de Trabajadores de la Tierra. — Que el Secretariado gestione las posibilidades de la constitución de este organismo, para la máxima orientación y defensa de los intereses de los compañeros trabajadores de la tierra afectos a la Unión General de Trabajadores de España.

Barcelona (local de la primera asamblea del Secretariado general de Cataluña, U. G. T.), a 14 de abril de 1934. — *José Aiguadé, Manuel Farrás, Miguel Cabacés, Manuel Ferrer, Juan Fronjosá, Juan Tous, Juan Durán, Pedro Calvet y Vicente Farré.*

LEGISLACION SOCIAL

Dictamen de la Ponencia:

Considerando que las leyes sociales son el vehículo por el cual se van desarrollando los nobles deseos que sienten los trabajadores de mejorar en su condición social, es elemental la lucha continua por este mejoramiento.

Al efecto, y aun considerando que las siguientes peticiones que presentamos a vuestro examen y ampliación no abarcan ni en mucho a satisfacer todas nuestras aspiraciones, os presentamos lo siguiente:

1.^o Que por la minoría parlamentaria socialista en las Cortes ordinarias de la República y otros diputados de los diversos partidos republicanos que pudieran adherirse no se consienta retroceso alguno en la legislación social dignamente emprendida por el secretario de la Unión Ge-

neral de Trabajadores camarada Largo Caballero, y se labore por su ampliación gradual lo más rápidamente posible, toda vez que el trabajador está muy lejos de usufructuar los beneficios a que dignamente tiene derecho en armonía a su principal papel como factor de la producción.

2.º Que no se permita bajo ningún concepto ni pretexto la derogación de la ley de Términos municipales, por entender los trabajadores que es una disposición que favorece sus intereses.

3.º Que los recursos formulados contra las denuncias hechas por las Comisiones de Policía rural sean fallados en un plazo de ocho días.

4.º Que al tener que acudir los vocales obreros a los Jurados mixtos, les sean abonadas, en los casos en que se verifique desplazamiento, 12,50 pesetas, y por concepto de asistencia, 15 pesetas.

5.º Que los recursos que haya interpuestos se resuelvan en el plazo improrrogable de un mes, los de carácter colectivo, y tres meses, los de carácter individual.

Los que se interpongan después de caducado el plazo máximo concedido para resolver los recursos individuales deberán substanciar en el plazo máximo que determinan las leyes sociales, aumentando y creando para ello tantas cuantas Comisiones sean precisas para que no rebase ningún caso el plazo de los fallos definitivos que la propia ley determina.

6.º Que no se consienta recurso contra las sentencias proferidas por los Jurados mixtos condestando al pago de las vacaciones.

7.º Que el retiro obrero a cargo del Estado sea a los cincuenta y cinco años y con un mínimo de siete pesetas diarias, salvo los casos en que, por excesivo agotamiento físico debido al trabajo realizado, aconseje, previo informe oficial, fijar una edad menor para determinadas profesiones.

8.º Que no puedan ser destituidos los presidentes, vicepresidentes ni secretarios de los Jurados mixtos sin previa formación de expediente, en el que deberán informar los vocales obreros que formen parte del Jurado.

9.º Que existiendo un decreto-ley por el que los comisionistas y representantes de comercio son considerados obreros, se exima a los representantes y comisionistas del pago de la contribución directa al Estado, debiendo hacerlo por medio de la escala de riqueza mobiliaria y directamente por los patronos, y que sean incluidos los comisionistas y representantes en todas las leyes de seguros sociales.

10. Que se exima del pago del impuesto de utilidades a todo sueldo que no exceda de seis mil pesetas anuales. — *Arasa, Fernández, Pérez, Vidal, Gil, García, Céster, Ullod y Valderrama.*

CREDENCIALES

Dictamen de la Ponencia:

Esta Ponencia de Credenciales, después de saludar cordialmente a la primera asamblea general del Secretariado Regional en Cataluña de la Unión General de Trabajadores de España, y en cumplimiento del mandato que le ha sido asig-

nado, evacua el dictamen a ella encargado, concretando su criterio en el siguiente informe dictaminador:

Que, examinadas todas y cada una de las diversas credenciales correspondientes a las Secciones que hasta este momento las han presentado y concurren a la asamblea, y de las que ésta ha tenido conocimiento por la previa lectura que de las mismas se ha dado, ha de prestarles su unánime conformidad por haberlas hallado en un todo conformes a las normas acostumbradas en estos casos por la Unión General de Trabajadores de España, y por no tener motivo ninguno conocido de impugnación en que fundamentarla por lo que se refiere a los camaradas delegados que las integran.

En su consecuencia, esta Comisión de Credenciales entiende y propone al Congreso preste su conformidad a todas las credenciales hasta este momento presentadas, objeto de sus tareas, por las razones alegadas en la parte expositiva de este su informe, otorgándoles a todas y cada una de ellas su aprobación.

Barcelona (local de la asamblea). — *Juan Núñez, Vicente Ibáñez y Pedro Ribalta.*

REVISION DE CUENTAS

Dictamen de la Ponencia:

La Ponencia encargada para la revisión de cuentas administrativas emite el siguiente dictamen:

Verificado el examen de los libros y comparadas las entradas y salidas, las aceptan por unanimidad. — *Pedro Solé, José Bertoméu, C. Sala, Rafael Vidiella, Fusimaña, G. Fernández y Ribalta.*

REVISION DE CUENTAS

Dictamen de la Ponencia:

Los que suscriben, componentes de la Ponencia, manifiestan que dan su conformidad a las cuentas de *Cataluña Obrera*, y recomiendan que para las que nuevamente se han de reproducir, por virtud de la reaparición de nuestro portavoz, se adopte un sistema de contabilidad que permita realizar la revisión con la mínima fatiga, dado el breve lapso de tiempo de que para estos casos se dispone.

Barcelona y Congreso regional de Cataluña, a 15 de abril de 1934. — *Rafael Vidiella, Lucila Fernández, P. Ribalta y Ricardo Gutiérrez.*

REFORMA DEL REGLAMENTO

Dictamen de la Ponencia:

1.º Mantener la actual estructura del Secretariado.

2.º Que del seno del propio Consejo regional se elija una Comisión de cinco camaradas, cuya

misión será la de asesorar y ayudar a los dos secretarios.

Se reunirán ordinariamente una vez por semana. — *Cugat, Ruiz, Miralles, Muñoz y Ortega.*

Abstención:

El compañero que suscribe, por confusión, no ha podido asistir a la reunión, y, en su consecuencia, se abstiene. — *Ibáñez.*

Voto minoritario:

Aceptació del principi de reforma d'estatuts a fi d'ampliar las funcions executives del Secretariat de Catalunya i donar-los-hi una base de major responsabilitat.

Posició de principi. — L'article primer de l'estatut regional quedaria redactat de la següent manera:

Base 1.^a Se constituye en Cataluña un Secretariado regional dependiente de la Unión General de Trabajadores.

Este Secretariado estará regido por dos secretarios retribuidos y por cinco compañeros nombrados del seno del Congreso, con plenitud de funciones ejecutivas. — *Comas, Codina y Jové.*

ORIENTACION SINDICAL

Dictamen de la Ponencia:

La revolución española atraviesa un momento sumamente crítico. Fracasadas las fuerzas republicanas de izquierda tras dos años de Gobierno por su política de concesiones para con las clases dueñas de todos los privilegios y dispuestas a defenderlos por todos los medios, ha pasado el Poder a manos de los hombres que han representado siempre en el movimiento republicano el papel de agentes de la monarquía y que, fieles a su pasado, se han apresurado a entregar la República a los monárquicos y a anular todo lo que de tímidamente avanzado había hecho en su comienzos el régimen.

Desaparecida de la escena la pequeña burguesía, quedan frente a frente la burguesía y el proletariado. La primera, orientándose cada vez más hacia el fascismo, y el segundo, adoptando una actitud cada día más francamente revolucionaria.

Tratar de poner nuevamente a la clase obrera a remolque de los partidos pequeño-burgueses que su propia incapacidad ha destruido, sería en los momentos actuales una falta imperdonable contra los intereses del proletariado.

El proletariado necesita unirse sólidamente para dar la batalla definitiva a la burguesía, y esta unión debe realizarse nacionalmente entre todas las organizaciones obreras que estén dispuestas a reñir los combates inminentes, adhiriéndose a los Partidos de clase que impulsen y encaucen en un sentido revolucionario el movimiento de la clase trabajadora.

Las organizaciones sindicales deben no sólo aliarse a todas las demás organizaciones de la clase obrera, sino que entre ellas deben realizar

un vigoroso y combativo frente único sindical para organizar la lucha por las reivindicaciones inmediatas y preparar las masas sindicadas para la acción revolucionaria.

En los momentos actuales, la situación se plantea con toda claridad así: El proletariado aplasta al fascismo o el fascismo aplastará al proletariado.

La clase obrera no puede limitarse a la defensiva. Ha de prepararse para iniciar la ofensiva y para luchar hasta la victoria, apoderándose del Poder por la violencia e instaurando, hasta el completo aniquilamiento de sus adversarios, la dictadura del proletariado.

Por estas razones, proponemos que la primera asamblea del Secretariado Regional de Cataluña de la Unión General de Trabajadores de España acuerde:

1.^o Ratificar la adhesión de la Unión General de Trabajadores a la Alianza Obrera, encargando a sus organismos directivos que se esfuercen para dar a dicha organización de frente único una mayor vitalidad.

2.^o Proponer a la Comisión ejecutiva de la Unión General de Trabajadores que realice sin pérdida de momento las gestiones necesarias para la realización de un acuerdo entre todas las organizaciones obreras nacionales, tanto políticas de clase como sindicales.

3.^o Que la asamblea se pronuncie en favor de un frente único sindical entre las organizaciones de diversas tendencias, para organizar la lucha por las reivindicaciones inmediatas de la clase obrera y preparar a los Sindicatos todos para la acción revolucionaria.

4.^o Que la asamblea declare que ha llegado el momento de que la clase obrera, unida, se lance a la lucha revolucionaria para la conquista del Poder y dé mandato expreso a sus organismos responsables para que adopten todas las medidas pertinentes encaminadas a este fin.

5.^o Que el Secretariado regional se desentienda de toda relación con los partidos burgueses y los sedicentes socialistas (Unió Socialista de Catalunya), procurando que en lo sucesivo los acuerdos de esta organización regional se ajusten en un todo a las directrices marcadas por los organismos superiores de la Unión General de Trabajadores de España. — *Arasa, Fernández, Pérez, Vidal, Gil, García, Céster, Ullod y Valderrama.*

«CATALUÑA OBRERA»

Dictamen de la Ponencia:

Sobre la reaparición de *Cataluña Obrera* existen en la Memoria del Secretariado tres proposiciones que, copiadas textualmente, dicen así:

«Que se procure por todos los medios que se publique el semanario *Cataluña Obrera*.» (Sindicato Textil de Mataró.)

«Que se modifique el artículo 29 del reglamento del Secretariado en el sentido de que la dirección y administración de *Cataluña Obrera* corran a cargo de un Consejo que se nombre en cada

Congreso, del que deberán ser vocales natos los secretarios del Secretariado.» (Sindicato de Comisionistas, Viajantes y Representantes de Barcelona.)

«Que en vista de que el Secretariado no dispone de ningún órgano de prensa, se solicite que el semanario de la Unión Socialista de Catalunya, si le es posible, reserve lugar donde puedan exponer sus avisos o propagandas las Secciones de la Unión General de Trabajadores.» (Sindicato de Oficinas de Barcelona. Sociedad de Obreros de Cámara, Conserjería y Anexos de la Industria Hotelera de Barcelona. Sociedad de Profesiones y Oficios Varios de Barcelona.)

Esta Ponencia, en cuanto a la primera proposición, la acepta en su totalidad, ya que reconoce la necesidad de la reaparición de *Cataluña Obrera*. Por tanto, propone al Congreso — teniendo en cuenta que en poder del Secretariado existen en la actualidad 1.093,10 pesetas, pertenecientes a *Cataluña Obrera* — que éste empiece a reaparecer desde 1 de junio de 1934. Y para enjugar el presente déficit de *Cataluña Obrera*, esta Ponencia propone que el Congreso acuerde que cada Sindicato perteneciente al Secretariado de Cataluña adquiera el 10 por 100 de ejemplares de *Cataluña Obrera*, en relación al número de afiliados. Es decir, que los Sindicatos de 500 afiliados se queden con 50 ejemplares; los de 100, 10 ejemplares; los de 20, 2 ejemplares, y así sucesivamente, que, con objeto de que no les resulte gravoso, dichos Sindicatos o Sociedades venderán entre sus afiliados, amigos o simpatizantes. Esto supone un ingreso normal de alrededor de 450 pesetas, que permitirá cerrar con superávit la publicación de *Cataluña Obrera*.

La segunda proposición la acepta íntegra esta Ponencia, por considerar que el trabajo que realizan los dos camaradas secretarios apenas les deja lugar y tiempo para poderse dedicar con toda energía a la redacción de *Cataluña Obrera*.

En cuanto a la tercera proposición, esta Ponencia también la acepta, modificándola de la siguiente manera: «Que hasta tanto reaparezca *Cataluña Obrera*, el Congreso acuerde que los Sindicatos y Sociedades pertenecientes al Secretariado de Cataluña soliciten de toda la prensa obrera y política de clase que acepte su lucha la publicación de los avisos o propagandas de las Secciones de la Unión General de Trabajadores de España.» — *Vidiella, Bertoméu, Fernández, Salas, Solé, Gutiérrez, Fusimaña y Ribalta*.

ORGANIZACION

Dictamen de la Ponencia:

Proposición 11. — Queda modificada en la forma siguiente: «Confiar a la Federación Española de Trabajadores de la Tierra, en colaboración con el Secretariado, la redacción de un reglamento tipo de Federación regional de trabajadores de la tierra, modelándole de forma que en él tengan cabida, para la defensa de sus intereses de clase

obrera, todos los diversos sectores en que se desenvuelven la vida y el trabajo rural en Cataluña.»

Proposición 14. — Se modifica en la siguiente forma: «Que, una vez cumplidos los anteriores trabajos, quede facultado el Secretariado para realizar, en colaboración con la Federación Española de Trabajadores de la Tierra, una extensa campaña de propaganda y organización sindical en los medios agrícolas, creando la fuerza de adhesiones y opinión indispensable para hacer triunfar las aspiraciones de la Unión General de Trabajadores de España.»

Proposición 15. — Queda modificada en la forma siguiente: «Que ningún afiliado podrá pertenecer a distinto Sindicato que el de su profesión u oficio, salvo en casos de fuerza mayor.

Los casos de fuerza mayor serán debidamente dictaminados por la Junta del Sindicato de su profesión u oficio habitual y aprobados o denegados por el Pleno del Secretariado regional, con audiencia del compañero afectado.

Por excepción podrá pertenecer a la de Profesiones y Oficios Varios como socio de Propaganda.»

Proposición 16. — Se modifica de la manera siguiente: «Todo afiliado viene obligado a sindicarse en la población donde trabaja, y caso de no existir en aquella Sindicato de su profesión o de oficios varios, la sindicación se verificará en la población donde resida.»

Proposición 17. — La Ponencia dictamina: «Que el Secretariado dé cuenta a la asamblea del conflicto existente entre la Unión General de Dependientes y la Federación de Agentes Comerciales y Comisionistas sobre el pleito de fronteras sindicales, y la asamblea acuerde si procede o no nombrar la Ponencia para resolver el conflicto.»

Proposición 18. — Esta Ponencia estima que es función de la primera Ponencia, por entrar de lleno en la reforma de estatutos. — *García, Argudín, Martínez Cuenca, Salas, Costa, Accensi, Davó, Cabrero y Burés*.

VARIOS

Dictamen de la Ponencia:

Proposición 24. — Esta Ponencia, después de estudiar la propuesta que trata de las represiones llevadas a cabo por el Gobierno Dollfuss, de Austria, contra nuestros camaradas, estima que debe ser la asamblea en Pleno la que manifieste y acuerde, si procede, protestar enérgicamente contra los verdaderos hechos criminales de que han sido víctimas los compañeros austríacos por defender la justicia social en contra de la reacción encarnada en el siniestro canciller Dollfuss, que cínicamente, además, ha querido, por medio de la prensa burguesa, siempre al servicio de estos crímenes, hacer ver que la labor llevada a cabo por nuestros camaradas en pro del mejoramiento social era sólo y exclusivamente con el objeto de pertrecharse y combatir después al Gobierno. Todos sabéis que aquella labor, llevada a cabo desde el Ayuntamiento de Viena, servirá de ejemplo

a las generaciones futuras y harán que el espíritu del Socialismo no desaparezca jamás de aquella nación; antes bien, serán centenares, millones los camaradas que harán gustosos, si es preciso, el sacrificio de su vida por seguir sirviendo los mismos ideales que defendían los que inmolados han caído en el campo del honor.

Esta Ponencia cree procede que unánimemente se manifieste la asamblea exteriorizando su más enérgica condenación por los pasados hechos desarrollados en Austria, provocados por el fascismo internacional.

Proposición 43. — Es modificada de la siguiente forma: «Que habida cuenta de que el domicilio oficial del Secretariado regional de Cataluña de la Unión General de Trabajadores de España es la Casa del Pueblo de esta ciudad, procuren todas las Secciones estar domiciliadas en ella.»

Proposición 44. — Esta Ponencia estima que, por tratarse de modificar el artículo 39 de los estatutos del Secretariado, debe pasar a la primera Ponencia. — *García, Argudín, Martínez Cuenca, Salas, Costa, Accensi, Davó, Cabrero y Burés.*

PROPAGANDA

Dictamen de la Ponencia:

Propaganda de prensa. — Esta Ponencia cree que está en el ánimo de todos que la forma más eficaz y provechosa de propagar los ideales y táctica sindical de la Unión General de Trabajadores de España es la creación de un órgano de prensa que por su potencialidad sea digno de la importancia que tiene hoy nuestra organización en Cataluña. A tal efecto, proponemos que dicho órgano puede ser la reaparición de la suspendida *Cataluña Obrera*. No obstante, nos abstenemos de dar ninguna orientación sobre este particular, por entender lo hará así la Ponencia nombrada al efecto.

Propaganda oral. — Habiendo demostrado el Secretariado, durante su año de existencia, que la labor de propaganda más eficaz para el avance de fuerzas de la Unión General de Trabajadores de España ha sido la efectuada por mediación de la celebración de actos sindicales, y creyendo esta Ponencia que, con ser la misma poco extensa para lo que requiere nuestra organización, ha sido activísima si nos atenemos a que la misma ha sido solamente efectuada por media docena de compañeros, como se demuestra bien claro en la Memoria, y a fin de poder extender la misma a lo que nuestra organización requiere, que por las organizaciones sindicales se envíen al Secretariado los nombres de los compañeros que tengan cualidades para llevar a cabo actos de propaganda, y a tal objeto debe hacerse un censo de los elementos dispuestos a colaborar por mediación de actos orales, buscando una distribución periódica y sistemática de los compañeros que, cada domingo, deben detacarse a los lugares donde se acuerde celebrar esta clase de actos.

Para hacer frente a esta propaganda estima esta Ponencia debe nutrirse con una cuota de

0,10 pesetas por afiliado y trimestre, más las consignaciones que haya destinadas a este fin.

Al mismo tiempo deben, en Barcelona, efectuarse actos de importancia a los que preste su colaboración y ayuda la Comisión ejecutiva enviando compañeros de la misma que, por sus cualidades oratorias, puedan levantar el espíritu de las masas en Cataluña. Asimismo deben organizarse, por temporadas, conferencias, tanto sindicales como científicas, en las que intervengan compañeros especializados en los temas apropiados.

También proponemos que, como clausura del Congreso, se celebre un gran acto sindical en el que intervenga, aprovechando su estancia en esta ciudad, el camarada Largo Caballero y delegados fraternales de las Federaciones nacionales de industria, a poder ser con la colaboración de las organizaciones políticas y sindicales que componen la Alianza Obrera, y que vendría a ser como el principio de la gran labor de propaganda que ha de llevarse a efecto. — *Arasa, Fernández, Pérez, Vidal, Gil, García, Céster, Ulloa y Valdemara.*

CONFLICTOS

Dictamen de la Ponencia:

Considerando que los conflictos sociales son una cuestión de carácter permanente en tanto subsista la sociedad capitalista, es preciso que las organizaciones sindicales orienten sus actividades: 1.º A la consecución de leyes sociales que, dentro de esta sociedad burguesa, nos permitan el mejor desenvolvimiento posible; y 2.º No olvidar que nuestra misión debe ser encaminada a derribar la actual estructura social para implantar la nuestra.

Y analizando las partes específicas del planteamiento de los conflictos, los dividimos en la forma siguiente:

Causas. — Tienen su nacimiento en el incumplimiento de las leyes y pactos de trabajo y en la aspiración constante de mejoramiento que, al traducirse en hechos, socavan el privilegio capitalista.

Preparación. — Hay que tener en cuenta la realidad del momento por si pudiera favorecerse inconscientemente a intereses extraños y siempre tener presentes las máximas probabilidades que benefician al movimiento obrero, para evitar repercusiones que pudieran tornarse en retrocesos de las conquistas obtenidas. Deben distinguirse los dos aspectos que caracterizan a los conflictos, bien con ánimo de mejora económica, bien por provocación del enemigo común de la clase trabajadora. Para ello, es imprescindible preparar la moral individual a fin de que la cohesión sea constante entre los compañeros afiliados y los Comités directivos. Como doctrina sentamos el principio de que a toda declaración de conflicto debe proceder el apurar todos los medios que ofrezcan las leyes sociales y nuestras normas y estatutos.

Desarrollo. — Es cuestión precisa el acatamiento absoluto a los Comités que por nuestro sufragio hayan sido elegidos para la dirección del movimiento, haciendo caso omiso en todos los momentos, sean éstos cuales fueren, de toda noti-

cia que no parta del organismo directivo. La función del Comité ha de ser un receptor constante que asimile el estado de ánimo de todos y cada uno de los compañeros. Y por ello será muy conveniente delegar funciones a Comisiones de confianza del mismo para pulsar el estado de ánimo individual. — *Arasa, Fernández, Pérez, Vidal, Gil, García, Céster, Ullod y Valderrama.*

ANEXO A LA MEMORIA

El día 13 de marzo del año en curso, y cuando ya la Memoria que a las deliberaciones de la primera asamblea general del Secretariado de la Unión General de Trabajadores se presenta estaba impresa, la Alianza Obrera de Cataluña, de la que forma parte nuestra organización, declaró la huelga general por una duración limitada a veinticuatro horas.

Un número de compañeros vocales del Consejo regional del Secretariado, en fecha 13 del mes de marzo, solicitó una reunión extraordinaria del Consejo, la que, convocada inmediatamente, tuvo efecto el día 18 subsiguiente, para tratar, según constaba en la solicitud de referencia, sobre la «Conducta observada por el compañero secretario general».

Aunque los compañeros del Consejo regional del Secretariado, peticionarios de la reunión extraordinaria, no reunían el número que estatutariamente se precisa, el que suscribe se apresuró a conceder el Pleno interesado.

Tuvo efecto la sesión, como antes queda dicho, el día 18 de marzo próximo pasado, y de entre otras proposiciones presentadas a la deliberación del Pleno—que por mayoría de votos fueron unas rechazadas y otra no puesta a debate por no figurar en el orden del día—, se aprobó, también por mayoría de votos, una resolución que textualmente decía así:

«Haber visto con disgusto la actuación del secretario general en la huelga de veinticuatro horas.»

Esto es, como anexo a la Memoria, lo que a la deliberación de la primera asamblea general del Secretariado regional en Cataluña de la Unión General de Trabajadores presenta

El secretario general, *J. Vila Cuenca.*

BIDONES Y BOCOTES

Dictamen de la Ponencia:

La industria tonelera sufre una gran crisis por el poco interés que hasta los momentos actuales han tenido todos los Gobiernos, antes los de la monarquía y en la actualidad los de la República.

Por parte de la representación federativa nuestra se han dirigido peticiones, desde hace una infinidad de años, a todos los ministros del Comercio y Comisiones nombradas por los mismos. Todos nos han dado muy buenas palabras; pero realidades, ninguna.

Una de las causas de nuestra crisis son los bidones de hoja de lata y de hierro para aceite. Antes todo se construía de madera; pero el comercio

compra los bidones en el extranjero, entrando en España como admisión temporal, burlando la ley, y no pagan los derechos arancelarios que les corresponden, defraudando al Estado y arruinando la industria tonelera. En nuestros informes dirigidos a los ministerios respectivos decimos que si al comercio le convienen los bidones de hoja de lata o de hierro, que se construyan en España, y serán nuestros compañeros metalúrgicos los que los construirán, que su crisis también es grande.

Otra causa de la crisis que sufrimos es la gran invasión de bocotes llamados de transporte, que también entran como los bidones, de admisión temporal. La realidad es que el comercio de vinos alquila cascos en Francia, haciéndoles servir para el transporte de vino para la península y el extranjero. Después de ser Francia la que construye los bocotes, allí mismo hacen la reparación de los mismos.

Es evidente, dada la normalidad en que ahora se desenvuelven los transportes, que con un plazo de noventa días hay tiempo más que sobrado para llegar los envases a destino en el interior, ser llenados y reexpedidos. Porque las importaciones han de obedecer siempre a contratos ya formalizados, y, por consiguiente, las expediciones de caldos estarán preparadas para ser envasadas y remitidas con un mínimo de tiempo.

Debido a lo expuesto, los toneleros sufrieron la miseria por culpa de los gobernantes, que tanto dicen que su interés es proteger las industrias españolas.

Pero las anomalías grandes no terminan con lo antes expuesto, sino que se da la anomalía de que tanto las maderas en rama que entran en España para la construcción de cascos como los fletes para los mismos pagan derechos arancelarios, que el impuesto pasa a encarecer los cascos. Las maderas corrientes que nosotros gastamos son castaño y roble. De la clase primera hay en España; pero de la segunda, no. La inmensa mayoría procede de América del Norte. Si por parte del Gobierno hubiese interés se podría aprovechar dando a la madera roble para la construcción de cascos entrada libre, en compensación para poder proteger la exportación de vinos españoles a la mencionada América.

En una reunión celebrada en Madrid, en la Comisión mixta de la Madera, el día 23 de mayo de 1933, ya se trató de este asunto. De esta reunión salimos con la impresión de que sería una realidad, por la unanimidad de que dieron muestras todos los representantes allí reunidos, incluso el delegado del Gobierno; pero hasta el presente no tenemos ninguna noticia de que en el ministerio de Comercio se hayan preocupado del asunto.

De los puntos primeros que mencionamos de bidones y bocotes en nuestras exposiciones a los ministros del Comercio, al hacerles las conclusiones les remitimos nuestros puntos de vista, que entendemos serían en beneficio de nuestra industria. En el presente informe no las incluimos, debido a que al ser requeridos para presentarlo no fuera muy extenso, limitándonos a puntos concretos. No obstante, por separado, las incluimos.

para que el Gobierno se entere cómo entendemos se podría solucionar nuestra crisis.

Bidones de hoja de lata y hierro. — Limitación a sus verdaderos términos del derecho a aprovecharse de la importación en régimen de admisión temporal de envases de hierro y hoja de lata, excluyendo de ella a los comerciantes establecidos en España, si los envases vinieran vacíos, o permitiéndoles a éstos tan sólo, si vinieran con aceite en régimen de importación temporal.

Asegurar mediante medidas rigurosas la identificación de los envases — troquelamiento en sus fondos de las palabras «Admisión temporal», que sea visible —, para evitar su circulación destinados a otros usos que los de ir del puerto al almacén para cargarlos y del almacén a los puertos para su embarque, prohibiendo su facturación para otros destinos.

Exigir que las expediciones de envases entrados en régimen de admisión temporal vengan provistas de la oportuna documentación de identidad, así en cuanto a su carácter de extranjero, a la pertenencia a casas extranjeras y al país de origen.

Limitación del plazo de duración del beneficio de la admisión temporal a los que prudentemente se considere convenientes para su posible reexportación. Para que con noventa días puedan volver a salir todos los que importen, dada la normalización de los planos de transporte por ferrocarril.

Imponer fuertes sanciones a los quebrantadores del régimen de admisiones temporales; llevando a cabo con frecuencia inspecciones depuradoras.

Vino. — Prohibir que se beneficiaran de las ven-

tajas temporales más que los comerciantes extranjeros domiciliados en el exterior, cuando los envases importados fueran vacíos para venir a España a buscar caldos producidos aquí, o los comerciantes exportadores españoles, cuando se tratara de bocoyes y barriles llenos utilizados en la importación temporal de aceites de oliva para su reexportación o del retorno de envases salidos con caldos nacionales llegados hasta el punto de su destino; exigiendo en las Aduanas la justificación de los envases mediante marcas de fuego en los fondos de los envases con el nombre del importador y las correspondientes facturas consulares del país de origen del envase.

Reducción del plazo de dos años concedido para la reexportación de dichos envases importados en régimen de admisión temporal a noventa días, con derogación de las ampliaciones posteriores.

Obligar a que los envases recibidos en régimen de admisión temporal circulen acompañados de una guía expedida por las Aduanas, con validez de seis meses, cuyo documento debe ser presentado para efectuar las exportaciones.

Exigir que ningún envase de los recibidos en admisión temporal pueda ser destinado a otro uso que al de la exportación de caldos, a cuyo fin debería prohibirse que pudieran ser admitidos a facturación en las estaciones del ferrocarril más que consignados a un puerto de embarque y previa presentación de aquella guía.

José Aiguadé, Manuel Farras, Miguel Cabaces, Manuel Ferrer, Juan Fronjosá, Juan Tous, Juan Durán, Pedro Calvet y Vicente Farré.

Discurso del compañero Largo Caballero en la sesión de clausura

Compañeras, compañeros: Cuando la Comisión ejecutiva de la Unión General de Trabajadores tuvo conocimiento de que se celebraba este Congreso, por iniciativa propia (pues hemos de hacer constar que no hemos sido invitados al mismo, sino que ha sido por propia iniciativa de la Comisión ejecutiva) se acordó mandar un delegado, y que este delegado fuera su secretario. Al mismo tiempo acordó invitar a las Federaciones de industria para que nombrasen delegados que vinieran a este Congreso, razones por las cuales se encuentran en Barcelona catorce a quince representaciones de Federaciones y el secretario de la Unión General de Trabajadores, sin ningún propósito de intervenir, directa ni indirectamente, en vuestras labores y, sobre todo, en aquellas deliberaciones que fueron motivadas por cuestiones interiores e íntimas de vuestra organización.

Ya habréis observado durante el Congreso que se han hecho alusiones directas a la Unión General de Trabajadores y a los secretarios de las Federaciones de industria, y, sin embargo, nosotros no hemos querido intervenir porque entendíamos que os debíamos dejar en libertad absoluta para decidir aquello que creyerais más conveniente a los intereses de la organización.

Hemos venido para demostrar a los obreros de

Cataluña nuestra solidaridad, nuestro entusiasmo con la actuación de los obreros organizados de Cataluña, sobre todo los de la Unión General de Trabajadores; y creíamos nosotros que este acto de solidaridad, de fraternidad, esta adhesión a la labor que veníais realizando sería no agradecida, porque entre nosotros no cabe el agradecimiento, pero sí estimada en su justo valor. Por ello estamos aquí, sin que nadie lo pueda considerar como una intromisión. Además, teníamos interés en venir porque la clase enemiga tiene siempre tendencia a interpretar vuestro deseo en cuanto a la autonomía de Cataluña en el sentido de que vosotros (me refiero a los catalanes en general) no es una autonomía, sino un separatismo lo que defendéis. Nosotros sabemos que esto no es cierto; que la clase obrera desea una autonomía que le permita desarrollar sus aspiraciones y resolver sus problemas, y no por ello hemos de considerarlos separatistas.

Queremos demostrar a la clase burguesa que el separatismo podrá estar en otra; pero no entre nosotros, los obreros. De manera que nuestra presencia aquí tiene, aparte de otras cosas, la significación de una mayor compenetración de los trabajadores de Cataluña y del resto de España.

Lamentamos que los hechos se hayan desarro-

llado de tal manera que, seguramente sin querer, sin el propósito de hacerlo, los actos ejecutados por algunas representaciones aparezcan como la expresión de una repulsa a los camaradas que del resto de España han venido a presenciar vuestras deliberaciones, y que ello sea aprovechado por el enemigo para hablar de separatismo. Y ¿por qué se han originado los hechos? ¿Es que se han discutido problemas fundamentales de esos que más nos deben preocupar hoy? Nada de eso. Ha sido por la admisión de una representación por lo que algunos camaradas, molestados, se han marchado del Congreso, y tienen, según aquí se ha manifestado, el propósito de constituir otro organismo sindical.

En Barcelona, en Cataluña siempre se está dispuesto, por temperamento, a constituir organismos y a desunirlos después, haciendo una labor inútil, mientras que el enemigo se prepara para darnos la batalla final. Yo tengo que hacer una declaración y, naturalmente, bajo mi responsabilidad, aunque creo interpretar el pensamiento de la Comisión ejecutiva: nosotros creemos que la pasión pueda ayudar a realizar actos que en ciertos momentos parecen censurables, y no creemos que sean producto de la mala fe, sino del error, y a éstos la Unión General de Trabajadores estará dispuesta a darles solución; también contribuiremos, en la medida de nuestras fuerzas, a unificar las fuerzas proletarias de Cataluña.

Lo que debe condenarse de una manera enérgica es la disidencia dentro de la Unión General de Trabajadores, y a la rivalidad personal perseguirla y sancionarla. La indisciplina personal, como la indisciplina colectiva, jamás se debe perdonar. Mientras el proletariado español no tenga la valentía de condenar todas las escisiones; mientras tenga generosidad y benevolencia con ellas, no habrá organización. Cuando los militantes sienten la disciplina dentro de sus organismos, trabajan para que sus puntos de vista triunfen; pero cuando en una organización, en una asamblea se toman acuerdos que no estén en armonía con el criterio por ellos sustentado, deben ser disciplinados y acatarlos. Y ahora mismo no todos pensamos igual dentro del Partido acerca de ciertos aspectos de los problemas políticos planteados; pero todos nos sometemos a la disciplina y a los acuerdos del Partido.

El que os está hablando ha sufrido dentro del Partido y dentro de las organizaciones obreras muchas decepciones en relación con su criterio, y, sin embargo, siempre se ha sometido al criterio de la mayoría. En nuestras organizaciones siempre ha existido el derecho a la crítica y, cuando ha llegado el momento, se han expuesto y sostenido los criterios; y si ha sucedido que ha triunfado el contrario, se ha sometido el discrepante a las resoluciones de la mayoría. ¿Es que se cree que la mayoría está equivocada?

La mayoría es la masa, y a los que miran con cierto menosprecio a la masa yo les digo que el hombre más elevado intelectualmente, si tiene el sentimiento de la democracia obrera, aun reconociendo el error de ésta debe someterse al error

de los más. Y esto por una consideración que debe estar en el ánimo de todos nosotros, y los hechos nos lo dicen claramente: los errores personales no se rectifican fácilmente porque el amor propio lo impide. Es mucho más generosa la masa, que, cuando reconoce su error, rectifica. Yo tengo siempre confianza en la masa, que si se equivoca, con la misma buena fe se apresura a rectificar.

El que os habla, lo sabéis vosotros perfectamente, ha sido ministro y, por suerte o por desgracia, cierto sector de la clase obrera le ha combatido con encarnizamiento. Sin embargo, a nadie le guardo rencor. Creo que todo cuanto se haya podido decir ha sido por desconocimiento, pues yo creo que si se hablaba así de nosotros era porque se nos desconocía, y conforme esa masa nos va conociendo rectifica su opinión.

Por ello espero que los camaradas que han tomado cierta determinación en este Congreso lo reflexionen bien y vean que no puede ser solución el dividir a la masa obrera. No creo yo que voluntariamente, conscientemente, premeditadamente se quisiera producir una división en la clase trabajadora en estos momentos en que las diferencias entre hombres de diversas tendencias, como comunistas, sindicalistas, anarquistas, trotskistas y socialistas, se van borrando para unirse todos y vencer al enemigo que pretende aplastarnos. Espero que esos compañeros reflexionarán y seguirán luchando sin producir divisiones. Naturalmente que al hablar de esto, que yo esperaba cuando vine a Barcelona, y que lo han dispuesto las circunstancias, no condeno nombres, sino hechos, porque hace tiempo que estoy en el terreno de no devolver injuria por injuria y ofensa por ofensa en aras de la unificación obrera.

Durante vuestra discusión habéis tocado temas que a mí me interesa tratar para aclarar la situación, porque una cosa es desear la unificación obrera y otra la causa de esta separación circunstancial. El compañero Bové, a quien conozco de antiguo y que desea, como yo, el triunfo definitivo para nuestras ideas, ha hecho esta mañana alusión a cierto asunto. Yo creía que estarían aquí los compañeros que se han marchado, y delante de ellos se aclararía la verdad. No obstante, haré historia de cómo se desarrollaron los hechos.

En Cataluña cuajó entre los camaradas, cosa muy natural, el deseo de una unificación socialista. ¿Quién se iba a oponer a eso? Nadie absolutamente. Se celebró un Congreso a tal efecto, y entre los acuerdos que allí se tomaron está el de hacer unos estatutos, los cuales se mandan a la Comisión ejecutiva del Partido Socialista, y, amablemente, fraternalmente, se acordó indicarle la manera de reformarlos para que estuvieran de acuerdo con la *Organización general* del Partido. Se nos contesta que nos aferramos mucho a los estatutos y que debemos aceptar el ingreso de la Unión Socialista. Decimos no ser posible ello, ya que tenemos que sujetarnos a nuestra reglamentación orgánica; y así pasa el tiempo, hasta que un día nos comunican los compañeros de la Unión

Socialista que han acordado dejar en suspenso los estatutos aprobados en el Congreso de Barcelona y, provisionalmente, aceptar los que tenía la Federación Regional Socialista Catalana.

Y cuando este acuerdo llegó a la Comisión ejecutiva, todos, sin excepción, lo recibieron con alegría, porque supusimos que las cosas iban por buen camino.

En la minoría socialista se aprobó haber visto con satisfacción el que dichos compañeros de la Unió Socialista de Catalunya se reintegraran al Partido; acordándose acoger fraternalmente a los diputados suyos dentro de su seno y trabajar todos unidos por el bien de la causa. Bien claro está que por nuestra parte no había prejuicios de ninguna clase. Quedaba por resolver el caso de la Agrupación de Barcelona. Viene De Francisco, y, después de muchas gestiones, que no voy a relatar, vuelve a Madrid sin haber logrado resolver el asunto. Se trataba, en síntesis, de que se expulsara de nuestras filas a los compañeros que en Barcelona habían conservado la Agrupación Socialista, y se fundamentaba en ciertas apreciaciones personales. El Partido Socialista no puede echar a nadie sin motivo justificado, y, además, no hay que confundir las conductas personales con las conductas colectivas.

Hemos observado en vuestros Congresos, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, que creéis que en los Congresos se pueden discutir los asuntos personales. En un Congreso no se discute más que la conducta de las personas que componen los Comités responsables; las de los afiliados son sus respectivas Secciones las que deben formar el expediente oportuno. Debemos, pues, recalcar que lo que cabe en un Congreso es expulsar no al afiliado, sino a la Sección, en caso de que ésta no haya cumplido con su deber. Por lo tanto, la Comisión ejecutiva no podía juzgar a individuos, sino a la entidad, y como tal entidad no se la podía des-
echar.

No hay acuerdo, y queda, naturalmente, en suspenso el ingreso de la Unió Socialista, hasta que un día tengo que venir a Barcelona para asuntos sindicales. No traigo entonces ningún encargo del Partido para intervenir en el pleito, y declaro que fué una oficiosidad mía. En vista de lo sucedido no se podía seguir otro camino más que aceptar los hechos consumados.

Sin embargo, como presidente del Partido, me parecía que era un caso de conciencia el venir a Barcelona y no intentar alguna gestión que tal vez pudiera poner término a la cuestión y solucionar el pleito. No se podía decir que no se quería la unión por nuestra parte cuando, sin ningún mandato, buscamos el arreglo. Habréis de perdonarme que vaya a estos detalles, porque es preciso que se sepa por todos cómo yo propuse una solución, de lo cual hay aquí testigos que podrían dar fe. La solución era la siguiente: Barcelona es una gran capital no solamente en el orden político y económico, sino por su extensión, y yo reconozco que una sola entidad socialista es difícil que pueda desenvolverse con la agilidad necesaria. Dividamos, pues, Barcelona en zonas, dos,

tres, cuatro, las que se consideren necesarias, y que cada una de ellas constituya su Agrupación con autonomía, y que cuando haya que tratar asuntos de carácter general y que afecten a toda la población, que se reúnan los representantes de estas diversas Agrupaciones, lo mismo que hacen las Agrupaciones de una provincia en momentos electorales o en otras ocasiones. Esto, de momento, podía ser la solución para Barcelona, y más adelante, las mismas circunstancias nos indicarían el camino a seguir.

Así se propuso a los compañeros del Partido Socialista, y lo aceptaron. Los de la Unió Socialista, no, y dijeron que éste no era el problema, sino que eran los estatutos y que el Partido debía aceptar los acordados por el Congreso de Barcelona. Yo no tenía atribuciones para entrar a discutir una cosa ya juzgada por la Comisión ejecutiva, y aquí acabó la discusión. Han tenido, pues, los camaradas de la Unió Socialista el camino expedito para ingresar en el Partido y no lo han querido utilizar. Yo siento que no estén aquí los compañeros interesados porque he de decir que hay derecho a sospechar que la posición adoptada por ellos era premeditada, porque si entrasen al Partido tendrían la obligación de seguir una conducta política igual que todos, y, naturalmente, si esa obligación les llevaba a rectificar ciertas resoluciones, se heriría su amor propio. Para soslayar y justificar su conducta política, algunos compañeros de la Unió Socialista han manifestado públicamente que se amoldaban en su actuación a las indicaciones y orientación del Partido Socialista en la última crisis, afirmando que la representación de la minoría socialista había aconsejado al jefe del Estado que se constituyera un Gobierno republicanosocialista y que siguiendo esa orientación no han tenido inconveniente en formar Gobierno con elementos que no son socialistas. Pero yo tengo la obligación de decir que eso es una equivocación. En la nota oficiosa que se entregó al jefe del Estado se decía lo siguiente: «Disolución del Parlamento y entrega del Poder íntegramente al Partido Socialista.» Esa es la verdad y ya veis que difiere mucho de la versión propalada.

Otra cuestión que se ha venido manejando *sotto voce* entre las organizaciones y los compañeros es aquella que se refiere a la legislación social. No voy a hablar de las leyes que promulgué siendo ministro de Trabajo, porque son conocidas por todos. Como también sabéis que en la cuestión de los Estatutos procuré que en la Constitución constara el derecho a tenerlos no sólo de Cataluña, sino de las demás regiones de España. En cuanto a los servicios de Trabajo, lo único que se reservaba el Estado era la alta inspección de la legislación social.

Me he enterado por la prensa de que la persona que está al frente de lo que pudiéramos llamar ministerio de Trabajo en Cataluña se ha lamentado de que no tiene medios para hacer cumplir la legislación, sobre todo porque las atribuciones que se le han concedido no son suficientes. Ahí está el decreto de traspaso, que podemos leer. Cuando eso se trató en la Comisión mixta, tengo

la satisfacción de poder decir que un representante de Cataluña en la Comisión mixta declaró que de todos los servicios que se traspasaban a la Generalidad, el de Trabajo era el más favorecido, ya que el entonces ministro de Trabajo no opuso ninguna dificultad. En ese decreto se le dan al Gobierno de la Generalidad las mismas atribuciones que puede tener el ministro de Trabajo en el resto de España. El Parlamento es el que legisla, el ministerio el que ejecuta, y exactamente igual facultad es la que se concede a la Generalidad. Si luego no se ha sabido hacer cumplir esta disposición o se ha desvirtuado por disposiciones posteriores, de eso yo no puedo ser responsable. Es más, del mismo modo que estando yo en el ministerio no permití jamás que se me restasen atribuciones, creo que el ministro de Trabajo de la Generalidad debe hacer respetar su derecho. Pero que sea con todas las consecuencias y no se siga lo que vulgarmente se llama la política de toma y daca y que en esta política la que obtenga los beneficios sea la clase capitalista. Ese es el quid de la cuestión; no querer indisponerse con el Poder central para poder obtener otras ventajas, cediendo en lo que tenga relación con la clase obrera, es una política equivocada. Y es un error dentro de una República, aunque ésta sea burguesa, querer apoyarse en la clase capitalista. Para que una República sea lo que debe ser ha de apoyarse en la clase obrera, y de no hacerse así, el Gobierno que tal haga lo pagará con el tiempo. En política, los errores se pagan a la corta o a la larga. Ahora bien: querer deformar la verdad para justificarse no es discreto, y menos buscar que aparezcamos como realmente no somos.

No es culpa nuestra que los expedientes se acumulen a millares sin resolverse, ni tampoco que el Estatuto no haya dado plena satisfacción en Cataluña, máxime cuando los socialistas pusimos toda nuestra fuerza en favor de que se aprobara. Yo no he de negar el esfuerzo, la energía desplegada por el pueblo catalán para obtener un Estatuto que, en rigor, no creo pueda satisfacerle; pero a pesar de los rencores políticos, la realidad no puede ocultarse, y es que sin los ciento diez votos socialistas el Estatuto no hubiera salido adelante. Y ahí tenéis como demostración lo que pasa con el Estatuto vasco. Ha variado la composición de la Cámara; las derechas tienen más fuerza numérica que nosotros, y el Estatuto no sale.

Otro asunto que quiero tratar y que va en el orden del día de este Congreso es el que se refiere a lo que se llama frente único o alianza obrera. Esta es una cuestión importantísima. Ya sabéis la teoría mantenida por mí en diversos actos públicos, y que he de sostener aquí, de que es preciso que entre la clase trabajadora haya un armisticio en las luchas intestinas, y que dediquemos todos nuestros esfuerzos a combatir al enemigo común. Y si no tenemos el sentido político que debemos tener y nos dejamos arrastrar por las pasiones, seremos vencidos de manera irremisible. Ahora bien; con esto ni predico ni propugno por confusionismos, y debemos aclarar el objetivo final para que está fomentada la

Alianza Obrera. La Alianza Obrera ha de ser, como objetivo concreto, poner de acuerdo a todos los trabajadores para hacer un movimiento revolucionario y dar al traste con el régimen capitalista. Para eso es para lo que deben hacerse alianzas de esa clase; pero seriamente, con lealtad y con el decidido propósito de que sea una realidad el objetivo propuesto. Y lo primero que debe hacerse es llegar al armisticio de que os hablaba hace unos momentos, cesando las injurias y las calumnias; porque si por un lado se pide un frente único y por el otro se ataca a aquellos mismos a quienes se busca, es imposible llegar a un acuerdo.

Algunos camaradas han dicho que eso debe hacerse con carácter nacional; es decir, que la Unión General de Trabajadores y el Partido Socialista se pongan de acuerdo con los demás organismos nacionales para hacer la alianza. Yo debo decir que todavía no ha llegado ninguna comunicación al Partido ni a la Unión General de Trabajadores pidiendo la alianza. Si nadie la ha pedido; si nadie ha dado señales de vida; si una organización nacional como la C. N. T. se reúne en Barcelona y acuerda no hacer alianzas, no somos nosotros los responsables de que no se haya hecho. Pero cuando hemos conocido el propósito de alianza en Cataluña o en otros puntos, si hemos visto buena fe, no hemos tenido inconveniente en acceder a ella. No hay duda que tendría sus dificultades un acuerdo de carácter general, porque lo que es fácil en una localidad es difícil en otra; pero allí donde no haya esos inconvenientes, deben formarse.

Para lo que no han de utilizarse es para luchar en los pequeños o grandes conflictos que diariamente se suscitan entre patronos y obreros, porque se desgastarían inútilmente, y su objetivo es muy otro. Actualmente, en Valencia, en Zaragoza, en otros sitios hay movimientos de protesta en que conjuntamente van nuestros hombres y los de otras tendencias a la lucha. Tampoco nos oponemos. Ahora bien: estos movimientos competen a las entidades como tales, no a la Alianza Obrera, que, repetimos, tiene un objetivo concreto y a él ha de atenerse. A estas alianzas, pues, el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores estamos siempre dispuestos; pues con la experiencia obtenida después de pasar por el Gobierno hemos sacado la conclusión de que la emancipación no es posible sino de una manera: apoderándonos del Poder político por la vía revolucionaria.

La emancipación de la clase obrera no depende de que en la Constitución del Estado haya más o menos derechos políticos consignados; no depende de que en las leyes se consignen atribuciones de poder para la clase trabajadora, derechos que después, en la práctica, no se puedan hacer efectivos. Hace falta tener primero la libertad económica. Mientras que no se vaya a la resolución de este problema vital, mientras no desaparezca el régimen de propiedad actual y los hombres tengan que vender su esfuerzo para ganar un jornal, las libertades políticas serán efímeras y dejarán de cumplirse en cuanto lo estime conveniente la clase poseyente.

Ayer noche recordaba que hace justamente tres años salíamos de casa del Sr. Maura y fuimos y nos apoderamos del ministerio de la Gobernación. En este tiempo hemos promulgado varias leyes sociales y una Constitución, y en estos momentos declaro ante la conciencia universal que, políticamente, la clase trabajadora española está peor que cuando había monarquía. Vosotros sabéis la persecución que en toda España se ha desarrollado contra la clase obrera. Vosotros sabéis que la prensa obrera, y especialmente *El Socialista*, sufren más recogidas que en los tiempos monárquicos, y que prácticamente su circulación está suspendida. ¿Para eso se trajo la República? Y cuando no estamos en estado de prevención es que estamos en estado de alarma; y si salís a la calle veréis cómo en plenas fiestas republicanas la fuerza pública lleva los fusiles en la mano y a punto de disparar. Eso significa algo que todos los hombres que luchamos por traer la República debemos repudiar, y por eso entendemos que la clase trabajadora debe ir de una manera directa a su emancipación económica, porque sólo así será libre totalmente.

¿Cómo lograr esa emancipación económica? No se puede lograr más que de una manera. De la manera que señala nuestro gran maestro Carlos Marx. Claro está que nosotros no soñamos que pueda hacerse de la noche a la mañana, y que sabemos las dificultades que esto tiene; pero queremos lograrlo, y para que sea una realidad la emancipación económica han de desaparecer las clases en que actualmente está dividida la sociedad. ¿Cómo puede obtenerse esto? Hay diferentes opiniones. Unos piensan que la clase obrera, si lucha, bien puede llevar al Parlamento una mayoría para lograr sus justas aspiraciones. Ya hemos dicho que, aun cuando eso fuera posible y se llegase a tener mayoría socialista, lo que reputamos difícilísimo, por los medios coercitivos de que dispone la burguesía para predisponer el cuerpo electoral a su favor, el sabotaje por parte de la burguesía a las leyes promulgadas sería de tal naturaleza que las haría ineficaces. Ahí tenéis bien claro el caso de la Reforma agraria. Ahí tenéis bien claro el boicoteo que los terratenientes e industriales emprendieron contra la obra republicana.

Se lanzaba a los hombres al paro y a la miseria para después decirles que los socialistas eran los responsables de que no hubiera trabajo y de que pasaran hambre. Y si eso han hecho con una República, al fin y al cabo, burguesa, en cuanto hubiera una Cámara y un Gobierno socialistas que quisieran hacer cumplir las leyes que se hicieran, se opondrían, incluso con las armas, a que se les arrebatara sus privilegios. Es decir, que emprenderíamos un camino infinitamente más largo para terminar haciendo lo mismo: luchar violentamente para despojar a las clases poseyentes de sus privilegios. Eso si no pasaba, que es lo más fácil que ocurriera, lo mismo que ha pasado en Italia, en Alemania y en Austria. Que antes de llegar al extremo de consentir su desaparición como clase la burguesía ha buscado el

medio de anular a su antagonista. Y no ha reparado en medios, ni tampoco en verter sangre, sin hacer caso de las fórmulas democráticas ni parlamentarias.

No podemos, pues, hacernos ilusiones; la única manera de salir triunfantes es la revolución violenta. Y si eso ha de verificarse, no ha de ser con mítines ni discursos. Debemos formar nuestra conciencia en esta convicción, convenciéndonos al paso de que hay que terminar con aquellos movimientos platónicos, verbalistas, en los cuales salir a la calle a dar gritos hace creer a la gente que termina con un régimen. Hay que pensar primero en que todos los hombres que se puedan reclutar son pocos para tal empresa. Que hay que organizarse materialmente, porque aquellos contra los que tenemos que luchar lo están, y que debe haber en la acción una disciplina absoluta, férrea.

En estos momentos no hay más que tener el convencimiento de que hay que prepararse, ponerse en condiciones para cuando llegue el caso preciso, y los que se comprometan sepan que han de obedecer para triunfar, y aunque tengan que sacrificarse, tengan la satisfacción de saber que los que vengan detrás no tendrán necesidad de proseguir la lucha en estas condiciones, y la Humanidad gozará de un régimen social más justo que el actual. Y en esta lucha social no hay, no puede haber diferencias raciales. El capitalismo no tiene inconveniente en explotar lo mismo al blanco que al negro, y en saltar fronteras para salvarse o aplastar a su enemigo de clase. La clase obrera tiene, pues, que borrar sus diferencias, sus diferencias de raza o de idioma, y unirse contra el enemigo común en un mismo anhelo.

Y si es así, ya pueden aumentar la guardia civil, pueden funcionar los Tribunales de urgencia, destituir Ayuntamientos socialistas, etc., que el día que la masa trabajadora tenga conciencia de su fuerza, ¿quién podrá vencerla?

Ahora bien; no creáis que después de esta lucha todo ha de ser normalidad, y que al día siguiente vamos a vivir en el nuevo régimen sin ninguna dificultad. Habrá las dificultades inherentes a un cambio de tal naturaleza; pero, si se aplasta al capitalismo de tal manera que no pueda revolverse contra la revolución, la transformación se realizará, como la está realizando, pese a todas las dificultades, Rusia.

Yo os digo, camaradas, que la impresión de los incidentes del Congreso no debe ser lo que perdure en vosotros; que esos pequeños conflictos, que pudiéramos llamar normales en toda organización, tienen que olvidarse, y si queda algún amargor de los mismos, perderlo pronto, puesto que si nos obstinamos en recordarlos empujamos a la organización y llevamos el desánimo a los militantes. Yo creo que los hombres que tienen ideas han de hacer lo contrario: dedicarse a llevar a la conciencia de los proletarios la necesidad de que se incorporen a nuestras filas y de que intensifiquen los trabajos para organizar la insurrección armada.

Informe de la delegación obrera, representante de la Unión General de Trabajadores, en la XVIII Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra

En los días del 4 al 23 de junio se ha celebrado en Ginebra la XVIII reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, bajo la presidencia del Sr. Godart, ex ministro de Trabajo y delegado gubernamental de Francia.

Durante esta reunión se produjo un acontecimiento que puede calificarse de histórico para la Organización Internacional del Trabajo: la comunicación oficial de una posible y próxima adhesión de los Estados Unidos, seguida de una invitación hecha por la Conferencia a la República norteamericana.

El resultado de la Conferencia ha sido una nueva contribución de importancia particular a la obra de legislación social internacional por la adopción de cuatro proyectos de convenio, de los cuales dos son nuevos, y otros dos que resultan de la revisión parcial de convenios adoptados precedentemente.

El seguro de paro.

La Conferencia adoptó un importante proyecto de convenio sobre el seguro de paro, cuyas disposiciones esenciales son:

Todo Estado que ratifique la convención se compromete a instituir un sistema que garantice a los parados involuntarios una indemnización o un subsidio.

Este sistema puede ser el seguro obligatorio o voluntario, o una combinación de ambos, o uno de estos sistemas completado por la asistencia.

El convenio se aplicará a toda persona habitualmente empleada a cambio de un salario o sueldo, con excepción de los marinos y pescadores y de los trabajadores agrícolas. Las legislaciones nacionales podrán exceptuar del campo de aplicación a ciertas categorías de trabajadores, tales como: el personal del servicio doméstico, trabajadores a domicilio, trabajadores dependientes del Estado, de las autoridades locales o de los servicios de utilidad pública; trabajadores no manuales, cuyas ganancias exceden de una cantidad determinada; asalariados mayores o menores de cierta edad; trabajadores de temporada o excepcionales.

Otras disposiciones precisan las condiciones para adquirir el derecho al pago de indemnizaciones o subsidios, así como la pérdida eventual de este derecho. Se estipula que el período de socorro no debe ser, de manera normal, mayor de ciento cincuenta y seis días laborables por año y en ningún caso inferior a setenta y ocho días. El pago de las indemnizaciones, pero no el de los subsidios, no estará subordinado al grado de necesidad del recurrente. Las indemnizaciones deberán ser pagadas en metálico; sin embargo, ciertas prestaciones complementarias podrán ser abonadas en especie, lo mismo que los subsidios.

Según la práctica constantemente seguida por la

Conferencia en materia de seguros sociales, se ha añadido a este proyecto de convenio una recomendación enunciando los métodos más recomendables por la experiencia a los fines de la mejor aplicación de la reglamentación adoptada.

Trabajo y descanso en las fábricas de vidrio.

La Conferencia ha adoptado también un proyecto de convenio relativo a los modos de descanso y relevo de los equipos en las fábricas automáticas de vidrio.

Se aplica a los trabajadores ocupados en estas Empresas por equipos sucesivos en los trabajos necesariamente continuos. *La duración del trabajo no deberá exceder de cuarenta y dos horas por semana, promedio calculado sobre un período de cuatro semanas, y será de ocho horas como máximo por equipo.* La duración del descanso entre dos jornadas del mismo equipo no podrá ser inferior a dieciséis horas. Existen disposiciones que se refieren a las derogaciones y compensaciones.

Aunque limitado en su aplicación, el convenio tiene un interés general. El sistema que fija para las fábricas de vidrio automáticas es el previsto en el anteproyecto sobre la reducción de la duración del trabajo en las empresas de trabajo continuo.

De otra parte, la Conferencia adoptó una resolución en la que se pide a la Oficina Internacional del Trabajo que continúe el estudio de los sistemas de descanso en las otras ramas de la fabricación automática de vidrio.

El trabajo nocturno de la mujer.

La revisión parcial del convenio adoptado en Washington (1919) para prohibir el trabajo nocturno de la mujer se ha referido a los dos puntos siguientes:

1.º *Son exceptuados del campo de aplicación las personas que ocupan puestos de responsabilidad en la dirección y no realizan normalmente un trabajo manual.*

2.º *En ciertos casos podrá reemplazar el período de las veintidós horas a las cinco en que debe ser prohibido el empleo de las mujeres al de veintitrés a las seis.*

La adopción de estas dos modificaciones facilitará la ratificación del convenio por varios Estados miembros.

Reparación de las enfermedades profesionales.

El convenio adoptado en 1925 que asimilaba, en lo que al derecho de reparación se refiere, las enfermedades profesionales a los accidentes del trabajo había establecido una primera lista de enfermedades: el saturnismo, el hidrargirismo o mercurialismo y las afecciones carbuncosas.

La revisión adoptada amplía esta lista, en la

que se incluyen las enfermedades y afecciones siguientes:

Silicosis, con tuberculosis pulmonar o sin ella.

Intoxicación por el fósforo, el arsénico o sus compuestos, el benceno y sus derivados, los derivados halógenos de los hidrocarburos de la serie grasa.

Perturbaciones patológicas debidas al radium y otras substancias radioactivas y a los rayos X.

Epiteliomas primitivos de la piel.

Conservación de los derechos a pensión.

El año último habían sido adoptados seis proyectos de convenio sobre el seguro de invalidez, vejez, muerte. La cuestión compleja de la conservación de los derechos de los trabajadores migrantes había sido aplazada por falta de informaciones suficientes que sobre este punto no se obtuvieron en la consulta hecha a los Gobiernos.

En la Conferencia de este año el problema era sometido a una primera discusión. Por el procedimiento ordinario, la Conferencia votó las conclusiones de la Comisión, fijando las bases del cuestionario que ha de enviar la Oficina Internacional del Trabajo a los Gobiernos de los Estados miembros; se pronunció, pues, en favor de la institución de un sistema internacional para conservación de los derechos adquiridos o en vías de adquisición.

Además decidió, por mayoría de dos tercios de votos, que se inscriba esta cuestión en el orden del día de la próxima reunión, a los fines de discutir y adoptar un proyecto de convenio.

Prohibición del empleo de las mujeres en los trabajos subterráneos.

También en primera discusión se examinó la prohibición del empleo de las mujeres en los trabajos subterráneos de las minas de todas categorías.

Planteadas esta cuestión por el delegado obrero japonés en 1929, es ya objeto de reglamentación en casi todas las legislaciones mundiales. El trabajo de las mujeres en el fondo de las minas apenas si existe ya en algunos países orientales, y actualmente se procede a una eliminación progresiva.

La Conferencia decidió, como para la cuestión precedente, que quede inscrita en el orden del día de la reunión de 1935, a fin de adoptar un convenio que aplicará universalmente la prohibición, cuya necesidad se reconoce unánimemente.

La semana de cuarenta horas.

La semana de cuarenta horas dió lugar a una primera discusión en la reunión de 1933. Fueron preparados posteriormente dos proyectos de convenio para someterlos a la presente Conferencia; pero no han podido ser adoptados por falta de «quórum».

La Conferencia ha votado una resolución en la que se afirma que la reducción de la duración del trabajo continúa siendo una de las tareas principales de la Organización. Esta resolución comprueba que la Conferencia se ha mostrado favorable al principio de la reforma de las cuarenta

horas; pero no ha sido posible obtener el «quórum» para los proyectos examinados. Invita a la Oficina Internacional del Trabajo a reunir las informaciones complementarias y que el Consejo de administración inscriba de nuevo la cuestión en el orden del día de la próxima Conferencia para adoptar uno o varios proyectos de convenio.

Memorias y resoluciones.

Además de las cuestiones que podrían ser objeto de reglamentaciones internacionales, la XVIII reunión de la Conferencia examinó diversas memorias. En primer lugar, como en los años anteriores, se discutió la Memoria del director de la Oficina Internacional del Trabajo, y el debate dió lugar a que los delegados expresaran su punto de vista respectivo e hicieron sugerencias.

Como es reglamentario, la Conferencia examinó las conclusiones de la Comisión encargada de estudiar los informes enviados por los Estados miembros, de acuerdo con el artículo 408 del Tratado de Paz, sobre la aplicación de los convenios ratificados por ella.

Conoció también un informe de la Oficina sobre las grandes obras públicas, en el que se analizan los elementos esenciales de una política racional que remedie el paro y determine una mayor actividad económica.

Sobre esta cuestión, la Conferencia adoptó una resolución del delegado obrero francés, por la que se invita al Consejo de administración de la Oficina Internacional del Trabajo a que presente informes sobre las medidas adoptadas o previstas en los diversos países; en lo que concierne a los trabajos que tengan carácter internacional tratará el Consejo de facilitar la relación necesaria entre los diversos Estados interesados y de acuerdo con los organismos competentes de la Sociedad de Naciones.

En el mismo orden de ideas, la Conferencia adoptó una resolución relativa a la crisis económica, debida a iniciativas del delegado gubernamental de Dinamarca y del delegado obrero de Bélgica. En ella se expresa el deseo de que la Sociedad de Naciones haga las gestiones más rápidas y más continuas para realizar un programa de restauración económica y monetaria.

El nuevo Consejo de administración de la O. I. T.

Habiéndose puesto en vigor el nuevo artículo 393 del Tratado de Paz, ha sido posible ampliar la composición de dicho Consejo de 24 miembros a 32, de los cuales, 16 miembros gubernamentales (ocho de ellos a título permanente como representantes de los países más industriales y ocho elegidos por las delegaciones gubernamentales), ocho miembros patronales y ocho miembros obreros. La idea de la ampliación tuvo su origen en Washington, a fin de dar mayor representación a los países extraeuropeos y particularmente a los países de América latina; pero el trámite que hubo de seguirse no permitió hasta ahora realizar la iniciativa. En la votación de este año han resultado elegidos entre los ocho miembros de elección: España, Brasil, Argentina y Méjico.

Movimiento de Caja en el mes de abril de 1934

INGRESOS

	Pesetas.
Por cuotas	17.089,05
Por carnets	1.757,25
Por suscripciones al BOLETIN.....	144
Por venta de «Actas» y folletos.....	24,15
Por giros sin despachar que ingresan del mes de marzo.....	858,50
Total.....	20.748,10

GASTOS

Por gastos de Secretaría, personal, alquiler, etc.	5.389,24
Por imprenta	2.360
Por ídem	1.108,50
Por asistencias a Congresos.....	205
Por donativos	405
Por giros despachados después de ingresados en Caja.....	1.252,75
Por suscripción a periódicos y revistas	81,70
Total.....	10.802,19

RESUMEN

Suman los ingresos con la existencia anterior	89.566,10
Ídem los gastos del mes.....	10.802,19
Total.....	78.763,91
Más importe por no haber dado ingreso en marzo en el BOLETIN..	6
Capital para el mes de mayo.....	78.769,91

OTROS VALORES

En la cuenta de propaganda.....	4.971,05
En la Caja de Presos.....	6.564,55
En giros sin despachar.....	1.259,35
En suscripción víctimas de la fuerza pública	39,50
En ídem compañeros alemanes.....	2.180,70
En ídem compañeros de Austria.....	3.302,70
Total.....	97.087,76

JUSTIFICACION

En la cuenta corriente del Banco de Bilbao	1.683,15
En la Gráfica Socialista.....	5.000
En la cuenta corriente del Banco Hispano-Americano	27.999,30

Pesetas.

En la ídem de la Cooperativa Socialista	14.500,40
En la cuenta de suspensos.....	47.090,05
En saldos deudores.....	37,95
En sellos de Correos.....	288,43
En poder del tesorero.....	488,48
Total.....	97.087,76

Madrid, 30 de abril de 1934.—El tesorero, **Felipe Pretel Iglesias**.

DICTAMEN

Los que suscriben, Comisión revisora de cuentas de la Unión General de Trabajadores, certificamos que hemos revisado las cuentas correspondientes al mes de abril de 1934, encontrándolas conformes con los justificantes de ingresos y gastos. Para que conste, lo firmamos en Madrid, a 11 de julio de 1934. — Por la Unión de Empleados de Oficinas, **Julián Muñoz Lizcano**. — Por la Federación Española de Trabajadores de Banca y Bolsa, **Manuel Berenguer**. — Por el Arte de Imprimir, **Francisco Trillo**. — Por Albañiles El Trabajo, **Manuel Parazuelos**. — Por el Sindicato Metalúrgico, **Luis Valderrama**.

Con el fin de llevar a la práctica el acuerdo adoptado en el Congreso próximo pasado de establecer el sistema de partida doble en la contabilidad de esta Unión General de Trabajadores, hemos procedido a la apertura de los libros con fecha 2 de mayo de 1934; habiendo realizado previamente la valorización de los muebles y efectos, según inventario realizado, con el siguiente resultado:

ACTIVO

	Pesetas.	Pesetas.
Caja		438,50
Bancos:		
Banco de Bilbao.....	1.683,15	
Cooperativa Socialista...	14.500,40	
Banco Hispano - Americano	27.999,30	
		44.182,85
Mobiliario		65.492,70
Almacén:		
Carnets	3.412,50	
Actas XVII Congreso...	9.674,15	

	Pesetas.	Pesetas.
Folletos de contratos de trabajo	505,06	
Idem de la ley de Asociaciones	49,54	
		13.641,25
Federaciones:		
Española T. Tierra.....	44.892,92	
Unión Radiotelegrafista	52,50	
Sindicato Médico.....	23,50	
Barberos-Peluqueros	41,55	
Edificación	153,75	
Transporte	23,25	
Porteros	1,25	
		44.188,72
Secciones varias.....	452,55	
Acciones de la Gráfica Socialista....	5.000	
Fianzas	3.500	
Partidas en suspenso.....	9.485,22	
Deudores y acreedores.....	33.855,50	
		220.237,29

PASIVO

Proveedores:		
Gráficas Reunidas.....	14.078,70	
Gráfica Socialista.....	1.120,50	
Varios	196,28	
		15.395,48
Federación Sindical Internacional...		33.423,20
Suscripciones:		
Caja de presos.....	6.564,55	
Víctimas conflictos sociales	39,50	
Compañeros de Austria.....	3.302,70	
Idem de Alemania.....	2.180,70	
Cuenta de propaganda.....	4.971,05	
		17.058,50
Secciones varias.....		1.676,95
		67.554,13

RESUMEN

Importa el activo.....	220.237,29
Idem el pasivo.....	67.554,13
Capital activo líquido.....	152.683,16

La burguesía conquista en Francia y en Inglaterra el Poder político. La lucha de clases presenta desde este momento, en la teoría y en la práctica, un aspecto más definido y amenazador. Toca a muerto las campanas anunciando el fin de la economía burguesa.

CARLOS MARX

Balance en 31 de mayo de 1934**ACTIVO**

	Pesetas.	Pesetas.
Disponible:		
Caja	3.219,40	
Bancos	21.611,70	
		24.831,10
Exigible:		
Federaciones	44.552,97	
Deudores y acreedores...	34.355,50	
		78.908,47
Realizable:		
Almacén	13.296,43	
Acciones de la Gráfica Socialista	5.000	
		18.296,43
Inmovilizado:		
Mobiliario	65.492,70	
Fianzas	3.500	
		68.992,70
Cuentas de orden:		
Partidas en suspenso.....	8.667,62	
		8.667,62
Total.....		199.696,32

PASIVO

Exigible:		
Secciones varias	2.685,50	
Proveedores	4.017,13	
Federación Sindical Internacional	9.523,20	
Suscripciones	18.198,35	
		34.424,18
Capital:		
En 1 de mayo de 1934...	151.896,88	
Saldo de pérdidas y ganancias (mayo) benef.º	13.375,26	
Capital en 31 de mayo de 1934.....		165.272,14
Total.....		199.696,32

Certifico que, según el precedente inventario-balance, conforme con los libros, el capital líquido activo es de **pesetas ciento noventa y nueve mil seiscientos noventa y seis con treinta y dos.**

Madrid, 31 de mayo de 1934.—El tesorero, **Felipe Pretel Iglesias.**

Balance en 30 de junio de 1934**ACTIVO**

	Pesetas.	Pesetas.
Disponible:		
Caja	1.832,85	
Bancos	18.830,40	
		20.663,25
Exigible:		
Federaciones	46.932,47	
Deudores y acreedores...	25.970,50	
		72.902,97
Realizable:		
Almacén	17.750,16	
Acciones de la Gráfica Socialista	5.000	
		22.750,16
Inmovilizado:		
Mobiliario	65.687,70	
Fianzas	3.500	
		69.187,70
Cuentas de orden:		
Partidas en suspenso.....	2.760,82	
		2.760,82
Total.....		188.264,90

PASIVO

Exigible:		
Secciones varias	938,60	
Federación Sindical Internacional	4.523,20	
Suscripciones	23.151,20	
		28.593
Capital:		
En 1 de mayo de 1934...	151.896,88	
Saldo de pérdidas y ganancias:		
Beneficio en mayo.....	13.375,26	
Pérdida en junio.....	5.617,49	
		7.757,77
Intereses	17,25	
		159.671,90
Total.....		188.264,90

Certifico que, según el precedente inventario, conforme con los libros, el capital líquido activo es de **ciento ochenta y ocho mil doscientas sesenta y cuatro con noventa.**

Madrid, 30 de junio de 1934. — El tesorero, **Felipe Pretel Iglesias.**

DICTAMEN

Los que suscriben, Comisión revisora de cuentas de la Unión General de Trabajadores de España, certificamos que hemos revisado las cuentas correspondientes a los meses de mayo y junio de 1934, encontrándolas conformes.

OBSERVACIONES

Con motivo del cambio de sistema de contabilidad se registra en el inventario inicial en 2 de mayo un error en el pase de los asientos, por existencia en Caja de pesetas 49,98 (cuarenta y nueve con noventa y ocho), que queda subsanado en el día de la fecha.

También hacemos constar que la partida «sellos de Correos», que no consta en el inventario del 2 de mayo, está registrada en 5 de junio. Son pesetas 288,43.

La partida «cuenta de suspensos» pasa al inventario en 2 de mayo en la siguiente forma:

	Pesetas.
Fianzas	3.500
Partidas en suspenso.....	9.485,22
Deudores y acreedores.....	33.855,50
Total.....	46.840,72
Partidas correspondientes a deudas incobrables, que han sido amortizadas por acuerdo de la Comisión ejecutiva:	
Fernando Boan	140
Diferencias saldos mes de febrero....	109,33
Saldo en 30 de abril de 1934.....	47.090,05

Madrid, 11 de julio de 1934.—Para que conste lo firmamos: Por la Unión de Empleados de Oficinas, **Julián Muñoz Lizcano.** — Por la Federación Española de Trabajadores de Banca y Bolsa, **Manuel Berenguer.** — Por el Arte de Imprimir, **Francisco Trillo.** — Por Albañiles El Trabajo, **M. Parazuelos.** — Por el Sindicato Metalúrgico, **Luis Valderrama.**

Movimiento habido en la suscripción abierta a favor de los compañeros austriacos hasta el 30 de junio de 1934

INGRESOS

	Pesetas.
Asociación de Dependientes de Comercio de El Ferrol.....	25
Asociación de Dependientes de Comercio y Auxiliares de Granada.....	25
Sindicato de la Dependencia Mercantil de León.....	100
Asociación de Dependientes de Comercio de Torrelavega.....	25
Federación Local del Ramo de la Madera de Valencia.....	25
Tramoyistas de Oviedo.....	42,50
Asociación de Dependientes de Comercio de Jerez.....	26
Asociación de Dependientes de Comercio de Aljeciras.....	26,55
Trabajadores de Banca de Lugo.....	83
Trabajadores de Banca y Bolsa de Jerez de la Frontera.....	100
Trabajadores de Banca y Bolsa de Logroño.....	62,50
Trabajadores de Banca y Bolsa de Melilla.....	20
Trabajadores de Banca y Bolsa de Valencia.....	100
Trabajadores de Banca y Bolsa de Burgos.....	25
Trabajadores de Banca y Bolsa de Murcia.....	25
Trabajadores de Banca y Bolsa de San Sebastián.....	50
Trabajadores de Banca y Bolsa de Oviedo.....	120,15
Asociación de Empleados de Comercio de Santander.....	50
Sindicato de Trabajadores de Comercio de Bilbao.....	50
Asociación de Dependientes de Comercio de Castellón.....	25
Sindicato Ferroviario de Vigo.....	186,75
Obreros en Madera de Barcelona.....	75
Peluqueros de Santander.....	10
Electricistas de Melilla.....	50
Electricistas de Pontevedra.....	50
Obreros Electricistas de Bilbao.....	25
Sindicato Provincial de Trabajadores de Comercio de Madrid.....	127,30
Casa del Pueblo de Portugalete.....	96,20
Agrupación de Practicantes de Madrid.	18
Junta administrativa de la Casa del Pueblo de Murcia.....	10
Círculo Democrático de Retuerto.....	43,85
Sección Tipógrafos de Tolosa.....	63,20
Sindicato Azucarero de Villarrubia.....	50
Federación Gráfica (Sección de San Sebastián).....	188,60
Federación Española de Obreros Pape- leros.....	700

	Pesetas.
Obreros Cerveceros, Hielos y Gaseosas de Vigo.....	25
Federación Sidero-Metalúrgica.....	410,25
Unión General de Labradores de Candamo.....	16
Total.....	3.150,25

GASTOS

Envíos a la Federación Sindical Internacional.....	6.000
Gastos de envíos.....	33
Total.....	6.033

RESUMEN

Saldo en 19 de mayo de 1934.....	4.412,30
Suman los ingresos.....	3.150,85
Total.....	7.563,15
Suman los gastos.....	6.033
Saldo en 30 de junio de 1934...	1.530,15

Madrid, 30 de junio de 1934. — El tesorero, **Felipe Pretel Iglesias.**

Movimiento habido en la suscripción abierta a favor de los compañeros presos hasta el 30 de junio de 1934

INGRESOS

	Pesetas.
Agrupación de Villalonga.....	7,30
El Despertar Femenino, de Aceuche....	17,05
Federación de Banca y Bolsa (de varias recaudaciones).....	220
Peluqueros de Santander.....	10
Ramo de Alpargata de Crevillente.....	5
Total.....	259,35

GASTOS

Nuestra entrega a Oficios Varios de Torrelaguna.....	150
Gastos de giro de la partida anterior...	0,85
Total.....	150,85

RESUMEN

Saldo en 19 de mayo de 1934.....	5.393,95
Suman los ingresos.....	259,35
Total.....	5.653,30
Suman los gastos.....	150,85
Saldo en 30 de junio de 1934...	5.502,45

Madrid, 30 de junio de 1934. — El tesorero, **Felipe Pretel Iglesias.**

Movimiento habido en la suscripción abierta a favor de las víctimas habidas en los conflictos sociales en el mes de junio de 1934

INGRESOS

	Pesetas.
Albañiles El Trabajo, de Madrid.....	250
Grupo Sindical Socialista Ferroviario de Valladolid.....	25
Total.....	275

RESUMEN

Saldo en 30 de abril de 1934.....	39,50
Suman los ingresos.....	275
Saldo en 30 de junio de 1934...	314,50

Madrid, 30 de junio de 1934. — El tesorero, **Felipe Pretel Iglesias**.

Movimiento habido en la suscripción abierta a favor de los compañeros campesinos presos con motivo de la huelga

INGRESOS

	Pesetas.
Federación Gráfica Española.....	500
Sección Viena de Artes Blancas de Madrid	100
Federación de Trabajadores de Banca y Bolsa	500
Federación de Agentes del Comercio y de la Industria de España.....	150
Luz Lebeucher, de Valencia.....	25
Total.....	1.275
Saldo en 30 de junio de 1934...	1.275

Madrid, 30 de junio de 1934. — El tesorero, **Felipe Pretel Iglesias**.

Movimiento habido en la suscripción abierta a favor de los compañeros metalúrgicos de Madrid hasta el 30 de junio de 1934

INGRESOS

	Pesetas.
Toneleros de La Palma (Huelva).....	50
Sindicato Ferroviario de Vigo.....	186,75
Obreros del Muelle de San Esteban de Pravia	50
Oficios Varios de Fitero.....	25
Oficios Varios de Luarca.....	10
Oficios Varios de Valmaseda.....	25
Agrícolas y Oficios Varios de Casala-reina	18

Pesetas.

Tipógrafos de Córdoba.....	29,50
Grupo Sindical de Camareros y Similares de León.....	30
Estibadores Salineros de Melilla.....	100
Obreros Mineros de Silo de Calañas...	16,45
Obreros Mineros de La Arboleda.....	1.328
Obreros Mineros de La Arboleda.....	127
Grupo Sindical Ferroviario de Valladolid	50
Sindicato Minero (mina «Torrerera»)...	38,45
Casa del Pueblo de Ceuta.....	258,50
Grupo Sindical Ferroviario de Vigo....	240
Asociación Ramo Textil de Málaga....	80,30
Casa del Pueblo de Lérica.....	365,55
Sindicato de Artes Blancas de Aguilar del Campo.....	13
Agrícolas y Oficios Varios de Casala-reina	7,20
Juventud Socialista de El Centenillo...	45,90
Cinco compañeros de la Juventud Socialista de Mina de El Centenillo.....	83,90
Obreros Mineros de Silo de Calañas...	26,55
Total.....	3.205,05

GASTOS

Nuestra entrega a la Federación Sidero-Metalúrgica	3.178,50
Total.....	3.178,50

RESUMEN

Suman los ingresos.....	3.205,05
Idem los gastos.....	3.178,50
Saldo en 30 de junio de 1934...	26,55

Madrid, 30 de junio de 1934. — El tesorero, **Felipe Pretel Iglesias**.

Movimiento habido en la suscripción abierta a favor de los compañeros procesados de Hermigua (Canarias) hasta el 30 de junio de 1934

INGRESOS

	Pesetas.
Sindicato Minero de Huelva.....	50
Asociación de Empleados de Banca de Valencia	100
Total.....	150
Saldo en 30 de junio de 1934...	150

Madrid, 30 de junio de 1934. — El tesorero, **Felipe Pretel Iglesias**.

NOTAS INTERNACIONALES

IBEROAMÉRICA

COLOMBIA

Creación de un ministerio de Agricultura y Comercio.

El presidente de la República sancionó el 2 de noviembre de 1933 el decreto que pone en vigor la ley de 1931 referente a la creación de un ministerio de Agricultura y Comercio.

Según el decreto, el ministerio comenzará sus funciones el 1 de enero de 1934.

Ley sobre los empleados.

El Poder ejecutivo de la República de Colombia ha sancionado no ha mucho la ley sobre los empleados, cuyo texto publicamos a continuación:

«Artículo 1.º Se entiende por empleado particular, para los efectos de esta ley, toda persona que no siendo obrero realice un trabajo por cuenta de otra persona o entidad, fuera del servicio oficial, en virtud de sueldo o remuneración periódica o cualquiera otra forma de retribución.

Se entiende por patrono la persona por cuya cuenta se realice el trabajo del empleado. Si esta persona obra como intermediario entre el dueño de la empresa o negocio y el empleado, serán responsables solidariamente del cumplimiento de las disposiciones establecidas por esta ley el dueño y el intermediario.

Art. 2.º Todo contrato de trabajo con empleados particulares se extenderá por escrito, en papel simple, en dos ejemplares, para que conserve uno cada parte, y estará exento de los derechos de Timbre y Sanidad. Este contrato, además de las estipulaciones que acuerden los contratantes, y que no contraríen la presente ley, contendrá: las especificaciones del trabajo a que se obliga el empleado, la cuantía de la remuneración y la forma y período de pago; la duración del contrato, las causales que lo hagan caducar durante su vigencia y un certificado de salud expedido por un médico graduado escogido y pagado por el patrón.

En caso de controversia, el contrato antedicho será plena prueba de las obligaciones respectivas.

Los contratos que se hallen vigentes al entrar a regir esta ley deberán hacerse constar por escrito y sujetarse a sus disposiciones en un término de sesenta días, a partir de la sanción de ella.

La Oficina general del Trabajo redactará y publicará un modelo del contrato de trabajo de que trata esta ley, cuyos términos generales se observarán al hacer que las partes incluyan estipu-

laciones que no violen disposiciones legales. En caso de que no se haya firmado el contrato, éste se presume celebrado de acuerdo con los términos del modelo publicado por la Oficina general del Trabajo en el «Diario Oficial». Dicha entidad revisará, cuando lo estime conveniente, el mencionado modelo, con el fin de hacerle las modificaciones que le experiencia aconseje.

Art. 3.º Los empleados particulares gozarán de las siguientes concesiones y auxilios:

a) Quince días de vacaciones, remuneradas, por cada año de servicio, de conformidad con las remuneraciones ordinarias devengadas.

La época de vacaciones será señalada por el patrón.

b) Auxilio de enfermedad, hasta por ciento veinte días, a la data siguiente: las dos terceras partes del sueldo durante los primeros sesenta días de enfermedad, la mitad para los treinta días siguientes y la tercera parte para el tiempo restante.

c) En caso de despido que no sea originado por mala conducta ni por incumplimiento del contrato comprobados, tendrán derecho a un auxilio de cesantía equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio que presten o hayan prestado, y proporcionalmente, por las fracciones de año. Para los efectos de este artículo, se tomará el sueldo medio que el empleado hubiere devengado en los tres últimos años de servicio, y si hubiere trabajado por un tiempo menor, se tomará el sueldo medio de todo el tiempo de trabajo.

Parágrafo 1.º Al auxilio de cesantía tendrá derecho el empleado, aunque su retiro del servicio obedezca a terminación del contrato por vencimiento del plazo de duración, excepto, en este caso, cuando el patrón se allane a renovarlo en condiciones iguales a las anteriores y el empleado no acceda a ello.

Parágrafo 2.º Las disposiciones de este artículo se aplicarán también a los empleados públicos u oficiales, mientras no se dicte ley especial sobre ellos.

Parágrafo 3.º El auxilio de cesantía no tendrá aplicación para los empleados públicos que tienen período fijo y que sean provistos por medio de elección.

Art. 4.º Ningún empleado podrá ser obligado a trabajar más de ocho horas por día.

Art. 5.º En los casos en que un empleado preste servicio activo en el ejercicio o sea llamado a prestar el servicio militar obligatorio, no se considerará interrumpido el contrato de trabajo y, en consecuencia, conservará el derecho a desempeñar el cargo para el cual fué contratado.

Art. 6.º En igualdad de circunstancias no puede concederse a los empleados extranjeros, por Empresas nacionales o extranjeras, que trabajen

dentro del país mayores garantías o ventajas que las otorgadas a los empleados colombianos.

La infracción de este mandato será penada con multas de 200 a 1.000 pesos a cargo del patrón y en favor del Tesoro nacional.

Art. 7.º Mientras se establece una jurisdicción especial para la solución de los conflictos del trabajo que puedan originarse con motivo de la aplicación de las disposiciones de la presente ley, dichas controversias se tramitarán de conformidad con el procedimiento señalado en el título 46 del libro XI de la ley 105 de 1931. Las solicitudes y actuaciones que se adelantan a este respecto estarán exentas de los impuestos del papel sellado y timbre nacional.

Parágrafo. Las multas y demás sanciones establecidas por las leyes vigentes sobre trabajo serán aplicadas de oficio o a petición de cualquier ciudadano, Sindicato o de las Federaciones de Empleados. El valor de las multas ingresará en los respectivos Tesoros municipales.

Art. 8.º Las garantías concedidas por esta ley a los empleados no podrán renunciarse en ninguna forma.

Art. 9.º Facúltase al Poder ejecutivo para agregar un miembro más a la Comisión de asuntos penales y penitenciarios de que se trata en el artículo 3.º de la ley de 20 del presente año, en caso de que considere conveniente dicho aumento para mayor eficacia de los trabajos a ella encomendados. Si el Poder ejecutivo hiciera uso de esta facultad, corresponderá a la mencionada Comisión hacer el nombramiento respectivo mediante acuerdo entre sus miembros. La Comisión tendrá un secretario, de su libre nombramiento y remoción, con la asignación mensual que le fije el Gobierno.

Art. 11. Esta ley regirá desde su sanción.»

CHILE

La inspección del trabajo.

Un decreto del 15 de noviembre de 1933 unifica los diversos decretos y disposiciones legislativas a la inspección del trabajo.

El servicio de inspección dependerá del ministerio de Trabajo. Tendrá a su cargo el estudio de cuantos asuntos toquen a las relaciones entre el capital y el trabajo, buscar el mejoramiento de la vida de los asalariados y velar por el cumplimiento estricto de la legislación social.

Por otra parte, el servicio de inspección del trabajo tiene las atribuciones siguientes: ayudar al ministro del ramo en la resolución de todas las cuestiones que se refieren a la ejecución o a la reforma de la legislación social; velar por el cumplimiento de las disposiciones del Código de Trabajo de la legislación de Previsión y de las leyes que regulan la cooperación; estudiar los problemas del régimen de trabajo, sobre todo en lo que concierne a los sistemas de trabajo y a los salarios.

Incumbe, asimismo, a la inspección general del trabajo estimular la celebración de Congresos dedicados al estudio de los problemas sociales.

GUATEMALA

Ley sobre la conservación de las carreteras.

El Gobierno de Guatemala ha publicado, el 19 de diciembre de 1933, un reglamento para la aplicación de la ley de 31 de octubre del mismo año sobre la conservación de las carreteras.

Se exige a los hombres, de dieciocho a sesenta años de edad, prestación personal para la conservación de las carreteras, que podrá ser realizada en trabajo o dinero. Se exceptúan los militares en activo, las personas que ejerzan gratuitamente funciones municipales, los agentes de la policía urbana y rural, y, por último, los maestros de escuela que no tengan otros ingresos que su sueldo.

HONDURAS

Proyecto de ley sobre conciliación y arbitraje.

Un proyecto de ley creando Tribunales de conciliación y arbitraje para los conflictos colectivos del trabajo fué presentado el 2 de enero de 1934 al Congreso de la República de Honduras.

El proyecto prohíbe la cesación del trabajo en industrias, ferrocarriles, en la agricultura y en el comercio, siempre que no se haya acudido antes a medios conciliatorios.

Si no hubo acuerdo directo, las partes deben someter el conflicto a la conciliación obligatoria. Se crean, a este objeto, en todo el país, Tribunales de conciliación, formados por dos patronos y dos obreros, bajo la presidencia de los gobernadores. Las partes están obligadas a exponer el desacuerdo que las divide ante el Tribunal, en un plazo de veinticuatro horas. Si no logran entenderse, el conflicto podrá ser llevado ante el Tribunal de arbitraje, en el que figuran uno o tres árbitros, designados por los interesados o por el Gobierno, si éstos no llegan a ponerse de acuerdo sobre la composición del Tribunal. La resolución de este Tribunal, que deberá ser tomada por mayoría de votos, tiene que ser acordada en un plazo de ocho días; los fallos son obligatorios.

Se reconoce el derecho de huelga en el proyecto, que dice que para declarar una huelga son precisos los votos de los dos tercios del número total de obreros o empleados del establecimiento afectado.

Los funcionarios de la policía, los de Correos y Telégrafos, los militares, los del Estado y Municipio, no gozan de dicho derecho.

MEJICO

Congreso femenino. — El trabajo de la mujer.

El segundo Congreso de las Obreras de la Ciudad y del Campo se celebró en Méjico a fines de noviembre de 1933.

Se leyeron en él diversas Memorias sobre la situación de las obreras, Memorias que coinciden en la necesidad de que se lleven a la legislación federal del trabajo ciertas mejoras beneficiosas a

la mujer, sobre todo las referentes a la reducción de la jornada legal de trabajo, a la prolongación de los permisos para no asistir al trabajo durante el embarazo, a la mejora en los salarios femeninos, particularmente tratándose de la industria a domicilio, y a la aplicación efectiva de la igualdad de salarios que se establece en el mencionado Código.

Tomóse asimismo el acuerdo de pedir la creación, dentro del marco de la Constitución de la República, de un Consejo consultivo femenino que entienda en todos los problemas relativos a la situación legal de la mujer mejicana.

NICARAGUA

Proyecto de Código de Trabajo.

El Sr. Sofonias Salvatierra, ministro de Agricultura y Trabajo de Nicaragua, presentó al Congreso Nacional en diciembre de 1933 un proyecto de Código de Trabajo.

El Código en cuestión contiene 168 artículos y está dividido en cinco libros.

El libro I trata de la organización industrial.

El II, del contrato de trabajo, de la duración del trabajo y de los salarios, del trabajo de la mujer y del niño, del de los criados, del de los obreros agrícolas y del mar, del contrato de aprendizaje, de la nacionalidad de los trabajadores, de la protección al trabajo, del derecho de ejercer un comercio en las Empresas agrícolas e industriales, de las huelgas y locaúts.

El libro III se ocupa de los accidentes del trabajo, de la asistencia médica y de los primeros cuidados en caso de accidente del trabajo, de la incapacidad para el trabajo y de seguros e indemnizaciones.

El IV trata de los Tribunales del Trabajo, de su actuación, del recurso contra sus fallos, de la aplicación de éstos, de las facultades disciplinarias de los Tribunales del Trabajo y de la inspección.

En fin, el libro V se refiere a la creación de una Caja nacional de seguros contra los accidentes del trabajo.

URUGUAY

Una Cooperativa nacional.

La Asociación Cooperativa del Uruguay, que empezó a funcionar en febrero de 1933, ofrece un carácter particular, debido a la multiplicidad de sus actividades, a su estructura y al hecho de que extiende su radio de acción a todo el país.

Dicha Asociación, cuyo local social está en Montevideo, contaba en noviembre de 1933 con 5.000 miembros. Comprende nueve Secciones, siendo la más importante de ellas la de consumo, que se ocupa, entre otras cosas, en la distribución de la leche, del pan y de la carne.

La Sección médica ha instalado en Montevideo y en otras dos ciudades policlínicas médicas y dentales, que tienen a su disposición, además de un jefe de policlínica, 48 médicos, 12 dentistas, etcétera. Está en estudio la creación de un sanatorio cooperativo.

La Sección cultural ha organizado dos Universidades populares que cuentan, en conjunto, con 1.600 estudiantes. Cada Universidad tiene su biblioteca. Se dan en ellas las enseñanzas más diversas, incluidas las de cooperativismo.

Las otras Secciones son las siguientes: servicio de reparación de automóviles, servicio social, con dieciocho enfermeras; cultura física, urbanismo y jurídica.

Cambio de domicilio del Secretariado Regional de Cataluña

Ponemos en conocimiento de todas nuestras Secciones y Federaciones que tanto el Secretariado Regional de Cataluña como las Secciones que la Unión General de Trabajadores tiene en Barcelona, que hasta ahora habían estado domiciliadas en la calle de Primero de Mayo, número 7, se han trasladado todas ellas al Pasaje de la Banca, número 2.